Simón Pachano

LA UTOPÍA REACCIONARIA

Radiografía del relato correísta

PESCADITO EDITORIALES

2023

La utopía reaccionaria

Radiografía del relato correísta

Simón Pachano

Hay tiempos en que callar o hablar es igualmente riesgoso
Erasmo de Rotterdam

Mientras no es demasiado tarde, es demasiado pronto
Curzio Malaparte

Este libro está dedicado a quienes nunca lo leerán,
pero lo condenarán militantemente en el infierno
de las redes sociales

Índice

Confesión de parte

El fin
El control averiado
La mesa servida
La traición
Foto de familia
La apostasía
RC-RC=0
Los lunes de esos tiempos

El inicio
Entre Procusto y Penélope
Los juegos suicidas
El golpe de los manteles
Vino viejo en odres viejos
La patada al tablero
El nacimiento del caudillo
El correazo: la campaña premonitora
Los lunes de esos tiempos

La refundación
Las raíces heroicas
El Sumak Kausay
Neoconstitucionalistas y socialistas del siglo XXI
Del singular al plural
El desequilibrio
El leviatán criollo
Los lunes de esos tiempos

El enemigo al acecho
Sinónimos, metáforas y sinécdoques: la gramática revolucionaria
La lucha por las creencias: la prensa corrupta
La opinión al banquillo
El 30s: hallazgo e invención del enemigo
La apropiación del relato
Los lunes de esos tiempos

Hybris en el trópico andino
La herencia del adanismo
Las izquierdas y el boy scout
Reaccionarios del mundo ¡uníos!
El agujero negro de la hybris
La utopía reaccionaria
Los lunes de esos tiempos

Confesión de parte

Este libro es una reflexión personal sobre un largo, inusual y complejo período de la vida política ecuatoriana. No es un recuento histórico, ni un texto académico sujeto al método y a la comprobación. Es, propiamente, un ensayo, en el sentido que tiene esta palabra fuera del mundo sajón, esto es, como el tratamiento libre de un tema, en el que el análisis no sacrifica la opinión del autor. Por tanto, contiene posiciones personales acerca de los hechos abordados. Pero, al ser enfoques que se derivan de valores, como libertad, democracia o tolerancia, buscan alejarlo de la subjetividad que tendría en caso de someterse exclusivamente a las preferencias personales. Por tanto, me hago cargo sin reparos de los juicios de valor que contiene, en el sentido indicado y no en el de una posición militante a favor o en contra de algo o de alguien.

Varios motivos me indujeron a escribir este libro. El primero fue mi condición de testigo-participante permanente de los hechos que se iban sucediendo. Esa doble condición, de observador y de sujeto activo, se deriva de la combinación nada fácil y no siempre acertada de dos actividades que desarrollo desde hace mucho tiempo. La investigación y la docencia en el área de la ciencia política, por un lado, y la escritura semanal de una columna en un diario, por otro lado, me ponen en contacto directo con la política. Aunque en el campo académico nunca llevo al aula la política coyuntural, estoy consciente de que es imposible ignorarla, especialmente en un medio atrapado en el inmediatismo. Como les ocurre a todos los politólogos de este lado del mundo, la coyuntura está siempre presente en mi actividad. Irónicamente, me gusta decir que, al contrario de lo que ocurre en la academia norteamericana, el politólogo latinoamericano es una persona que lee el periódico del día y conoce el nombre de algunos ministros del gabinete. La coyuntura nos envuelve y, antes que resistirla, conviene asumirla. Siguiendo los consejos de Wright Mills, al registrar el día a día en un ejercicio de artesanía intelectual podemos construir una manera adecuada de estar en el mundo.

Adicionalmente, como cualquier persona que vivió y observó lo sucedido en Ecuador entre los años 2007 y 2017, me sorprendió que un presidente de la República fuera reelegido en dos ocasiones consecutivas y que permaneciera ininterrumpidamente por diez años en el cargo. Al ser algo que no tenía antecedentes en la historia reciente del país, reunía todas las características para ser calificado de insólito. Aún más sorprendente fue que eso ocurriera después de que en los diez años anteriores hubiera un promedio de un gobierno por año, incluyendo a dos juntas que ocuparon el Palacio de Gobierno en un mismo día. La inestabilidad, convertida en patrimonio nacional, hacía presagiar una vida corta para el gobierno del profesor de una universidad privada y antiguo *boy scout* que anunciaba una revolución sin contar con el apoyo de una fuerza política organizada, sin un pasado militante y sin más trayectoria pública que unos cortos meses en un ministerio. Por sí solo, esos hechos –la llegada sin trayectoria y la permanencia sin más apoyo que el carisma- eran razones suficientes para despertar el interés.

A ese motivo se unieron las características de su gestión. Su decisión de intervenir en todos los campos de la vida política y social lo configuró como un gobierno muy diferente a los que lo precedieron desde el inicio del período democrático. Todos ellos –unos más, otros menos, por supuesto- intentaron superar los límites que les ponían las normas, pero debieron ceder ante las restricciones que se derivaban del juego de fuerzas políticas. Incluso quienes eran más reacios a ajustarse a los límites institucionales terminaron rindiéndose cuando los bloqueos políticos se hicieron insalvables. Por el contrario, desde antes de acceder al gobierno, ya en la campaña electoral, Rafael Correa se lanzó en picada no solamente contra las normas que le estorbaban, sino fundamentalmente contra quienes ponían -o él consideraba que ponían- barreras para su avance. De ahí en adelante quedó claro que para él no habría términos medios. Los oponentes eran enemigos y debían recibir el trato correspondiente. Nunca escondió su posición en ese aspecto. Con esa convicción emprendió una apuesta que parecía suicida –y que, sin duda, le causó serios problemas- pero que le permitió romper el récord de permanencia de un mandatario y sobre todo imponer su voluntad. Exclusivamente la suya.

En efecto, su largo paso por el gobierno estuvo marcado por el predominio absoluto de su liderazgo individual. Aunque la historia ecuatoriana está plagada de caudillos civiles y militares, todos ellos debieron desempeñarse en ambientes relativamente hostiles que pusieron límites a su crecimiento, erosionaron su éxito, en ocasiones pusieron fin a sus mandatos y en otras acabaron con sus vidas. Nada de eso ocurrió con Correa. Fue una excepción en la historia nacional del caudillismo. Si bien es cierto que en los últimos años de su gestión se debilitó el encantamiento en que mantuvo a sus votantes, no ocurrió lo mismo entre sus seguidores más cercanos, aquellos que lo hacían por razones ideológicas y políticas. Sin dudarlo, estos le entregaron el monopolio de la palabra y de las decisiones.

Esa conducta de los sectores más politizados despertó mi interés y me convocó a bucear en la relación establecida entre el líder y sus cuadros políticos. Es conocido que el liderazgo es una relación de ida y vuelta, siempre vertical, de orden y obediencia entre el caudillo y el grupo que le rodea y le sigue fielmente. Por ello, me sorprendía al comprobar que este grupo estaba conformado mayoritariamente por antiguos militantes de la variopinta izquierda -algunos de ellos con cierta cercanía al mundo intelectual- que habían aceptado dócilmente una relación de sumisión. Ciertamente, en la historia de la izquierda había los antecedentes de la claudicación de los viejos bolcheviques ante Stalin y de los barbudos cubanos del Granma ante Castro. No dejaba de asombrarme que lo mismo pudiera ocurrir en el siglo XXI. Sobre todo, que lo hicieran esas mismas izquierdas que aún deben haber tenido fresco el dolor –en el cuerpo y en el orgullo- por las patadas que pusieron fin a sus vergonzosas colaboraciones con Abdalá Bucaram y Lucio Gutiérrez (herederas de la que recibieron de Velasco Ibarra seis décadas antes).

Además de esa relación desigual en la que hay dominación y sumisión, el tema del liderazgo me interesaba por otro motivo. En su estudio hay una zona apasionante pero brumosa, que es la de las características o las cualidades de la persona que lo posee y lo ejerce. No era mi interés entrar en el análisis psicosocial y político de Rafael Correa,

básicamente porque no tengo la formación ni los instrumentos para hacerlo. De ello se ocupan la psicología aplicada y la neuropolítica, que son campos en los que no me atrevo a entrar porque me resultan ajenos. Pero, la observación sistemática de sus actos públicos, de sus expresiones y sobre todo de su discurso, daban pistas para intuir que la condición de líder venía también desde adentro y no solo se configuraba por la relación con sus seguidores. De muchas formas dejaba traslucir su convicción de verse a sí mismo como alguien destinado a un fin superior. En el interior de esa zona apasionante pero brumosa se podía advertir los rasgos del síndrome de *hybris*. Todo un desafío para el análisis y la interpretación.

Un hecho adicional que me motivó a escribir este libro fue el rápido derrumbe del experimento correísta. Lo que se veía como un cambio radical, que partió desde la promulgación de una nueva constitución y abarcó todos los aspectos imaginables (especialmente los que se encierran en los sentimientos de las personas), se derrumbó con un hecho tan puntual, como fue la alternancia en la presidencia. Lo que en los regímenes democráticos constituye un hecho ordinario y forma parte de las reglas del juego, en este proceso se constituyó en el comienzo del fin. La decisión de su sucesor de seguir su propio camino, la *traición*, como la calificaron, puso fin a un modelo político que estaba pensado para perdurar por algunos decenios (trescientos años auguraban para la Constitución los más optimistas). Fue otro hecho que requería alguna reflexión.

Por encima de todas esas razones -y abarcándolas-, el principal motivo que me llevó a escribir este libro provino de lo que sucedía con la débil democracia ecuatoriana. Durante la campaña electoral ya me preocuparon las declaraciones y actitudes de Rafael Correa (que se sintetizaron en el spot publicitario del cinturón, *la correa*, como instrumento para poner orden). Con el paso del tiempo se incrementó esa deriva, cuando arremetía en contra de valores democráticos básicos, como la separación de poderes, la limpieza de las elecciones, el respeto a la oposición y, sobre todo, la vigencia de las libertades. Más que analizar cada uno de esos hechos (que en alguna medida lo hice en un capítulo del libro *Giro político y democracia en Sudamérica y Ecuador*), me interesaba reflexionar sobre la lógica que los movía. Esto me llevó hasta el *Proyecto*, ese apelativo con el que buscaban darle un contenido y una trascendencia ideológica y programática a su *Revolución Ciudadana*. Esa vista de conjunto no dejaba dudas de que había un objetivo que colisionaba con los principios democráticos.

Sistemáticamente, desde múltiples frentes y en los ámbitos más diversos de la gestión pública y de la convivencia social, se fue perfeccionando ese objetivo. Fue la construcción de una *utopía*, entendida como un lugar y un destino imaginados a los que nunca se llega. Gracias al extraordinario despliegue publicitario y al infatigable discurso del líder, se fue construyendo la quimera cuyo secreto conocían solamente él y algunos integrantes del círculo más cercano. A los demás se les vendía simplemente la esperanza de un futuro algo diferente a la realidad en que vivían. Su papel era el de comparsas, debían aparecer en la escena cuando se necesitaba que las multitudes refrendaran las decisiones tomadas en la altura. La movilización, esporádica y nunca espontánea, se hacía en nombre de

valores no solamente antidemocráticos, sino abiertamente en contra del avance de los derechos. Se había implantado una *utopía reaccionaria*.

Finalmente, este libro es un diálogo en dos tiempos. Uno es el tiempo de la escritura del manuscrito final, cuando ya había finalizado el ciclo de los gobiernos de Rafael Correa. Es el de la visión de conjunto y de la mirada retrospectiva, esa mirada que uno hace cuando conoce el desenlace del proceso. Por tanto, es una reinterpretación de los hechos a partir de sus resultados. El otro tiempo es el de la mirada del momento en que ocurrían esos hechos y que los fui analizando en la columna que mantengo en el diario El Universo. Esos artículos (alrededor de quinientos en ese período) son un registro y, en muchos casos, un anticipo -equivocado o acertado- de lo que podía suceder más adelante. *Mutatis mutandis*, se podría decir que con esta última mirada yo seguía el libreto de la novela negra, en la que se conoce el crimen, pero el culpable solamente se descubrirá en la última página. La otra mirada es la que usualmente hace el académico, que conoce al culpable y a partir de esto busca los pormenores del crimen. Para compartir con los lectores ese diálogo entre dos tiempos y apreciar las permanencias y los cambios en mi interpretación de los hechos, decidí agrupar algunos artículos al final de cada capítulo bajo el título *Los lunes de esos tiempos*.

El fin

Tres mil setecientos ochenta y dos días. Ciento veinticuatro meses y nueve días. Diez años y una semana y media, un decenio. Cualquiera que sea la manera de decirlo, el tiempo que Rafael Correa desempeñó la presidencia de la República fue muy largo, el más extenso que un presidente la ha ocupado de forma continua en toda la historia del Ecuador. Ese hecho por sí solo dice mucho. Independientemente del balance que se haga de su gestión, en el futuro habrá que referirse a este no solo como la larga presencia de una persona en la presidencia, sino como un ciclo histórico diferenciado. Por su duración y por sus acciones, marca un antes y un después. Es altamente probable que se lo recuerde como el *correísmo* –uno más de los caudillismos que han marcado al país- y no como la *Revolución Ciudadana*, aquel calificativo acuñado para la campaña que después sirvió como marca de identidad de todo el período.

De lo que no cabe duda es que tuvo un punto de inicio y uno de finalización. Es verdad que fue un corte con lo anterior. También es cierto que llegó a su fin. Aunque renazca en el futuro, no será el mismo. No tuvo continuación. No podía tenerla, porque ya no estuvieron presentes los pilares que lo sostenían. Fue un final que llegó tanto en términos temporales como políticos. Temporales, porque concluyó la insólita y constitucionalmente discutible sucesión de mandatos de una sola persona. Políticos, porque, aunque su sucesor fue escogido por él, le resultó imposible asegurar la continuación del proceso de los diez años previos. Ya no estaba presente la bonanza económica que, por alineamiento de los astros o por alguna razón parecida produjo el incremento de precios de las materias primas en el mercado mundial (el famoso *boom de las comodities*) que favoreció a los países exportadores, independientemente del signo político de sus gobiernos. Ese fue el telón de fondo y el combustible de por lo menos ocho de los diez años de correísmo (los dos últimos se mantuvo a lomo de endeudamiento). Tampoco estuvo en la escena el fuerte liderazgo personal del presidente, que en parte iba con su propia personalidad, pero en parte se explicaba por esas mismas condiciones económicas y políticas favorables (además, obviamente, del histórico apego del país a los caudillismos). La bonanza era ya un recuerdo del pasado, el liderazgo no es –nunca ha sido- endosable y, a lo mucho, puede convertirse en un control remoto para manejar al sucesor. Pero, esto último –que podría tener consecuencias impredecibles- tampoco sucedió. Sí, así como todo estuvo dispuesto para el inicio, todo estuvo donde debía estar para marcar el fin.

Mirando atrás en el tiempo, se puede comprobar que, en 2017, cuando concluía su último mandato, las condiciones que hicieron posible su primera elección en el año 2006 ya no formaban siquiera parte del recuerdo colectivo. Muy pocas personas recordaban que en aquel lejano momento había una explosiva mezcla de secuela de la crisis económica, desencanto político e insatisfacción social. La economía recién comenzaba a estabilizarse y a despegar gracias a la dolarización, pero el tiempo transcurrido desde que se tomó esa medida era insuficiente para que la gente perdonara a los políticos, a quienes –con bastante razón, aunque con mucho sesgo y sin discriminación- echaba la culpa de dos

décadas perdidas. Eran los años en que se coreaba, alegre e irresponsablemente, *que se vayan todos*. Diez años más tarde, cuando la caída de los precios del petróleo en el mercado mundial determinó el final del mayor auge de la economía ecuatoriana, el gobierno trataba desesperadamente de impedir que volviera ese sentimiento de insatisfacción con el pasado. Es que, para ese momento, el pasado ya le incluía a él y a sus gobiernos, a los gobiernos del correísmo. El pasado se resumía en esos diez años de historia. Y, en ese amplio escenario reinaba un único personaje. El pasado era él.

La grave situación económica, que muy pronto ahogaría a su sucesor, debía ocultarse con préstamos usurarios y con una larga fila de proveedores impagos. La reaparición de las consecuencias sociales y políticas, que diez años antes fueron el terreno ideal para el encumbramiento del *outsider* dispuesto a patear el tablero, fue evitada con distorsiones de la economía que pronto pasarían su onerosa factura. Debía lucir despejado el paisaje en esos últimos días. Había que impedir que en la fase final de sus gobiernos se hicieran evidentes unas condiciones similares a las que posibilitaron su primera elección. Ya no contaba con todo aquello que le aseguró altos niveles de aceptación ciudadana, pero esa odiosa realidad no debía ser de dominio público. Debía instalarse en las cabezas de la gente que *la mesa quedaba servida*.

La dura realidad, determinó que el camino abierto con la posesión de Lenin Moreno en mayo de 2017 no fuera –no podía ser de ninguna manera- la continuación de la *Revolución Ciudadana*. Esta, independientemente de lo que significara, era una marca registrada con el nombre y el apellido de una sola persona que, además, solo podía tener protagonismo dentro de condiciones económicas propicias. Sin Rafael Correa y con una economía en crisis, era imposible que se mantuviera incluso como una promesa a cumplirse en el largo plazo. En los dos últimos años de la gestión de Correa, cuando cayeron los precios del petróleo en el mercado mundial, se puso en evidencia la inviabilidad económica de su proyecto económico y político. A lo largo de esos dos años, solamente el endeudamiento apuntaló al gasto público que fue el motor de la economía durante todo el período. Con la renta petrolera reducida a niveles que podían considerarse normales para cualquier gobierno, pero insuficientes para uno que dependía económica y políticamente por entero de la liquidez, solo quedaba la búsqueda desesperada de préstamos. Que fueran caros, con condiciones leoninas, que se hipotecara el petróleo (suponiendo ingenuamente que brotaría en décadas posteriores), nada de eso importaba. Había que sostener la utopía, mantener el relato.

El carisma presidencial hizo lo suyo para conservar la credibilidad y mantener la aprobación en niveles relativamente altos. Pero no era suficiente para asegurar la continuidad del proceso (o del *Proyecto*, para decirlo en el tono épico, de trascendencia histórica, pero a la vez de utopía lejana e inalcanzable, que gusta a sus seguidores). Por ello, resulta difícil de explicar su decisión de no presentarse como candidato. No está claro qué le hizo desistir de la reelección. Si fueron razones políticas o personales, si fue el temor a hundir su imagen en la situación que él mejor que nadie sabía que se aproximaba, lo cierto es que, por sí y ante sí, decidió salir del escenario. Después de un

cuestionado proceso en que la Asamblea legislativa aprobó la posibilidad de reelección indefinida, entre otras reformas constitucionales (amparadas en el eufemismo constitucional de enmiendas), él obligó a que constara una disposición transitoria que le impedía presentarse en esta ocasión. Más allá de la disputa jurídica abierta por la introducción de este impedimento en el segundo debate sin que hubiera constado en el primero como establecía su propia Constitución, las dudas acerca de las causas que le llevaron a esa decisión no han sido despejadas.

El control averiado

Por lo menos dos hipótesis se tejieron al respecto. La primera sostenía que el objetivo era dejar el peso de la crisis en su sucesor, fuera este de sus propias filas o, mejor aún, que proviniera de la oposición. La economía le estallaría en las manos y el clamor por el retorno del líder habría superado a las múltiples veces que al jurararra –otro caudillo, algo más ilustrado pero igualmente impredecible- jugó con la figura del *gran ausente*. Sin embargo, era una apuesta de riesgo, no solo porque el siguiente gobierno estaría prácticamente obligado a poner en evidencia la situación heredada y a desmantelar el modelo rentista, sino también porque si ese sucesor llegara a completar su mandato de cuatro años con indicadores positivos, lograría borrar de la frágil memoria colectiva el recuerdo del correísmo, que para esas fechas ya sería borroso. Adicionalmente, más allá de la economía, una vez fuera del poder Correa ya no tendría los recursos políticos que le permitieron controlar a fiscales y jueces, con el riesgo de enfrentar múltiples juicios. La experiencia de dos presidentes impedidos de regresar durante dos décadas y otros dos que cumplieron penas de prisión, era un antecedente que seguramente estuvo entre los factores de riesgo observados por sus asesores. Pero, aun así, tomó la decisión de no presentarse a la tercera reelección.

La segunda hipótesis, más probable y prácticamente comprobada por los hechos posteriores, apuntaba a la combinación de la mencionada figura del control remoto con su condición de jefe de una oposición sin cuartel. Suponían, quienes la planteaban, que como expresidente y, sobre todo, como líder único e indiscutido de su revolución, manejaría directamente a su sucesor en caso de ser de su propio movimiento. El margen de acción que tendría ese presidente sería mínimo, como mínimo había sido, durante los diez años, el espacio que dejó para cualquier figura alternativa en su gobierno y en su movimiento político. Ese flanco estaría cubierto por la inercia propia de un período en que no había otra voz que la suya. El otro lado, el que se dibujaba por un posible triunfo de un opositor, se resolvería con su presencia activa en la política nacional, apostando a la acción desestabilizadora más que al debate desde un cargo de elección. En cualquiera de los dos casos, las cartas le favorecían.

La hipótesis del control remoto pareció configurarse con la elección de Lenin Moreno, vicepresidente en sus dos primeros períodos (2007-2009 y 2009-2013), beneficiado por un lavado de imagen de tres años en Ginebra en un cargo que tuvo todos los rasgos de una sinecura. Como seguro adicional, para evitar las veleidades autonomistas de Moreno

(expresadas en algunas entrevistas), le impuso como compañero de fórmula para la elección a Jorge Glas, su otro exvicepresidente (2013-2017). Una persona de escasas luces y amplias ambiciones –capaz de copiar su tesis de ingeniería en *El rincón del vago*, ducho en recorrer los vericuetos de los negocios estatales-, tenía todas las credenciales para ocupar el lugar de hombre de entera confianza. Como guardián que era de secretos inconfesables, jamás podría traicionarle porque se traicionaría a sí mismo. Sería, sobre todo, el reemplazo ideal de Moreno en el caso de un final abrupto de su mandato, que muy probablemente podía producirse por fuego amigo. Glas sería la onda electrónica que, desde el mando del control, lleva la orden de activar remotamente al aparato.

Todo parece indicar que la estrategia iba por esa vía. Con su incontinencia verbal, Correa la puso en evidencia en múltiples discursos y declaraciones, entre el 2 de abril de 2017, en que se produjo el triunfo en la segunda vuelta y el 24 de mayo día de la posesión del cargo. El objetivo era tener el mando de ese control para dictar cada palabra y guiar cada paso de Moreno. Todas esas decisiones quedaron gráficamente establecidas como las líneas rojas que marcaban con precisión y rigidez el espacio en que debería moverse el próximo gobierno. Para que las palabras no se vayan con los malos vientos, dejó las instrucciones precisas y detalladas en tres libros que contenían la *hoja de ruta* que debía seguir su sucesor. Allí estaban definidas las políticas a seguir, las decisiones a tomar, e incluso estaban las formalidades para realizar los gabinetes itinerantes y las presentaciones sabatinas que fueron piezas fundamentales en su estrategia comunicacional.

Antes de eso ya habían quedado claros los límites. A finales de septiembre de 2016, el día en que Moreno regresó al país para asumir la candidatura, Correa trazó esas líneas rojas. En un discurso –que no estaba previsto- ante los seguidores convocados exclusivamente para aplaudir y no para escuchar algo, mucho menos atestiguar discrepancias, condenó los llamados al diálogo, los pedidos de “pasar la página” y, sobre todo, la convocatoria a “iniciar una nueva etapa”, que tímidamente había hecho Moreno en su breve discurso en el aeropuerto. “No vamos a permitir que tomen distancia”, aseguró Correa y ordenó “poner un alto al discurso de que hay que superar los grandes errores”. Para que se sepa quiénes debían estar y quiénes no, descalificó a “esa supuesta coalición de organizaciones sociales” conformada por las personas que formaban los escasos partidarios propios de Moreno y que no vestían las camisetas verdes que identificaba al paquete aprobado por el líder (un exministro que entendió a cabalidad por dónde iban las cosas –porque su trayectoria política le había enseñado el valor de la sumisión- afirmó que “No hay mayor orgullo para el ser humano que la militancia”, donde esta última palabra se convertía en sinónimo de obediencia). Moreno aceptó los términos: “Duras e implacables sentencias de Rafael para aquellos que crean que la deslealtad puede ser un camino”. Aparentemente, las líneas rojas quedaban marcadas y aceptadas por quien debía ser el objeto del control. Pero distinto era el mensaje que emanaba de la sucesión imprevista de los discursos, de los rostros –crispado el uno, sorprendido el otro-, de los gestos, del lenguaje corporal y de la ausencia de cantos entonados conjuntamente como

correspondía al cierre de cada acto revolucionario. Algo estaba fallando en el mecanismo del control remoto.

Las tensiones se dispararon desde el día en que Moreno, al jurar como presidente, retomó sus palabras de la mano extendida, del acuerdo nacional. Y, algo insólito después de diez años de exclusión de una parte de la población nacional, denominó al suyo como un *gobierno de todos*. Lo que en ese momento se tomó como retórica propia de una persona que iniciaba su gestión con las manos atadas, como una proyección de los deseos de alguien que sabía imposible su cumplimiento, fue recibido por el líder como un golpe directo a él y a su proyecto (mucho más si, como trascendió en esos días, el flamante presidente no leyó el discurso que le dieron el día anterior, cuando ensayaba el manejo del teleprompter, y lo sustituyó con las hojas que él había preparado). Tres días de silencio mantuvo Correa en el hospital a donde fue directamente desde el Palacio Legislativo sin esperar que concluya la ceremonia de transmisión del mando. Cualquiera que fuera la dolencia que le afectaba, debe haberse agudizado con el dolor y la rabia (¡qué difícil es escapar a esa compleja maraña de comunicaciones que existe entre el cuerpo y la psiquis!). Debe haber sido muy duro comprobar que el control remoto fallaba en su estreno, precisamente en la ocasión que debía funcionar a la perfección. Duro aceptar que en política esos aparatos no vienen con garantía.

La mesa servida

El nuevo gobernante, el dócil vicepresidente de sus primeros seis años, debía certificar que las cosas quedaban en orden, que el país continuaba su marcha indetenible hacia su condición de *jaguar de América*. Nada debía nublar el horizonte diáfano que estaba ahí, no en un futuro indefinido, sino en el presente, en ese *ahora* que era el resultado de la epopeya ecuatoriana. “Somos leyenda”, dijo el líder. Y lo dijo tantas veces, que solo cabe pensar que era una convicción enclavada en esa parte de la cabeza que no está gobernada por la voluntad ni por la consciencia. “Somos Revolución Ciudadana, la leyenda que asombró al mundo y que rescató al país de las cenizas”, escribió en una de las redes sociales más de medio año después de haber dejado la presidencia y cuando ya se había producido la ruptura con su sucesor. “Magia es lo que Rafael Correa ha hecho con el Ecuador entero”, “Somos parte de la leyenda de la Revolución Ciudadana”, afirmó meses antes Lenin Moreno. Si había alcanzado esa dimensión, era imperioso impedir el vuelo de oscuros fantasmas, aunque uno de ellos, el más grande, fuera la realidad económica y política del país. No cabía remover esas aguas, hurgar en esa realidad, la de ese mismo presente en el que él comenzaba a gobernar como un insondable personaje que, por la fuerza de las circunstancias y por el temor a la derrota, fue honrado como albacea de la revolución.

La función de Moreno, en ese momento y en lo que viniera después, debía limitarse a ratificar los logros de la revolución o, como afirmó su líder y corearon todos –incluso los encargados del manejo económico, que conocían de primera mano las cifras-, estaba obligado a testimoniar que quedaba la *mesa servida*. Pero, esas acciones que se esperaban

de él, esos verbos –ratificar y testimoniar- que se le obligaba a conjugar, eran absolutamente incompatibles con la situación en las que debía moverse el sujeto de la acción. Aceptar aquella metáfora y convertirla en guía para su gobierno habría significado cargar con toda la culpa de lo que inevitablemente vendría después. Con la carga religiosa que tienen todas las revoluciones, se le exigía el martirio. No era el sacrificio que lleva a la muerte en nombre de la patria, el *patria o muerte* que agitó durante décadas a América Latina y que revivió con el andar de un sinnúmero de copias de la espada de Bolívar iniciado por Hugo Chávez. Era apenas un pequeño tormento que, para mayor comodidad, tenía fecha de expiración cuando se cumpliera el mandato presidencial. O quizás antes, si las cosas iban por el camino previsto y se lograba su reemplazo por Jorge Glas, que para eso estaba ahí.

Debía hacerlo, debía sacrificarse en nombre del proyecto. El sacrificio no consistía en continuarlo. Eso era imposible, como lo había comprobado el líder por lo menos desde 2014 cuando fue evidente que no habría recuperación de los precios del petróleo. Convencido de ello, debió ceder por primera y única vez frente a los gremios empresariales y a sectores medios urbanos que se movilizaron en contra de los proyectos de ley de plusvalía y de herencias. En otras condiciones económicas, Correa los habría enfrentado, incluso no habría sido extraño que se presentara como candidato y que la hubiera convertido en la gesta en contra de los ricos, que era poesía para su electorado más duro. Pero, con la economía en descenso, se convertía en una jugada suicida porque le alejaba de los sectores medios, aquellos que, más allá de carismas y utopías, votan con el bolsillo. Entre las turbias aguas de la economía, el apoyo electoral cayó en las elecciones locales y provinciales de aquel año. Perdió la alcaldía de Quito con todo su simbolismo y no obtuvo el control de uno solo de los municipios de las capitales provinciales. La tensión se elevó más adelante, cuando Moreno tuvo que pelear voto a voto el triunfo de la segunda vuelta (y hay quienes aseguran, entre ellos uno de sus asesores, de apellido Mangas, que para ello tuvo ayuda dentro del Consejo Nacional Electoral).

Todos conocían –Correa antes que nadie y Moreno con él- la debilidad del gobierno que se iniciaba. La mesa no solo estaba vacía. Cojeaba, se bamboleaba. Sobre ella solamente quedaban las migajas del festín de nuevos ricos que alimentó más ilusiones que realidades. No había seguridad alguna de que el pan podría estar ahí el día siguiente. La única opción válida para el *Proyecto* era la continuación del endeudamiento, ya que la aplicación de medidas de ajuste estaba descartada. Simplemente pensar en estas significaba, dentro de la teología revolucionaria, caer en el anatema de la capitulación ideológica. Para evitarlo no bastaban las admoniciones del patriarca y los breviarios que le señalaban el camino. Era necesario rodear a Moreno de asesores y ministros probados en una lealtad que era, como lo reivindicó una asambleísta –con un oxímoron tan involuntario como sentido-, una orgullosa sumisión. Había que estrechar el campo de acción de Moreno, no dejar una sola salida que pudiera llevarle por el camino de la autonomía.

La teología revolucionaria exigía la inmolación de Moreno. Su instinto de sobrevivencia y la porfiada realidad, por el contrario, le dirigían hacia otro rumbo. Era el rumbo que únicamente podía estar definido por la *traición*. Así la llamaron, porque contra la fe no tienen validez las cifras ni existen hechos objetivos. El pragmatismo del uno significaba traición para los fieles. Una y otra son palabras que se dicen fácilmente cuando se trata de acusaciones y justificaciones. Pero, no es igualmente sencillo explicar los actos que expresan esas palabras. Traición es una palabra fuerte, tan fuerte que sirvió para sustentar el relato, ese abono vital para el Proyecto. Tempranamente, apenas con los primeros pasos de Moreno, descubrieron que la mejor garantía para mantener el relato era complementar a la mesa servida con esa acusación. Solamente la traición podía explicar la inviabilidad del Proyecto.

La traición

La revolución, cualquiera que esta sea, puede admitir atajos, pero no tolera desvíos. El atajo permite recorrer más rápidamente el camino hacia la felicidad, el desvío lleva a un destino totalmente diferente al que está marcado por las leyes de la historia, siempre interpretadas por la sapiencia del líder. Por el contrario, en el aburrido y nada heroico régimen democrático, los cambios son no solamente posibles sino necesarios e inevitables. La alternancia es parte constitutiva de su definición. La gente común y corriente, con un simple papel que pasa de su mano a la urna, puede cambiar el rumbo cuando le venga en gana. Por ello, con cierta carga de ironía, uno de los teóricos más sólidos en ese campo define sintéticamente a la democracia como el régimen en el que el partido de gobierno puede perder la elección. Y, añade, esa derrota no significa el fin del régimen, mucho menos el fin del mundo, como sí lo es para la revolución. En efecto, esta se acaba no solamente cuando el partido (o el líder, que en este caso es lo mismo) pierde el gobierno, sino cuando alguien de sus filas escoge un desvío. Eso fue lo que hizo Lenin Moreno.

Por qué escogió el desvío y cuándo decidió hacerlo, son las preguntas que solamente tienen respuestas parciales o, si se quiere, hipótesis. La primera tiene una explicación válida para cualquier gobierno que se inicia, pero insuficiente para entender la brecha que abrió en las filas revolucionarias. “Es la economía, estúpido” fue la frase del asesor de un presidente norteamericano que cabe perfectamente en este caso. En los dos últimos años de gobierno de Correa hubo suficientes evidencias para comprender que era imposible mantener el modelo basado en el gasto público. El creciente endeudamiento (que llenaba de felicidad al gobierno chino y a sus bancos) tenía límites, no solamente legales, que fueron ampliamente rebasados, sino económicos, que fueron ocultados. Era imposible que el nuevo gobierno siguiera por ese camino sin realizar cambios de fondo.

En efecto, era la economía, pero la explicación basada exclusivamente en ella es insuficiente porque no permite comprender la negativa de la mayoría de dirigentes de la Revolución Ciudadana a aceptar una evidencia tan clara. Se puede intuir que no podían hacerlo porque a la cabeza de ellos estaba Correa y de ninguna manera él podía aceptar

que la situación hiciera necesario el viraje. Habría significado reconocer, por un lado, el engaño de los dos últimos años y, por otro lado, que él estuvo errado a lo largo de todos sus mandatos al aplicar una política que no era sustentable. Era un pedido imposible de formularle a una persona que, como aseguró al inicio de su mandato, nunca se equivoca. Y, para los pocos fieles seguidores que tenían conciencia de la situación, era preferible estar equivocados y mantenerse dentro del círculo de privilegiados. Al fin y al cabo, muchos de ellos conocían la historia de las cabezas agachadas de los viejos bolcheviques en su claudicación ante Stalin. "Preferimos estar equivocados dentro del partido que tener la razón fuera de él", repetían sumisamente para tratar inútilmente de evitar el trágico destino de sus viejos camaradas. El Proyecto, siempre encarnado en el líder, tiene que ser más fuerte que la pretensión burguesa de pensar por cuenta propia y, mucho menos, de tener la fuerza de la razón de su lado. Obviamente, era la economía, pero por encima de cualquier evidencia estaban la palabra y la imagen del líder que se elevaban como obstáculos para impedir el más mínimo cambio.

La otra pregunta, la que indaga por el momento en que se produjo la ruptura –o, más bien, cuándo comenzó el distanciamiento- tiene más enredos que la primera. Debido al velo de misterio que cubre a los diálogos internos que obviamente deben haber existido al respecto en las filas revolucionarias, es imposible conocer si Moreno llegó a plantear alguna vez abiertamente sus observaciones. Hay que desechar la posibilidad de que él, desde su cómoda sinecura en Ginebra, donde recibía visitas de todos los colores del espectro político, no se enterara de la situación del país. Que la mesa no quedaba servida era algo que sabía todo el país y más de una vez se lo deben haber comentado. Hay que suponer que habrá leído algunos de los análisis que por decenas publicaban los medios y circulaban en las redes. Es también poco probable que no hubiera comentado este tema con su círculo más cercano y con su equipo de campaña. Sea lo que fuere, la única hipótesis que hay que descartar entre las muchas que cabe plantear al respecto es la del desconocimiento. Una persona en su posición no podía estar desinformada sobre algo tan central para la política como era el tobogán por el que bajaba velozmente la economía.

Si se rechaza esa hipótesis, que es lo único que cabe hacer, entonces se puede sostener que los indicios de ruptura deben haber comenzado cuando las insinuaciones de su candidatura confluyeron con las noticias económicas y, sobre todo, con la imposición de la candidatura de Jorge Glas para la vicepresidencia. Para cualquier persona, mucho más para alguien que veía como algo seguro su elección, las acciones que debería tomar desde el primer día de gestión pasaban a ser la principal preocupación y el espacio que tendría para ello definiría su desempeño. La presencia de Glas, el receptor de las órdenes transmitidas desde el mando a distancia, se convirtió en un asunto crítico. Todo ello lleva a suponer que la ruptura habría comenzado a producirse antes de su nominación, concretada a finales del año anterior por decisión inapelable del líder. La brecha se habría hecho evidente a partir de ese momento. Cuando Moreno llegó de Suiza y Correa lo recibió con el ceño fruncido y el discurso disciplinario no previsto, ya había comenzado la excavación del foso.

La distancia se hizo mayor cuando las denuncias de corrupción dejaron el ámbito reducido de las redes sociales y pasaron a ocupar el lugar central del escenario político. El destape del caso *Lava Jato* en Brasil desnudó las andanzas de la transnacional Odebrecht en América Latina. Ecuador no quedó afuera de la red que, como se hizo evidente de inmediato, era tejida en una eficiente colaboración entre empresarios y políticos. La práctica del intercambio de coimas por contratos no sorprendía a nadie porque tenía larga trayectoria tanto en Ecuador como en muchos países del continente. Pero, sí fue novedoso que –como se comprobó en los juicios que se desarrollaron posteriormente- su ejecución se hiciera en las más altas esferas del aparato gubernamental y que se llevaran registros meticulosos. Quienes recibían el dinero, pero también quienes se beneficiaban del contrato, relajaron los cuidados que usualmente tienen quienes se mueven en esas actividades. Unos y otros depositaron toda su confianza en el eficiente control ejercido desde la cúpula política. Una justicia obediente y una opinión pública amedrentada, configuraban el edén para el enriquecimiento rápido. No había razón para extremar los cuidados. La *omertá* de los primeros tiempos se hizo innecesaria.

La confianza en la impunidad establecida a lo largo de los años anteriores y el nivel alcanzado por la corrupción hicieron aflojar los controles y aflorar las evidencias. La magnitud que alcanzaron hizo infructuosa la respuesta desesperada que atribuía las denuncias a la estrategia de la *restauración conservadora*, como la denominó por esos mismos días el peronismo K en Argentina. No tenía mayor importancia que a la gran mayoría de votantes le importara un bledo la corrupción, lo que contaba era que, al instalarse como un tema central en la campaña, podía actuar como un mensaje subliminal. La identificación de un peso negativo en la etiqueta política podía llevar a los electores –incluso a aquellos que no comparten esos valores éticos- a alejarse de ella. Por instinto más que por razonamiento, se sabe que le enfermedad es contagiosa, como no lo es el remedio.

Sabiendo que se iba a embarcar en la campaña, Moreno tuvo que tomar conciencia del riesgo de verse salpicado. Las personas ajenas al gobierno con las que nunca rompió, deben haberle prevenido sobre el grado que alcanzaba el peligro. Muchas de ellas sabían de lo que hablaban, ya que tenían experiencia en manejo electoral, sobre todo las que en su momento fueron puntales importantes para el triunfo de Correa en su primera candidatura. Sabían de los efectos demoledores que podía tener la implantación de ese tema en la campaña y sobre todo preveían el lastre que significaba Jorge Glas como candidato a la vicepresidencia. En la investigación de la justicia brasileña sobre los negocios ecuatorianos de Odebrecht, él ocupaba el lugar central de la madeja que se iba desenredando. Era factor suficiente para ir poniendo distancia, especialmente si se trataba de un candidato impuesto para que actúe como la onda electrónica que, activada desde el mando remoto, debía poner en funcionamiento al androide. La imposición de Glas en la papeleta contribuyó a abrir la brecha entre Moreno y el Proyecto en lugar de actuar como garantía de sujeción y permanencia.

No se puede descartar también que el alejamiento se alimentara de medidas tomadas por el gobierno. El proyecto de ley que creaba un impuesto a la propiedad inmobiliaria, presentado por Correa en diciembre de 2016, incrementaba sustancialmente el monto vigente hasta ese momento. No hubo tiempo ni condiciones para debatirla en la Asamblea. Sectores medios y altos se lanzaron a la calle, en una acción que resultaba insólita en un contexto en que, a partir de la criminalización de la protesta social, ese espacio se había convertido en patrimonio exclusivo de las huestes altivas y soberanas. Pero, la disputa por la calle era un aspecto secundario con respecto al enajenamiento del apoyo de los sectores medios al gobierno. La *ley de plusvalía*, presentada cuando se sentía con fuerza el fin de la bonanza económica, logró ponerles a esos sectores medios bajo la tutela de quienes tenían más para perder con el proyecto. El apoyo pasivo y la indiferencia que habían mantenido a lo largo de los años anteriores podía transformarse en oposición activa.

El costo negativo en lo político era mayor que el beneficio económico que esperaba obtener el gobierno. Los montos previstos, aún en sus apreciaciones más optimistas, eran bajos y no podían producir un flujo apreciable para los meses que aún le quedaban para cumplir su mandato. Los discursos y declaraciones apuntaban más bien al objetivo político, al reencuentro con la etiqueta de izquierda. La propuesta era presentada como una medida de justicia social, algo ilusorio si se considera que la recaudación sería insignificante. Por ello, la parte sustancial de esos mismos discursos destacaba el carácter de sanción a los ricos. Pero, al incluir entre estos a todas las personas que tenían una casa o un departamento, los únicos receptores del mensaje venían a ser los sectores económicos más bajos. En el mejor de los casos, esa podía ser una forma de consolidar su voto duro, enajenándose el apoyo que había tenido entre las capas medias. Ya había pasado el tiempo en que los votantes autoubicados en la derecha y en el centro podían apoyar a un gobernante que hablaba mucho de justicia social pero no hurgaba en sus bolsillos.

Si el objetivo era polarizar la campaña, no hacía falta porque diez años de implantar la lógica del amigo-enemigo en la política ya se había encargado de ello. La situación económica y las debilidades de sus candidatos –sin carisma, el que aspiraba a la presidencia, altamente sospechoso, el que se veía como vicepresidente- más bien aconsejaban lo contrario. Pero, eso no tiene cabida en una revolución. La campaña debía ser la oportunidad para ratificar el compromiso ideológico, aunque eso significara perder un sector importante del electorado. Como quedó claro meses atrás, cuando fue vetada la figura de la mano tendida y el tímido anuncio de la búsqueda de acuerdos, el margen de acción de Moreno era mínimo. O aceptaba esas condiciones o rechazaba el encargo de ser el sucesor silencioso. La respuesta era obvia: aún a riesgo de fracasar la campaña no podría hacerse de otra manera. La ruptura tendría que esperar, pero quedaba sembrada una semilla adicional.

Foto de familia

No habían pasado tres semanas de la posesión del nuevo presidente, cuando se hizo imperiosa la necesidad de desmentir las tensiones. Ya habían trascendido a la opinión pública. Abiertamente se discutía si se trataba de una artimaña –un tongo, se dijo en los mentideros- o en realidad había un distanciamiento entre el dueño de la revolución y quien fue designado para administrarla dentro de condiciones rígidamente establecidas. Seguramente confiando en las afirmaciones que aluden al poder de la imagen sobre las palabras y siguiendo, como habían seguido siempre a los publicistas oficiales que sustituyeron a los ideólogos, la familia revolucionaria posó para la foto. Por alguna razón que deben conocer los profesionales, en la actualidad las personas fotografiadas se sienten obligadas a reír, al contrario de la seriedad con que enfrentaban al blanco y negro de otros tiempos. En esta, que es verdaderamente una foto de familia –de las que se hacen el día del matrimonio del hermano, de la primera comunión del sobrino, del cumpleaños del abuelo-, todos ríen. O tratan de reír. Pero, el esfuerzo del personaje central es insuficiente. Lenin Moreno apenas sonríe. Su gesto confirma que la diferencia entre risa y sonrisa no es asunto gramatical. La risa demuestra felicidad y satisfacción, la sonrisa insinúa resignación o, quién sabe, ironía.

La foto circuló el 13 de junio y aparentemente fue tomada la tarde anterior. Habían transcurrido apenas diecinueve días de la posesión del presidente. Allí estaba toda la plana mayor del gobierno anterior. Ninguna de las personas formaba parte del gabinete de Moreno. Apenas un asesor, que, no por casualidad, era el personaje que había ocupado el mayor número de ministerios a lo largo de los diez años de correísmo. Está el presidente de la Asamblea legislativa, la secretaria de Alianza País, los hermanos publicistas, el exasesor jurídico de la presidencia y un par de personas más. A la izquierda, copando el foco de la foto, el expresidente. Hacia atrás, el vicepresidente –confundido en el ramillete de personas que forman el contorno derecho- levanta el dedo pulgar de su mano izquierda en señal de un triunfo obtenido o, en su fuero personal, por obtener. Si lo que buscaban era algo más que una *selfie* que diera cuenta de la reunión de amigos, lo consiguieron plenamente. La foto registró el momento y transparentó la intención.

Fue un recurso político hábil, pero dudosamente eficaz. Cuando vieron que los pasos iniciales del gobierno no seguían la ruta trazada por el líder máximo y que no se ceñía a los libros en que le decían hasta como deberá saludar, entendieron que había dos opciones. Por las buenas o por las malas, sin medias tintas. Las malas no eran las más aconsejables para momentos tan tempranos. Si no había cumplido ni el primer mes de los cuarenta y ocho que le corresponden y si tenía a su favor una opinión pública que siempre premia a los mandatarios que se inician, no era aconsejable optar por la pelea abierta. Los cálculos señalaban que esta vendría después, cuando la popularidad se desgastara por las medidas que debería tomar para componer algo de la desastrosa situación que heredó.

Había que ir por las buenas. Hacia adentro y hacia afuera, era necesario enviar el mensaje de unidad. De paso, había que hacerle saber a él que, según el decir de la política mexicana, *el que se mueve no sale en la foto*. Él no debería ceder a la tentación de moverse un solo milímetro del camino trazado. Para eso estaban ellos ahí, para que hacia afuera se

vea la unidad y para que hacia adentro se entienda que esa unidad significa obediencia. Había que reír para la cámara, no vaya alguien a pensar que una compañía resulta molestosa. Por ello, porque ya para ese momento se había fracturado el proyecto y se había colocado el hito que marcaba el final de la Revolución Ciudadana, era necesario un último esfuerzo para salvarla. En ese esfuerzo no podía faltar ninguno de ellos. Allí debían estar todos. Allí están los que ríen. Y está el que sonríe.

La apostasía

Una semana antes de la foto de familia, Rafael Correa no pudo ocultar su estado de ánimo. En una entrevista con uno de sus militantes que oficia de fiel portavoz, al referirse a la posición que ya había tomado Moreno con respecto a Glas aseguró que "jamás dialogaría con un tipo que está insultando a mi vicepresidente todos los días". Se sentía golpeado en esa parte tan sensible que tienen quienes han trabajado toda la vida para ser modelos de comportamiento y guiar a la grey de su iglesia: "Mi desazón, mi dolor, si cabe el término, porque es clara la estrategia de diferenciarse, diferenciarse de mi gobierno, diferenciarse de Correa, y para eso se ha caído, yo creo, en deslealtades y mediocridad". Ya no ocultaba la brecha que se abría entre él y Moreno: "hay una estrategia muy clara de diferenciación y yo quiero dejar muy claro que yo también me quiero diferenciar del actual gobierno porque no estoy de acuerdo con lo que están haciendo". Convencido de su yo colectivo, de su mimetización con el pueblo, ponía su incomodidad en las bocas de aquellos seres que siempre tuvieron como tarea primordial repetir sus palabras: "hay la sensación, en gran parte de la militancia, de que ganó la oposición".

El fin había llegado. Moreno era un apóstata. Había renegado de la creencia en el Proyecto y, sobre todo, de la fe en quien la encarnaba. Había negado a aquel ser superior que conocía la Palabra y la pregonaba. En algunas declaraciones, en los escasos doce días que llevaba como presidente en ejercicio, Moreno dejó abierta la posibilidad de una indagación judicial a Glas por los rumores de su participación en los actos de corrupción de Odebrecht. Al contrario de Correa, que siempre cerró filas junto a los acusados de corrupción (incluso cuando en la mayoría de los casos se comprobaron los hechos y su respectiva participación, hasta que se hizo insostenible, entonces sostuvo que no los conocía), Moreno entendió que no tenía el carisma ni disponía de los recursos necesarios para comprar la indiferencia (el *quemeimportismo* se diría en criollo) de propios y ajenos. No podía embargar su presente y su futuro a personas que, en cuanto sintieran medianamente comprometida su situación, no dudarían en darle la espalda. Diez años de convivencia eran una gran escuela para conocer a la gente. A esa gente.

El Proyecto, el relato y el control remoto no eran instrumentos efectivos para mantenerle a Moreno en el lugar en que el cauce de la historia le había puesto únicamente porque era quien generaba menor resistencia para la contienda electoral. Ni siquiera la fe habría podido justificar su inmolación. Tres factores le impulsaron a renegar de la convicción que mantuvo durante aquellos diez años. Primero, la ya señalada imposibilidad de eludir el giro que se debía dar a una economía que amenazaba con entrar en una crisis

inmanejable, con derrumbe de la dolarización y de su gobierno. Segundo, la necesidad de contar con el apoyo político apropiado para hacer ese giro, que principalmente debería provenir del sector privado y de los organismos multilaterales de crédito. Tercero, su condición de individuo, de persona con ambiciones, que llegó a un puesto al que seguramente nunca se imaginó que llegaría y, ciertamente, para el que no estaba preparado. Continuar por el camino de la fe, por el sendero de la utopía reaccionaria, habría desembocado, más temprano que tarde, en el caos y consecuentemente en el fin de su paso por el gobierno. Corría el riesgo de que su mandato fuera el más corto del período democrático. Estaba a la vuelta de la esquina la posibilidad de enfrentar una situación tan o más grave que la del feriado bancario de finales de los años noventa. Como el presidente de aquella ocasión, en caso de llegar al punto de no retorno perdería automáticamente a todos sus aliados. Al ataque de las fuerzas políticas y sociales se sumaría sin duda el fuego amigo, que sería avivado con la descarga de todas las culpas sobre él.

El espacio de Moreno se estrechaba día a día. Su campo de acción era mínimo. Debía optar por la permanencia en las filas de la revolución, con la certeza de hacerse cargo del caos, o buscar apoyo por parte de los vencidos de la segunda vuelta y de los sectores privados, donde tenía que vencer a ese enorme enemigo que es la desconfianza. Optó por la segunda. Comenzaba la tarea de demostrar que la ruptura era real, que no había tongo. Como exigen las apostasías, el converso debe demostrar en cada acto, a cada minuto que lo suyo es sincero y que viene desde muy adentro, desde lo profundo de su alma. Si eso le costó mucho o le resultó fácil dadas las circunstancias, es algo que posiblemente nunca se sabrá. Lo cierto es que a partir de esos primeros rounds de reconocimiento fue profundizando en su estrategia hasta colocar, como hito de la ruptura, dos de las siete preguntas de la consulta popular que convocó para febrero de 2018. La eliminación de la reelección indefinida y la inhabilitación política para las personas condenadas por actos de corrupción golpeaban a Correa y al núcleo del correísmo. El apóstata fue excluido de la iglesia y en adelante los fieles se referirían a él como *el traidor*. No cabía otra cosa. El lenguaje religioso de las revoluciones es inequívoco.

RC-RC=0

Juntos, como comenzaron, así acabaron sus días la Revolución Ciudadana y Rafael Correa. No cabía otra posibilidad. Es de sobra conocido que la duración de los movimientos caudillistas está definida por la vida biológica del caudillo o, sin llegar a ese extremo, por su presencia. La Revolución Ciudadana nunca se asentó en un partido político o en una organización medianamente estable, con instancias de debate y de toma de decisiones. Jamás fue –ni hubo el menor intento de que fuera- un movimiento de masas organizadas. A estas no se las convocaba, se las trasladaba. Se las transportaba masivamente cuando era necesaria su presencia y se las retiraba con su respectiva recompensa.

Tampoco fue la expresión de un partido de cuadros movilizados por el intercambio de ideas y la contraposición de propuestas. Sabido es que el boleto de entrada en las cofradías

es el abandono de cualquier interés de hablar y actuar con ideas propias. Todo lo que difiera de la palabra sacra es anuncio de una posición cismática, una chispa que debe ser sofocada antes de que se convierta en llama. Mucho menos fue un cambio cultural. A pesar de los reiterados intentos de construcción del relato, como lo prueban los estudios de opinión que indagan sobre la autodefinición, los fieles conversos nunca llegaron a ser mayoría. Los triunfos electorales expresaban fidelidad al bolsillo engrosado por los años de las vacas gordas, no a la ideología.

La Revolución Ciudadana fue, en términos políticos –y para decirlo en su léxico-, un cambio superestructural. La promulgación de la Constitución y de una inusual cantidad de leyes –que al ser gran parte de ellas calificadas como orgánicas se convertían en rocas inamovibles- fue sin duda un cambio significativo en las reglas de juego. Se instauró un nuevo orden normativo, pero no se lo trasladó hacia las conductas de los actores políticos, mucho menos a las prácticas institucionales. Era imposible que lo hiciera porque el modelo político implantado desde el inicio lo impedía. Era un modelo que rechazaba explícitamente la idea de deliberación, que habría hecho necesaria la construcción de un partido. El origen leninista de gran parte de los integrantes de la grey original no fue de mucha utilidad cuando Rafael Correa, con su prédica en contra de la *partidocracia* –en un país que nunca tuvo un sistema de partidos consolidado-, cerró la puerta a la más tímida insinuación de crear una organización política. El Partido –así, con mayúscula-, uno de los dos objetivos centrales de esa biblia izquierdista que era el *¿Qué hacer?* de Lenin, quedó arrumado en el pasado de la izquierda criolla.

Aunque desconocía absolutamente aquella biblia, intuitivamente Rafael Correa se decantó desde la campaña por el otro objetivo que guiaba al viejo bolchevique. La difusión y propaganda que señalaba el dirigente ruso como esa otra tarea central de los revolucionarios, un siglo después pasó a llamarse publicidad. La experiencia de catequista de Correa en los páramos ecuatorianos, con su énfasis en la reiteración y en el retintín de la oración, encajaba perfectamente en el perfil del revolucionario profesional que debía propagar la verdad histórica. Por esa vía, la publicidad se convirtió en el eje de la acción política de su gobierno y en su principal actividad a lo largo de todo el periodo.

Aunque él y sus seguidores siempre hablaron de comunicación, en realidad era publicidad. Se ha dicho siempre que la comunicación requiere de un emisor y de un receptor. Pero, eso alude solamente a una parte del asunto, a la del mensaje que va de una boca a un oído. Al dejarlo en ese nivel se elimina la otra parte del vínculo, la que está dada por la respuesta del receptor. Sin esta no hay comunicación. Para que esta exista, para que se comuniquen entre ellos, cada uno debe ser emisor y receptor a la vez. Si es de un solo sentido, del emisor al receptor, no hay comunicación, hay publicidad, propaganda, difusión, adoctrinamiento. El receptor pasivo es la negación de la comunicación.

Ese fue el modelo aplicado, el que establecía el predominio de un solo emisor, de una sola persona, de una sola voluntad, de una sola palabra. Una palabra que se vuelve

inapelable y que debe ser protegida incluso normativamente como se lo hizo con la Ley de Comunicación. La Palabra, la Verdad Histórica solamente debía venir desde arriba. Los diáconos que oficiaban de ministros, y que hasta su llegada al gobierno oficiaban de *opinadores* diarios en radios y canales de televisión, muy sumisamente acataron la prohibición de volver a esos espacios y de hacer declaraciones sobre los temas que se suponía estaban bajo su responsabilidad. Como cualquier persona de a pie, ellos debían destinar la mañana del sábado para enterarse de lo que debían hacer y las más de las veces para ser regañados por lo que habían dejado de hacer o lo que habían hecho mal.

No fue necesario que pasara mucho tiempo para comprobar que la Revolución Ciudadana no tenía asentamiento en bases sociales y políticas. No era una estructura asentada sobre columnas, era un techo que colgaba de una mano bastante visible. El carisma, la voluntad del líder, en definitiva, la Palabra, era suficiente para amparar a un pueblo infantilizado por la visión paternalista del redentor. Desde los primeros días de la Asamblea Constituyente, cuando amenazó con la renuncia ante cada tema o artículo que no encajaba en su modelo, quedó claro que así sería. De ahí en adelante, la Revolución Ciudadana y Rafael Correa fueron sinónimos, matemáticamente términos equivalentes: RC=RC. Por ello, cuando promediaba su tercer mandato –el segundo dentro de su propia Constitución- y se acercaba el día en que ya no podría aspirar nuevamente a ese cargo, cundió el pánico. Los fieles entendieron que la ecuación era inapelable: RC-RC=0. Y eso fue lo que ocurrió.

Los lunes de esos tiempos

¡A PENSAR!
22 de mayo de 2017

Él hacia todo por todos. Nadie más era necesario. Para diseñar un camino, construir una represa, elevar monumentales edificios, ahí estaba él, para eso y para mucho más. Si había que enfrentarse a un enemigo, de los muchos que acechaban para acabar con su revolución, él ocupaba por entero la primera fila. Si había que silenciar a alguien, bastaba una señal de su parte. Los fieles seguidores, especialmente los que poblaban el sistema judicial y los fortalecidos organismos de espionaje, estaban adiestrados para transformar las alusiones en órdenes de cumplimiento inmediato. Si había que opinar sobre la política interna y sobre lo que ocurría en el mundo, sólo era necesario escuchar su siguiente discurso en un acto formal, lleno del boato que tanto le gustaba, o sencillamente esperar a que se le ocurriera lanzar una de sus grandes ideas. Los sacrificados redactores –difícil llamarles periodistas- de los medios de comunicación que controlaba sintieron alivianada su tarea cuando comprobaron que bastaba repetir lo que él había dicho.

Durante largos años, la historia giró en torno a él. Su palabra era sagrada, inapelable. “Ustedes saben que nunca me equivoco”, dijo con especial firmeza por si a alguien se le ocurría pensar que en sus afirmaciones hubiera la más minúscula muestra de esa cualidad humana que es la falibilidad. Se cuenta que, por ello, nadie se atrevió a hacerle notar que había aprobado dos proyectos que le presentaron como alternativas para la construcción de un faraónico edificio. Estando ambos aprobados, no quedaba más que edificarlos. La mitad se hizo siguiendo el un proyecto, la otra mitad de acuerdo al otro. El resultado le fue presentado como el aporte autóctono a la arquitectura y, por tanto, como la ruptura con la estética burguesa e imperialista.

Fue el mejor economista, el mayor estadista, el más alto teórico de la revolución, no solo fronteras hacia adentro, sino a nivel mundial. Lo que ocurría en el país fue presentado como ejemplo para la humanidad. Todas las demás voces callaron. Unas por decisión propia, otras –las más- porque fueron obligadas a silenciarse. Los intelectuales que no se sometieron a repetir las consignas oficiales –que, por cierto, cambiaban de acuerdo al humor de él- fueron marginados, desacreditados, perseguidos y finalmente eliminados del Olimpo revolucionario. Los que se quedaron disfrutaron de canonjías y sinecuras, mientras se volvían incapaces de comprobar cómo se iba marchitando su entendimiento. Fue el más grande. Los sustituyó a todos. Habló por ellos. Dijo que él ya no era él, que él era el pueblo.

Su formación de catequista ayudó significativamente para que siguiera el camino que le había marcado el destino. Lo suyo fue predestinación. Su complicado nombre, Iosif Vissarionovitch Dzugasvili, lo cambió por el más sencillo de Stalin. Hombre de acero, así pasó a llamarse. Se cuenta que

cuando llegó a nuestras tierras la noticia de su humana muerte, un escritor entró precipitadamente al lugar donde sesionaba el Comité Central del Partido y les dijo lo que nunca hubieran querido oír: “Se jodieron, cholitos, ahora sí, ¡a pensar!”.

¿CEGUERA, TEMOR, INGENUIDAD?

15 de mayo de 2017

Bienvenido al paraíso. Con otras palabras, ese es el mensaje que el líder ha dirigido, hábil e implícitamente, a su sucesor más que a las audiencias presentes en sus múltiples despedidas. Gran comunicador como es, ha utilizado con precisión cada minuto de sus últimas semanas para instalar la imagen de una economía boyante. No es un objetivo demasiado difícil, si durante diez años se ha adormecido a esas mentes y se ha sustituido su capacidad de discernimiento por la cómoda repetición de la palabra sagrada. Tampoco resulta complicado si en los últimos seis meses –casualmente los del proceso electoral- ha logrado crear el espejismo de reactivación a costa de un endeudamiento sin precedentes. Que mañana tengan que pagarlo los mismos que ahora aplauden, es algo que no cuenta para el ilusionista. Por ello, porque ya está cumplido el objetivo de instalar en las crédulas cabezas la magia de las cifras, su discurso en realidad tiene como principal receptor a su sucesor.

Resulta extraño y sorprendente que Lenin Moreno no haya dicho algo al respecto. Su silencio puede tener tres explicaciones, todas ellas muy preocupantes si se considera que el inicio de su gestión presidencial está a la vuelta de la esquina. La primera, que podría calificarse como de la ceguera y que sería la más grave, es que en efecto no tenga idea de la situación económica del país que deberá gobernar y que confíe ciegamente en las cifras sin respaldo que le entregan. La segunda, que sería la del temor, es que sí conozca la realidad, pero que no la divulgue para evitar el enfrentamiento con su líder y mentor. La tercera, que sería la de la ingenuidad, es que considere que la situación es algo más delicada que la que le presentan, pero menos dramática que la que dicen otras fuentes y que, por tanto, podrá manejarla sin mayores problemas.

En cualquiera de los casos, sea por ceguera, por temor o por ingenuidad, estaríamos frente a un panorama alarmante, tanto por las inevitables consecuencias económicas, como por la debilidad política que este silencio pone en evidencia. Frente a una economía que está sostenida con alfileres, a un mandatario entrante le corresponde comunicar sinceramente esa situación. No se trata solamente de la responsabilidad que debe tener ante sus mandantes, sino de lograr que el juicio ciudadano, al que será sometido desde el primer día, se haga sobre la realidad tangible y no sobre el conejo que, como experimentado prestidigitador, le entrega su antecesor. Este último, acostumbrado al autoelogio, jamás será capaz de reconocer la basura que deja debajo de la alfombra. Pero es al nuevo gobernante a quien correspondía, desde que aceptó la candidatura, sin esperar a instalarse en la presidencia, dar a conocer esa odiosa realidad.

Obviamente, al hacerlo pondría en entredicho toda la fábula de los últimos diez años, el jaguar quedaría como la cruel caricatura que siempre fue y el dueño de la revolución lo expulsaría del paraíso. Pero ¿acaso no va a suceder eso tarde o temprano?

RC – RC = 0

12 de agosto de 2013

Hay episodios políticos que por ridículos merecen pasar a la historia. El debate sobre la reelección indefinida tendrá esa categoría y servirá para la burla en el futuro. Por un lado, para ponerlo sobre la mesa han apelado a los pretextos más infantiles que se puedan encontrar. ¿No se dan cuenta del deplorable nivel político e intelectual que muestran cuando ponen en discusión un tema de esa trascendencia porque –según ellos- los medios no tienen coherencia al respecto? Suponiendo que eso fuera verdad, es imposible encontrar alguna justificación para que de allí se desprenda lo que puede devenir en una decisión política de enormes repercusiones. Deberían ponerse a pensar en la manera en que será recordado este episodio, para ver si así les ponen un poco de razón a su accionar. En el plano de la vida cotidiana, cuando una persona común y corriente actúa de esa manera es clasificada en la condición de preadolescente y sus parientes buscan ayuda profesional.

Por otro lado, queda para el recuerdo la manera burda y vergonzante de ocultar lo de fondo. Desde hace mucho tiempo, incluso antes de la primera reelección presidencial, se sabía que la Revolución Ciudadana no podrá existir sin el líder Rafael Correa. RC-RC=0 es la implacable ecuación que les quita el sueño y que les lleva a dar pasos desesperados como los de los últimos días. Saben perfectamente que los procesos anclados en la figura de un caudillo, aquí y en cualquier parte del mundo, han tenido una vida biológica y no política. La única excepción es el peronismo, que se explica por la base social organizada que estuvo presente antes de él y que no tenía por qué desaparecer con él. Por el contrario, aquí, sin organización social, sin partido político y sin cuadros de recambio, los plazos se hacen cortos y se producen reacciones de pánico. Éstas han desembocado incluso en apresuradas propuestas de reforma de la mejor constitución del mundo, esa que estuvo prevista para regir durante los próximos trescientos años.

No tiene sentido, en estas condiciones, entrar en la discusión de fondo, en la conveniencia o no de la reelección indefinida, en lo que ésta tiene de positivo y de negativo para la democracia, en las diferencias que existen entre los diversos cargos, además de muchos otros aspectos que están involucrados en el tema. No es eso lo que se está discutiendo, sino la permanencia del líder. Si la discusión se encaminara a lo de fondo se encontrarían con aspectos difíciles de enfrentar. Muchos de quienes ahora defienden a rajatabla esa modalidad tendrían que rogar a todos los dioses y a los propios demonios para que no se encuentren sus declaraciones y sus escritos en que la condenaban cuando otros mandatarios, de aquí o de otros países, intentaban hacer lo que ahora quieren para su líder. Simplemente, se

trata de asegurar la permanencia del único factor que sostiene a la RC. Si no es en esta ocasión será en cualquier momento dentro de los próximos tres años.

POSVERDAD Y MULTITUD
26 de junio de 2017

La presentación del vicepresidente en la Asamblea debería utilizarse para un curso en el que se pretenda explicar el significado de ese nuevo término que es la posverdad. Esta, calificada como palabra del año 2016, es uno de los vocablos que se acuñan cuando los existentes no sirven para calificar actitudes y hechos nuevos. Antes se hablaba de mentiras y de engaños. Pero, son palabras insuficientes para los tiempos que corren, porque la comunicación interpersonal actual es más compleja. Ahora es necesario construir una realidad propia o, como lo dijo una asesora del presidente norteamericano, presentar "hechos alternativos". Se trata de mostrar una realidad-ficticia (que es obviamente una contradicción, un oxímoron) diferente a la realidad-real. El objetivo es imponerla como una verdad y sobre ella edificar el proyecto que se pretende implantar.

Se dirá que no es algo nuevo, que bastaría recordar la manera en que se impusieron los totalitarismos del siglo XX (nazismo y estalinismo). Es cierto, pero sí resulta novedosa la facilidad con que actualmente penetra en las dóciles cabezas de las personas. Sin uso de la fuerza, sin amenazas, eso sí con halagos y mucho circo, esa realidad-ficticia es asimilada individual y colectivamente. A fuerza de repetirla, cuando ha hecho carne en la multitud, la posverdad se convierte objeto de fe. De ahí en adelante, no se requiere –ni se puede- acudir a la contraposición ni al debate. La posverdad se sostiene en sí misma y pasa a ser la evidencia que puede ser defendida exitosamente incluso ante jueces y tribunales.

El estrecho maridaje entre la posverdad y la multitud quedó demostrado en uno de los salones del Palacio Legislativo, cuando el vicepresidente de la República utilizó alrededor de tres horas para construir una realidad basada en hechos alternativos. Se suponía que él iba allá para explicar su responsabilidad política en los casos de corrupción, tanto los comprobados como los denunciados, pero utilizó casi todo ese tiempo para dar a conocer unos hechos que, además de no venir al caso, son pura construcción de su imaginación. Hechos alternativos, ni más ni menos. Se presenta heroico expulsando a un funcionario de Odebrecht, pero torea la pregunta sobre el retorno de la empresa, le viene la amnesia cuando hay que explicar el viaje del tío en representación oficial sin tener cargo alguno y no sabe qué significa responsabilidad política.

Para que la posverdad se configure es imprescindible la multitud, aquella que ya la había convertido en profesión de fe desde mucho tiempo atrás. Ahí estuvo, copando todo el espacio, ganando a grito pelado lo que debería defenderse con evidencias. Él no la defraudó. Le dijo lo imprescindible para fortalecer esa creencia ciega en la realidad-ficticia. Habló para ella, no para quienes exigen la realidad-real. Bueno, al fin y al cabo, es la misma persona que dice, muy suelto

de huesos, que allí donde su interlocutor ve un descampado, él ve una refinería. Es quien se nutre del conocimiento que reposa en ese pozo de sabiduría que es el rincón del vago.

BONJOUR TRISTESSE
10 de julio de 2017

Patética, penosa. Así fue la despedida del líder en canal propio y con periodista de incondicional militancia. Aunque seguramente hoy hará su último discurso triunfalista, en la peregrinación de sus fieles a Tababela, la pesadumbre mostrada en la entrevista no podrá ser escondida con frases incendiarias. Estas, las que se convierten en muletilla de sus guerreros digitales, las repetirá una vez más para goce de la multitud, pero su sentimiento de fondo quedó grabado en el vídeo. “Desazón” y “dolor” fueron los términos que utilizó para expresar lo que le produce la “estrategia muy clara de diferenciación” que, en su opinión, ha adoptado el presidente Moreno. Con un paso que le pone al borde de la ruptura total, calificó a esas acciones como muestras de deslealtad y mediocridad. Esas “son cosas que hieren profundamente”, confesó en el momento más triste de su despedida.

Los sicólogos podrán explicar lo que ocurre en una cabeza que nunca estuvo preparada para una situación como la que está viviendo el país y en particular Alianza País. En el plano político, esa pesadumbre personal tiene un alcance colectivo. Es una situación que se veía venir y se la anticipó hace mucho tiempo, cuando se preveía que la revolución de los trescientos años tendría una vida algo más corta. En concreto, podría durar el tiempo que el líder único e indiscutible permaneciera en la escena. Que él no haya sido capaz de verlo, solamente es una muestra de su ensimismamiento y de su necesidad de construir una realidad amoldada a sus ilusiones. Que los fanáticos tampoco lo hayan previsto no llama la atención si nunca quisieron construir un proyecto político más allá del gran guía y conductor. Sabido es que los castillos de naipes caudillistas no tienen cimientos. Están sostenidos en una única carta que, paradójicamente, es la de arriba.

Simbólicamente, la entrevista marcó el fin de una época. No fue el final heroico que anticipó a lo largo de la campaña y durante la transición con el retintín de la mesa servida. Aunque no falto el autoelogio y la visión guerrerista de amigos y enemigos, predominó el desasosiego, el malestar al comprobar que hay alguien que puede tomar, aunque sea tímida y débilmente, un camino distinto al que él dejó marcado. Fueron inútiles los esfuerzos del entrevistador (que en medio de todo se jugaba el cargo) para evitar que deje instalado el mensaje de decepción y de ruptura. Era imposible, porque eso no va con un caudillo que nunca aceptó discrepancias en sus filas y que siempre sostuvo que en una ciudadela sitiada –que es como él concibe al país- cualquier disidencia es traición.

Lo que se viene para el gobierno y para el Ecuador habrá que verlo con detenimiento en los próximos días y semanas, en un tiempo que corre más rápido que lo esperado. Lo que sí queda muy claro es que su retiro europeo comienza con título de novela. Al arribar

a la siempre lluviosa Bruselas no le quedará sino saludar: *Bonjour tristesse*.

¿TRANSICIÓN?

17 de julio de 2017

Después de diez años de imposición de la voluntad única, no sorprende que haya muchas personas que duden de la sinceridad de las posiciones de Lenin Moreno. Las más suspicaces llegan a calificar como un tongo a las discrepancias que mantiene con el expresidente. Sostienen que estarían aplicando la estrategia del policía malo y el policía bueno para que el actual gobernante pueda hacer el ajuste que necesita la economía y así allanar el camino para el retorno del anterior. Sin embargo, además de que no queda claro quién interpreta cada uno de los papeles, esas suposiciones pierden piso cuando se considera el grado al que ha llegado el enfrentamiento. El uno calificó a su propio compañero con los términos ofensivos que siempre fueron dirigidos a la oposición (los enemigos, en su jerga belicista). Mediocre y desleal son palabras de calibre muy grueso y pesan mucho más cuando se las dispara contra un amigo. El destape del cuento de la mesa servida, por parte del otro, es una forma sutil de llamarle mentiroso.

Con tanta dureza cuesta creer que hay un acuerdo entre ellos. Más conveniente para todos, para las oposiciones y para Alianza País, es aceptar que no se trata de una simulación ni que hay una estrategia elaborada conjuntamente. La ruptura está ahí y ese es el dato sobre el cual se debe construir el análisis y definir las respectivas posiciones. Las causas que llevaron hasta ese punto se irán conociendo con el tiempo, pero ahora es más importante preguntarse por las consecuencias. Lo que suceda de aquí en adelante dependerá de la manera en que se procese este conflicto. Lo que se haga y lo que se deje de hacer determinará el destino del gobierno, lo que quiere decir su capacidad de gestión, su relación con la Asamblea, su aceptación por la ciudadanía e incluso su duración. Asimismo, la mayor o menor fortaleza de cada uno de los grupos opositores se derivará de la posición que tomen al respecto y por tanto de su capacidad para interpretar el momento político.

En el lenguaje guerrerista instalado a lo largo de los últimos diez años, ésta es la madre de todas las batallas. Aquí se define, para el líder y para el ala dura del fanatismo, la continuación o el fin de su revolución. Lo dijo él cuando afirmó que en la última elección perdió la oposición pero dudaba que hubiera triunfado la revolución. Fue su reacción por la instauración de diálogos, por las declaraciones acerca de la libertad de expresión y, sobre todo, por la ausencia de un pronunciamiento presidencial sobre las denuncias que salpican al vicepresidente. Es la visión del juego del todo o nada, ese que exigía fidelidad absoluta, creencia ciega y ocultamiento de la ropa sucia para no perjudicar al proyecto. Esa es la percepción del correísmo duro y con esa guía se moverá. La visión alternativa consistiría en interpretar a este momento como una segunda transición, como el paso de un modelo autoritario a uno democrático.

EL DERRUMBE

7 de agosto de 2017

La crisis interna de Alianza País, que es a la vez crisis gubernamental, se explica por múltiples factores, entre los cuales se destacan dos. El primero es el síndrome de la abstinencia, como lo denominó Lenin Moreno. Éste fue provocado no solamente por las características sicológicas del líder, que sin duda influyen decisivamente, sino también por la relativa autonomía mostrada por el nuevo presidente. Cabe recordar la reacción ante los anuncios de apertura contenidos en el discurso de posesión, que incluyó hasta una estadía de varios días en el hospital. Con sus mensajes, Correa dejaba sentado que haría todo lo posible por impedir que su sucesor eliminara su marca registrada del ejercicio del gobierno como bronca permanente. Incluso mucho antes, el día de la proclamación de la candidatura ya advirtió sobre las consecuencias que tendría la más mínima salida de la línea establecida por el propietario de la revolución. Ahora solamente está cumpliendo esas advertencias. El pelele que él esperaba le salió respondón.

El segundo factor es la ruptura del espíritu de cuerpo. El elemento determinante en este aspecto es la abundante –y a esta altura ya innegable- evidencia de corrupción. Hasta hace pocos días era posible esconder la basura bajo la alfombra porque la despensa estaba cuidada por gatos de la misma especie. Pero, ahora ya no se la puede tapar porque la información viene desde afuera y es proporcionada con pelos y señales por los propios corruptores bajo confesión judicial. Esta información amenaza convertirse en un aluvión que puede llevarse todo lo que encuentre adelante, y en ese todo se incluye el actual presidente y su gobierno. Ante ese riesgo, el propio instinto de conservación le aconsejaba a Lenin Moreno tomar distancia. Seguir la norma anterior de socapar la corrupción –pregonada por la expresidenta de la Asamblea y actual secretaria política de Alianza País y por el mismo Correa en sucesivos mensajes- habría sido un acto suicida. Sabido es que el pacto de ceguera, sodera y mudez, que constituye la argamasa de las redes de corrupción, se rompe cuando peligra la propia integridad. Hasta la famosa *omertá* se quiebra en esos casos.

Lo que no está claro hasta el momento de escribir esta columna (viernes por la mañana), es el resultado del enfrentamiento. Las señales favorecen al presidente, especialmente por la escasa capacidad de respuesta de Alianza País a sus acciones. Un comunicado neutro como respuesta al retiro de funciones del vicepresidente puede ser una demostración de la ausencia de dirección política. También puede ser expresión de las tensiones internas que, en la cándida franqueza de un asambleísta, coloca a esa organización en el papel de los hijos de matrimonio en crisis. Sin embargo, no está dicha la última palabra. Aún queda mucha agua por correr, pero en cualquier sentido que vaya será una corriente que seguirá erosionando las bases de AP y de la casi olvidada Revolución Ciudadana. Quién sabe si, frente a semejante caos, el líder ya tenga hecho el *check in* para él y su cuerpo de guardaespaldas.

CIEN DÍAS

28 de agosto de 2017

Antes de la posesión de Lenin Moreno muchas personas suponían que su

gobierno sería la continuación del anterior. Quienes así pensaban aludían a sus silencios sobre temas fundamentales, a los anuncios iniciales sobre su equipo de gobierno y a la permanencia del expresidente como figura predominante en el escenario político. Creían posible que, a pesar de que los caudillismos tienen marca registrada, con él se inauguraría el correísmo sin Correa. La diferencia de estilo era lo único que aceptaban como potencial diferencia, aunque también a esto pusieron reparos cuando se produjo la famosa recriminación al periodista que no lo trató como presidente electo. En síntesis, había suficiente materia para pensar de esa manera.

La gran interrogante en esos días giraba en torno al manejo de la economía. Cualquier persona medianamente informada sabía que lo de la mesa servida era una farsa y que el espejismo de la recuperación se debió a la deuda adquirida para enfrentar la campaña. Por esa certeza, que se apoyaba en las cifras reales, crecían las dudas ante la falta de pronunciamientos por parte de quien tendría que hacerse inmediatamente cargo del problema. Este tema, el económico, se convirtió en la brújula que indicaría la dirección del gobierno y en el termómetro que marcaría el estado de su propia permanencia. De lo que hiciera y lo que dejara de hacer en ese campo dependería no solamente su éxito o su fracaso, sino su capacidad de llegar al final del mandato. Más que el riesgo del descontento social y de una oposición que siempre apareció desarticulada, la amenaza era el fantasma del antecesor. Con su habilidad oratoria y cifras maquilladas, pretendía dejar clavada en la memoria colectiva la bondad de sus políticas económicas. Así como se apropió de muchas cosas, trató de apropiarse también de los efectos positivos de la bonanza petrolera.

En esas condiciones, a Lenin Moreno no le quedaba mayor espacio. La suya podía ser una presidencia insulsa, que se dedicara a administrar la crisis y arreglar la casa para que retorne el propietario o, por el contrario, un gobierno decidido que abordara directa y resueltamente la situación. Escoger esta última opción significaba ir hacia el enfrentamiento con Correa. Esa fue la dirección que tomó. Por cálculos o porque la situación era insostenible y no podía hacer otra cosa, puso sus esfuerzos en el campo político. Intencionadamente o no, allí ha ido creando condiciones adecuadas para las medidas que deberá tomar. Las denuncias de corrupción y la tozudez (en gran parte complicidad) del correísmo dentro de Alianza País crearon un marco que sin duda le favorece. Ha logrado evitar las salpicaduras de las mafias que actuaban a sus anchas y con ello ha establecido un límite preciso. Si logra mantenerlo y profundizarlo podrá ser el punto de partida para el nuevo alineamiento de fuerzas, tanto políticas como sociales que requiere para los siguientes pasos. Los primeros cien días no han sido de luna de miel. Lo que sigue será más duro, con el tema económico en el centro.

El inicio

Si se busca una fecha para marcar el inicio del correísmo como fenómeno político, la más adecuada sería el miércoles 7 de marzo de 2007. Ese día, mediante la decisión de una autoridad de segundo nivel, se concretó el primer paso en el proceso de demolición del régimen político que rigió desde 1978. El presidente, investido apenas cincuenta y un días antes, obtuvo el primero de innumerables triunfos sobre la vieja clase política, que a partir de ese momento inició un deambular sin meta y sin guía en un panorama que nunca supo comprender. Previamente, Rafael Correa ya se había impuesto, sin mucho esfuerzo, como única e inapelable voz sobre los partidos, movimientos y organizaciones de izquierda, que hasta poco tiempo antes se expresaban en las calles y que fueron determinantes en el derrocamiento de gobiernos. A partir de ese día, la aceptación y el apoyo al presidente subieron exponencialmente en las encuestas y así se mantendría a lo largo de los primeros ocho años de los diez que duró su gobierno, precisamente los ocho que duró la bonanza económica.

El hecho que desencadenó el fenómeno no lo realizó directamente él. Fue el presidente del Tribunal Supremo Electoral que, amparado en la interpretación personal de una disposición legal y sin duda extralimitándose en sus funciones, destituyó a 57 diputados de los 100 que conformaban el Congreso. Fue un golpe de Estado sin tanques en la calle, sin soldados atrincherados en cuarteles y en sitios estratégicos. En cualquier régimen democrático una decisión como esa sería considerada exactamente así, como un golpe, y sería resistida incluso con el uso de la fuerza por parte de las autoridades y de las fuerzas políticas y sociales. Por el contrario, aquí solo protestaron los diputados directamente afectados y la policía fue utilizada para garantizar la ejecución de la medida y asegurar el reemplazo de los legisladores por sus suplentes. Con esos suplentes que trataban de cubrir su indignidad con los manteles de la hostal en que se reunieron fuera del alcance de cualquier mirada, el gobierno consiguió una mayoría legislativa que, al no haber presentado candidatos a diputados, no podía obtenerla por medio de los votos o de las alianzas. Era el número que necesitaba para darle visos de constitucionalidad a la convocatoria a una Asamblea Constituyente, convertida desde la campaña electoral en el núcleo de su propuesta política. Pero, para entender lo que vino a continuación es preciso remontarse al pasado, al inicio del período democrático, cuando nació el orden político que agonizaba y al que la Revolución Ciudadana le ayudaba a bien morir y le daba la extremaunción.

Entre Procusto y Penélope

Durante nueve años, a partir de junio de 1970, el país vivió bajo tres regímenes de facto. En esa fecha Velasco Ibarra dio el último de sus autogolpes, En el carnaval de 1972, los militares depusieron al viejo caudillo e instauraron un gobierno al que denominaron *nacionalista y revolucionario*. En enero de 1976 –como efecto retardado de un intento de golpe protagonizado cuatro meses antes por un pequeño piquete- el gobierno unipersonal fue reemplazado por una junta militar. Previamente había expedido la segunda ley de

reforma agraria del país y tuvo algunas veleidades progresistas que entusiasmaron a buena parte de la izquierda y preocuparon a muchos militares. Finalmente, desgastados por las disputas internas y convencidos de que el ejercicio del gobierno era un obstáculo para su profesionalización y su fortalecimiento frente al enemigo externo que les daba su razón de ser, los militares decidieron dejar el gobierno en manos de los civiles.

Sin mayor entusiasmo, los actores políticos y sociales aceptaron la decisión de los uniformados, contenida en el *Plan de Reestructuración Jurídica del Estado*. Con ello, el país se embarcó en un proceso que incluyó diálogos, elaboración de una nueva constitución, reformas a otra (expedida en 1945 y que apenas había regido por algo más de un año), diseño de leyes de partidos y de elecciones, hasta concluir en un referendo sobre las dos constituciones. Finalmente, en agosto de 1979 se posesionaron las autoridades civiles, presidente y legisladores elegidos con las nuevas normas. De esa manera, Ecuador se convirtió en uno de los pioneros en la transición hacia la democracia y en prototipo de lo que los teóricos de las transiciones identifican como procesos *de arriba hacia abajo*. Sin mayores sobresaltos, pero también sin mayor participación social, se comenzó a aludir con cierta frecuencia, aunque con poca convicción, al régimen como una democracia.

La idea fuerza que guiaba al proceso era la erradicación de los vicios del pasado. Para ello se requerían, entre otros factores, partidos modernos asentados sobre concepciones ideológicas que actuaran como guías para enfrentar los problemas de una sociedad que vivía el momento de mayor auge económico de historia, pero que arrastraba todas las lacras del pasado. Corría agosto de 1979 cuando se posesionaron las primeras autoridades del nuevo régimen y de inmediato se hizo evidente la diferencia entre tres tipos de partidos: los tradicionales o viejos, los modernos o ideológicos y los populistas. Los generadores de opinión y los escasos políticos que le apostaban a la permanencia y al fortalecimiento de la democracia, veían con optimismo el declive de los primeros, pero con preocupación el avance de los últimos.

A las normas establecidas para canalizar el proceso democrático –especialmente las leyes de partidos y de elecciones- se las concibió como los diques que podrían contener la corriente caudillista y populista. Según el parecer de quienes impulsaban el proceso, tanto los caudillos militares del primer siglo republicano, como los líderes populistas refrendados por la votación mayoritaria del siguiente siglo, se contaban entre las principales causas de la inestabilidad política en que vivió el país desde su fundación. A la vez, apoyados por una incipiente tecnocracia que iba cobrando influencia, sostenían que la inestabilidad política explicaría la imposibilidad de establecer un modelo de desarrollo viable, que pudiera satisfacer las necesidades de la población y que lograra integrarla en un destino común.

Obviamente, las causas del problema eran más profundas, como se hizo evidente en el discurso del presidente que inauguro el nuevo régimen: “tú me diste un voto, yo te doy una escuela, tú me diste un voto, yo te doy…” afirmó. Seguramente no estaba consciente

de que estaba ofreciendo una clarísima comprobación de una de las definiciones más precisas del clientelismo, aquella que lo califica como el intercambio de votos por favores. Se puede suponer que tampoco conocía que, según los entendidos, esa práctica constituye uno de los pilares del populismo, precisamente aquella lacra que se quiso eliminar con el nuevo diseño institucional. Era innegable que las aspiraciones de los encargados de delinear el nuevo régimen chocaban con la porfiada realidad de las prácticas de los políticos. Todos los actores políticos -nuevos, como el presidente que se posesionaba o viejos, como los que de inmediato se lanzarían a una furibunda oposición- se empeñaban en mantener esas conductas. No hacerlo era condenarse al fracaso electoral.

Lo que vendría en las siguientes décadas sería un juego permanente de interpretación de las leyes, las instituciones y los procedimientos en función de los intereses de cada grupo y de las necesidades del momento. Se repetía de esa manera la conducta que se había instalado en los años treinta del siglo XX, cuando las elecciones dejaron de ser patrimonio de los notables. Por tanto, no era una conducta privativa de los actores políticos, ya que para establecerse debía ser compartida por la sociedad que los sustenta con sus votos. Era el fantasma que pretendía eliminar el nuevo diseño institucional, pero esos primeros pasos ya demostraban que el problema no se resolvía en el campo de las instituciones y las normas y, como se comprobó de inmediato, que su continuación era una certeza con la que habría que vivir. Obviamente, quedaba la duda sobre la capacidad de permanencia que podría tener un orden político sustentado esquizofrénicamente por unas normas que no reflejaban las prácticas vigentes ni conseguían enrumbar a estas.

La respuesta llegó de la mano de la hipocresía jurídico-institucionalista, que también formaba y forma parte de la tradición nacional. En su versión descarnada esta se resume en la repetida frase que, según se dice, data de la época colonial: *la ley se acata, pero no se cumple* (admirable ejemplo de ironía: el uso de una palabra para afirmar la acción y de su sinónimo para negarla) Pero, en su versión sofisticada -que es la predominante- toma la forma del mito del lecho de Procusto. Así como el cuerpo de los viajeros a los que acogía con engaños el personaje mitológico debía ser recortado o estirado para que se acoplara a las dimensiones de la cama, en la tradición ecuatoriana las normas y las instituciones deben ajustarse a las características del lecho político. Cercenar una parte del cuerpo o estirarlo hasta su desmembramiento, fue la práctica a la que se abocaron todos los integrantes de la élite política. Por voluntad propia o forzados por la dinámica del juego, asumieron su condición de Procusto andino. La sociedad, indiferente pero obligada a emitir su voto, nunca pudo ni quiso ser el Teseo que pusiera fin a ese juego.

La indiferencia de las prácticas políticas al lecho institucional y normativo tuvo como contraparte una cadena interminable de reformas de ese mismo lecho. No se había cumplido el primer período presidencial y legislativo, previsto para cinco años (1979-1984), cuando se introdujeron las primeras reformas institucionales. Con desaforado afán se abocaron a recortar, zurcir y parchar el primer régimen democrático producido en laboratorio. Al contrario de lo que indicaría la lógica y el cálculo racional basado en acciones y resultados, las reformas se hicieron precisamente en los aspectos en que se

había puesto mayor interés y cuidado. No se contempló la necesidad de mantener su vigencia por un tiempo adecuado para que fueran creando conductas y rutinas en los políticos y en la población. Sin dar plazo para ello, se alteraron las condiciones básicas de la competencia política. Se redujo la duración del mandato del presidente y de los legisladores, se cambió el nombre de estos últimos y de su organismo (de Cámara de Representantes a Congreso Nacional) se recortó el periodo de los legisladores provinciales a dos años y se modificaron aspectos sustanciales de las leyes de partidos y de elecciones. Junto al Procusto encargado de modificar las conductas, se había colocado una incansable Penélope que iría armando y desarmando un abigarrado tejido de mal llevar Se instaló el virus de la *reformitis*, que iría ampliando o reduciendo la cama de Procusto, según fuera la conveniencia de los intereses predominantes en cada momento. Expresión de esto fue que de ahí en adelante no se realizarían dos elecciones seguidas con las mismas normas.

Los sucesivos y contradictorios cambios debilitaron a los partidos que apenas vivían su infancia o, en el mejor de los casos, su preadolescencia. Obligados a desempeñarse en plazos extremadamente cortos y bajo la prohibición de la reelección de los cargos de elección popular (vigente hasta 1994), los partidos se vieron obligados a la improvisación. No pudieron sobrevivir a reformas como la elección bienal de diputados provinciales (que significaba la renovación de más de las cuatro quintas partes del congreso), y más adelante a la votación personalizada en listas abiertas. Los constantes cambios normativos impedían que los partidos desarrollaran estrategias de mediano alcance y que, en definitiva, pudieran construir una visión que abarcara unos pasos más allá de la siguiente elección. Como corresponde a la tragedia, también esta versión andina se cerró con la muerte de los personajes. El encuentro nada feliz de Procusto con Penélope solo podía llevar a ese desenlace. Ni Teseo ni Ulises estuvieron ahí para impedirlo.

La inestabilidad política, la ausencia de acuerdos sobre aspectos básicos, los pésimos rendimientos sociales de los diversos gobiernos, los golpes de Estado y el sinnúmero de hechos reseñados en las páginas previas se derivaron principalmente de esas conductas enraizadas. La llegada de Rafael Correa al gobierno se explica por el mismo clima de incertidumbre, hastío, desconfianza y rechazo a los políticos y a la política. La elección de una persona que no presentó candidatos para el congreso expresaba ese ánimo, en el que se destacaba el alto grado de quemeimportismo de los electores. Implícita o explícitamente se le daba un voto de confianza para que gobernara solo, sin controles y sin balances. Al fin y al cabo, no eran pocas las personas que en los años anteriores aseguraban muy suelto de huesos que lo que el país necesitaba era un Pinochet. No importaba el signo político, ni las cualidades de la persona, solamente querían oír el crujir de la mesa cuando haya sido alcanzada por la patada.

Los juegos suicidas

Por alguna razón que deberá ser explicada más por sicólogos que por politólogos, en un país donde las normas apenas tienen un valor referencial, las promesas de expedición de

nuevas leyes tienen un atractivo electoral irresistible. La propuesta de una nueva constitución alcanza los niveles de lo mágico para amplios sectores, seguramente porque jamás se han sentido protegidos por la ley y quieren experimentar por primera vez lo que eso significa, o por la comodidad que siempre proporciona la adscripción a las soluciones fantasiosas. Junto a quienes se encandilan con las propuestas de cambios normativos hay también grupos de personas firmemente convencidas del efecto transformador de las leyes (algunos juristas, por cierto, pero también quienes, contradictoriamente, reivindican un marxismo de manual y sostienen que las leyes apenas son la expresión de la dominación de clase). Atentos a esa realidad, los estrategas hicieron girar la campaña presidencial en torno a la instalación de una Asamblea Constituyente. De ella se derivaría el esplendoroso futuro que sobrevendría después de acabar con todo lo anterior.

Tan fuerte fue esta idea, que al asumir el cargo el propio presidente se abstuvo de jurar respeto a la Constitución. Ni siquiera utilizó la fórmula de su homólogo venezolano Hugo Chávez, que ocho años antes calificó como agónica a la constitución sobre la que juraba. No, él fue más allá y directamente asumió el mando en nombre de una voluntad popular que, como se vería a lo largo de todo su período, podía ser interpretada solamente por él y debía expresarse únicamente en él. Estaba claro: su compromiso no era con el orden democrático que le había permitido llegar a ese punto. De ahí en adelante no le ataría ninguna norma escrita (ni siquiera las que llevarían su firma), mucho menos los principios convencionales que, de manera implícita, rigen la práctica política. Había dado el primer paso en la ruptura entre legalidad y legitimidad (el sometimiento de la primera a esta última) que marcaría a todo su gobierno. Había dado también las primeras muestras del carácter fundacional de su proyecto político. Su gestión –en realidad su sola presencia- debería marcar un antes y un después en la historia del país.

Pero, independientemente de esa enorme voluntad, aún había escollos legales que debía vencer para poder instalar su asamblea constituyente. Obligado por las circunstancias a mantenerse dentro de los marcos institucionales, debía seguir el procedimiento de reforma constitucional establecido en la Constitución vigente. Este le obligaba a convocar a un referéndum que previamente debía ser aprobado por el Congreso. Sin más diputados que Fernando Cordero, elegido por un minúsculo movimiento regional, la lógica común y el cálculo político sugerían buscar alianzas y hacer pactos, lo que inevitablemente obligaría a ceder espacios a cambio de apoyos. En otros términos, era imperioso *hacer política*. Claro que existía –siempre existe- la alternativa de dejar las soluciones en el uso de la fuerza. Esta fue la que escogió.

Antes de entrar en ese punto, y para situar la decisión de Correa en el contexto correspondiente, hay que señalar que la historia reciente del país no dejaba una experiencia positiva del juego político. Las prácticas usuales, especialmente en el ámbito legislativo y en la relación entre los poderes, eran las del intercambio de apoyo por recursos y cargos (la expresión en inglés, *pork and patronage* es más gráfica: corrupción y clientela). Diez de los once presidentes que gobernaron desde el inicio del período democrático debieron someterse a ese juego (solo uno –Febres Cordero- optó por la fuerza

combinada con la compra de apoyos, pero debió allanarse a la práctica que se convertiría en la normalidad). Todos ellos, sin una sola excepción, encabezaron gobiernos de minoría y por tanto estuvieron obligados a hacer acuerdos, muchas veces por debajo de la mesa, no siquiera para cumplir con su programa o sus metas, sino simplemente para sobrevivir, para mantenerse en el cargo. Todos ellos sintieron la presión de los poderosos jugadores con poder de veto que encontraban su campo de acción institucional en el congreso y copaban espacios vitales para el quehacer político. Los magros resultados de esos gobiernos en términos de políticas públicas y del bienestar de la población, se explican en gran medida por esas prácticas políticas. El bloqueo permanente, que permite obtener beneficios particulares, aunque con ello se sacrifique el interés general, había dejado profunda huella.

Rafael Correa buscó eludir ese atolladero, aunque inicialmente estuvo dispuesto a llegar a acuerdos con algunos partidos políticos. Su prédica en contra de la *partidocracia* (ese sinsentido en una realidad sin partidos) quedó temporalmente estacionada al costado cuando llegó a entendimientos con agrupaciones de izquierda y centro izquierda, como la RED, liderada por el excandidato presidencial León Roldós, el Partido Socialista, el Movimiento Popular Democrático y facciones de la Izquierda Democrática. Llegó incluso a hacer alusiones al patriotismo del expresidente Lucio Gutiérrez (protagonista de un golpe de Estado) que ofrecía el apoyo de los legisladores de su partido para aprobar la consulta popular en el congreso.

A finales de enero, a menos de dos semanas de haberse realizado la posesión presidencial, prácticamente todos los partidos habían descubierto las virtudes de una asamblea constituyente y estaban dispuestos a dar su voto favorable. El olfato político, que percibe el contexto inmediato, les decía que los vientos empujaban hacia allá y que oponerse habría sido una eficaz forma de suicidio. La memoria, que acumula selectivamente las experiencias y los aprendizajes convenientes, les aconsejaba poner sus propias condiciones y por lo menos ser parte de la conducción del proceso. Si el olfato y la memoria habían garantizado su permanencia durante largos años, no tenía por qué ser diferente en esta ocasión. Mucho más si el personaje al que se enfrentaban y a quien debían rodearle apropiadamente, era un joven inexperto, sin trayectoria política, que como militancia solamente podía presentar su pertenencia a los *boy scouts* y a grupos católicos de reflexión.

El olfato y la memoria fracasaron totalmente en esta ocasión. Los intentos iniciales de seguir la vía de los acuerdos con el congreso le bastaron a Rafael Correa para advertir que estaba llena de baches y de obstáculos. La selección de ese camino le obligaría a frecuentes retrocesos, demasiadas concesiones y seguramente escasas realizaciones. Su visión fundacional (el complejo de Adán, o *adanismo*, como se lo calificaría desde ese momento) no admitía tácticas de esa naturaleza. Pero, ello no impidió que, para lograrlo, inicialmente hiciera uso de algunas prácticas sobradamente conocidas en la política nacional.

El forcejeo en torno a los procedimientos y al contenido del estatuto que regiría a la convocatoria y aprobación de la asamblea, con los guiños a los partidos, fueron acompañados de una de las artimañas más conocidas por la política nacional, la del camisetazo, y de la utilización de la violencia de grupos de choque (provenientes de uno de esos mismos partidos a los que quería sepultar). El camisetazo –o transfugio, como se lo conoce en otros países- se realizó por partida triple. El primero fue protagonizado por los diputados que intentaron aportar –con ventajas para ellos- la mayoría que requería el presidente. Aunque con este paso no consiguió el objetivo final, le sirvió al gobierno para debilitar a los fragmentados grupos de oposición y contar con un grupo que le sería útil más adelante. Incluso, le sirvió para incluir en sus filas al Contralor –el juez de cuentas del país-, que fue el pago anticipado entregado por el Partido Sociedad Patriótica, creado por Lucio Gutiérrez, y que sería uno de los elementos fundamentales en la trama de corrupción que se tejió a lo largo del período. El segundo estuvo a cargo de cuatro miembros del Tribunal Supremo Electoral, que dieron los votos necesarios para aprobar la convocatoria propuesta por el presidente, a pesar de que, al no haber pasado por el Congreso, era claramente inconstitucional. Este también fue un aporte de uno de integrantes de la aborrecida partidocracia, el Partido Roldosista Ecuatoriano del siempre ausente-presente Abdalá Bucaram. El tercero lo realizó el presidente del Tribunal Supremo Electoral con la ya mencionada destitución de cincuenta y siete diputados. El personaje venía de las filas de Sociedad Patriótica.

Por el impacto que tuvieron en el proceso posterior, especialmente en la configuración de un modelo concentrador y vertical de gestión política, cabe recordar brevemente la sucesión de estos hechos. Su inicio lo marca el decreto 002, expedido por el presidente el 15 de enero, el día de su posesión, con el que convocó a una consulta popular para el 18 de marzo, en la que la ciudadanía debería decidir sobre la instalación de una asamblea constituyente de plenos poderes. Con ello, además de cumplir con la propuesta central de su campaña, Rafael Correa salía al paso de los partidos que habían formado una coalición mayoritaria (Partido Social Cristiano, Partido Sociedad Patriótica, Partido Renovador Independiente de Acción Nacional y Unidad Demócrata Cristiana-Democracia Popular) con el fin de realizar reformas constitucionales dentro del Congreso. Al no contar con los dos tercios de los integrantes del cuerpo legislativo, esos partidos no podían romper los "candados constitucionales", pero sí tenían el número suficiente para bloquear la iniciativa presidencial. Fue esa amenaza de inmovilismo la que llevó al gobierno a buscar una mayoría favorable, que pareció concretarse inicialmente con el PSP a cambio de las presidencias de varias comisiones legislativas (otra vieja práctica de la política nacional), así como con la RED y un sector de la Izquierda Democrática. El acuerdo solamente prosperó a medias y se abrió el tortuoso camino del tira y afloja entre el presidente, el Congreso Nacional y el Tribunal Supremo Electoral.

Los siguientes pasos se dieron en torno a las interpretaciones constitucionales hechas por cada uno de esos actores. El TSE envió al Congreso el estatuto propuesto en el decreto presidencial, para que fuera ese organismo el que autorizara la consulta popular. Como era de esperarse, dada la alineación de las fuerzas hasta ese momento, la autorización fue

negada. A finales de enero, Rafael Correa dio una de las primeras muestras del estilo que le caracterizaría a lo largo de toda su gestión, cuando trató de cavernícolas, traidores y seudorepresentantes a los diputados que se opusieron y llamó a ejercer la "presión ciudadana". Esta se materializó en actos violentos realizados por partidarios del gobierno, tanto en el Congreso como en el TSE, con un saldo de cinco heridos. El ablandamiento logrado por la combinación entre acción política sorpresiva y garrotazos callejeros logró el objetivo gubernamental al contar con los votos favorables de los grupos minoritarios y del PSP para la aprobación de la consulta. La condición fue que se respetaran los resultados de las últimas elecciones (en las que habían sido elegidos los diputados). Apoyándose en esa decisión, el TSE fijó la consulta para el 15 de abril.

La respuesta presidencial fue el envío al TSE del decreto 148, que contenía un nuevo estatuto para la constituyente en el que dejaba abierta la posibilidad de revocar el mandato de todas las autoridades, incluidos los legisladores y el propio presidente de la República. La asamblea tendría plenos poderes, con lo que podría situarse por encima no solamente de las autoridades, sino de las instituciones, de las leyes y de la Constitución vigente. Es en ese momento cuando se produjo el sorpresivo *camisetazo* de los integrantes del TSE que permitió la aprobación de la propuesta presidencial. La mayoría legislativa reaccionó y destituyó al presidente del TSE y llamó a juicio a los vocales que aprobaron la convocatoria a la consulta. Aduciendo que la destitución fue un acto inconstitucional, como en efecto lo era ya que se requería seguir el proceso del juicio político, el presidente del TSE acudió a otra inconstitucionalidad y destituyó a los 57 diputados que habían votado por su cesación. Era el miércoles 7 de marzo.

El golpe de los manteles

De hecho, se había consumado un golpe de Estado. A diferencia del golpe tradicional, que en algún momento incluye la participación de la fuerza militar o en general de grupos armados, en esta ocasión se lo hizo por medio de la interpretación inconstitucional y artificiosa de una disposición legal. El argumento fue que la Ley de Elecciones le convertía al TSE, durante el proceso electoral, en la máxima autoridad y que podía destituir a cualquier funcionario público que obstaculizara el proceso. Si los diputados impedían la consulta –según la reflexión del presidente del TSE, seguramente dictada desde el Palacio de Gobierno-, debía aplicárseles esa disposición. Una institución de segundo rango, encargada de la administración de las elecciones y sujeta al control por parte del Congreso, se colocaba por encima de la voluntad popular expresada en la elección de aquellos diputados. Ciertamente, ellos habían procedido inconstitucionalmente al destituir al presidente del TSE, pero el caso debía dilucidarlo el Tribunal Constitucional y no someterlo a una prueba de fuerzas y de hechos consumados. El Estado de derecho, de por sí maltrecho y debilitado, quedaba sepultado.

La policía fue utilizada por el gobierno para impedir que los diputados destituidos entraran al Congreso. Ante ello, se encaminaron hacia el Tribunal Constitucional, que falló a su favor y ordenó que se restituyera a cincuenta de ellos en los puestos. Pero,

piquetes de grupos que antes habían sido la fuerza de choque de algunos de esos mismos partidos, hicieron el trabajo sucio que la policía, por ley, estaba impedida de hacer. La decisión del Tribunal Constitucional solo sirvió para que años más tarde, cuando el correísmo ya era historia pasada, una corte internacional reconozca las violaciones legales y exija que el Estado ecuatoriano indemnice a los diputados.

Lo que vino después es uno de los episodios que los suplentes y los que aceptaron los hechos han preferido olvidar, porque unos y otros actuaron como piezas móviles de esta operación. Los suplentes, porque ya convertidos en bancada del gobierno intentaron esconder la ilegalidad e ilegitimidad de su acción bajo los manteles de la hostería en que los habían reunido para recibir las instrucciones. Los cuarenta y tres que se mantuvieron en el congreso, porque su apoyo al golpe era injustificable y mucho más la vergonzosa aceptación de tener que mostrar, pasiva y sumisamente, su identificación al policía que, lista en mano en la puerta del congreso, les asignaba o les negaba la condición de representantes de la voluntad popular.

Lo más penoso, para unos y otros, para los suplentes y los que apoyaron pasiva o activamente el golpe, es que más temprano o más tarde serían también expulsados del paraíso revolucionario. Ahí comenzó, para gran parte de ellos, el fin de sus carreras políticas. Unos pocos aseguraron su futuro inmediato adscribiéndose al apoyo incondicional al liderazgo de Correa, pero jamás pudieron despojarse del estigma de advenedizos. Estos últimos fueron muy útiles más adelante, cuando se requirieron sus votos en la asamblea constituyente para aprobar una constitución que recortaría sus derechos políticos y los convertiría en seres que solamente podían añorar los sueños del pasado. Fue el destino de los grupos de izquierda, que no supieron –ni intentaron- mantener una distancia crítica con el liderazgo personalista que ya se había hecho evidente en la campaña y que con estos hechos se desplegaba a plenitud.

No llamaba la atención que otras fuerzas políticas actuaran de esa manera. Los partidos que decían no estar con el gobierno ni con la oposición, se guiaban por el cálculo de los beneficios que podían dejar las irregularidades que se cometían en sus propias narices. Para los que destituyeron inconstitucionalmente al presidente del Tribunal Supremo Electoral, el objetivo era evitar las consecuencias de los errores que habían venido cometiendo desde antes de la elección. Ni los unos ni los otros reparaban en los riesgos propios de un juego que entraba fácilmente en el campo de la violación de los procedimientos, de la inconstitucionalidad y de la ilegalidad. Sin el menor asomo de lealtad a la democracia, a todos ellos solamente les preocupaba el resultado inmediato. Acudían a la maniobra que podía dejar beneficios tangibles en el momento, aunque al siguiente día se corriera el telón y todos ellos quedaran eliminados de la escena.

Pero se suponía que habría partidos que no entrarían en ese campo. Aquellos que en una situación como ésta tenían todas las condiciones para demostrar que, por encima de los cálculos de corto plazo, existen unos principios mínimos que deben ser colocados al margen de los resultados inmediatos. Básicamente a la Izquierda Democrática, a la RED

y a Pachakutik les correspondía esa responsabilidad. Se creía, hasta que comenzó el proceso correísta, que esas agrupaciones actuarían no solamente como un balance entre el radicalismo gubernamental y la ceguera casi conspirativa del resto de partidos de la oposición, sino que serían la garantía de preservación de los procedimientos básicos de una política democrática. El apoyo a León Roldós en la campaña presidencial daba pie a esos supuestos. Pero, en contra de todas las previsiones y de todas las esperanzas, no dijeron una sola palabra cuando el TSE aportó a la historia una novedosa forma de golpe de Estado, ni cuando el gobierno les dio el privilegio de acompañar a los *diputados de los manteles*. La humillación de tener que someterse al filtro policial para acceder a los escaños que les pertenecían por el voto ciudadano, estableció la norma para su desempeño en la asamblea constituyente. La posibilidad de un contrapeso al caudillismo personalista quedó cerrada desde ese momento.

Por omisión o por acción, los actores políticos que poblaban la escena nacional en esa compleja coyuntura de los primeros meses del año 2007 se cuentan entre los responsables de lo que vivió el país en los siguientes diez años. No hubo una alternativa clara y eficiente a la vieja política y mucho menos al caudillismo que asomaba en toda su dimensión. Principios como Estado de derecho, procedimientos democráticos y limitación del poder no existieron como elementos rectores de las acciones, aunque eventualmente se los mencionara en algún discurso de conveniencia. Si las acciones del presidente de la República, así como de la mayoría legislativa y de los integrantes del TSE habían despedazado los procedimientos democráticos y republicanos, lo único que cabía era rechazarlas a todas y no darle carta de legitimidad a una de ellas. Como había ocurrido en ocasiones anteriores, especialmente cuando se produjeron las caídas de los tres presidentes anteriores, los partidos y dirigentes políticos prefirieron apostar por los resultados inmediatos. Esperaban que les llegara su cuota. Fue una espera que duró diez años para quienes no pudieron entrar en las filas revolucionarias y una entrega vejatoria y sin condiciones para quienes sí lo hicieron.

Vino viejo en odres viejos

Se podrá decir que en la política siempre tiende a imponerse el pragmatismo sobre los principios y que los políticos no hicieron otra cosa que seguir esa pauta. Pero, esa disyuntiva no tiene cabida en situaciones como las que se vivía en esos momentos. No la tenía, porque se trataba de una crisis terminal del sistema de partidos y, en general, del sistema político. Entre 1998 y 2002, los seis partidos que constituían los soportes del sistema (PSC, ID, PRE, DP, PK y MPD) perdieron más de veinte puntos porcentuales en las elecciones legislativas. Entre 2002 y 2006, perdieron treinta puntos adicionales. En este último año, cuando fue elegido Rafael Correa, los partidos eran una oscura reminiscencia del pasado. Por lo menos desde 1996 los votantes venían buscando al líder que diera vuelta a la situación económica, social y política. Tres presidentes, arrastrados por una corriente que nunca entendieron ni pudieron controlar, dejaron incompletos sus mandatos y con ello pusieron sello a la inestabilidad.

Por consiguiente, no solo era la oportunidad para diseñar un nuevo sistema, sino que era un imperativo hacerlo. Era imperioso impulsar una reforma política para crear las condiciones propicias para la gobernabilidad. Pero, siguiendo más a las sensaciones que al análisis detenido y en profundidad, se clamaba por mejor representación, se hablaba de crisis de representatividad, cuando en realidad los vacíos del sistema no estaban allí. O, por lo menos no era ese el problema central. Estos se encontraban en la baja capacidad de los gobiernos para llevar adelante su gestión y arrojar resultados positivos para la población. En síntesis, había un problema de gobernabilidad, entendida no solo ni exclusivamente como la solidez técnica y administrativa del gobierno, sino como la capacidad de la totalidad del sistema político para responder a las demandas sociales y aplicar políticas públicas orientadas al bienestar de la población. En consecuencia, era necesario enfrentar el problema en el plano político con posiciones y prácticas nuevas. Era imperioso abandonar las posiciones y las prácticas que habían llevado a la cadena de fracasos, pero se insistió en ellas. Insistieron en ellas quienes las conocían de cerca porque las habían sufrido, porque eran las causas de sus fracasos. Obnubilados por el líder que nacía, cerraron los ojos a las causas que impedían la conformación de gobiernos eficientes, eficaces y estables.

Esas causas tenían múltiples orígenes y se manifestaban en diversos ámbitos, pero desde la perspectiva eminentemente política cabe destacar el defectuoso diseño de los diversos componentes del sistema político. De manera especial, los problemas de gobernabilidad se derivaban, en primer lugar, de la manera en que estaba concebida la relación entre los poderes estatales (que no garantizaba su separación y mucho menos su balance). En segundo lugar, provenían de las características del sistema electoral (contradictorias y favorecedoras de la fragmentación). Finalmente, se originaban también en la centralización de las decisiones en las instancias nacionales (sin una distribución territorial de la capacidad de gestión). En conjunto, esas características actuaban como incentivos para los bloqueos, se constituían en obstáculos para la cooperación o la colaboración entre fuerzas políticas y llevaban a la conformación de gobiernos de minoría. En otras palabras y como se ha dicho reiteradamente, por la manera en que estaba diseñado el sistema político ecuatoriano los actores políticos obtenían más réditos al ejercer presión sobre los gobiernos e impedirles gobernar, que al participar en ellos y consolidar gobiernos eficientes.

Los resultados negativos de la gestión gubernamental a lo largo de dos décadas (1980-2000) en que el Producto Interno Bruto per cápita se mantuvo estancado, se explican en gran medida por esas causas políticas. Si bien es cierto que todos los países de América Latina vivieron la década pérdida, Ecuador la multiplicó por dos. La imposibilidad de los gobiernos para definir y aplicar políticas de largo alcance y de definir un modelo económico coherente (ya fuera neoliberal o bien heterodoxo), se derivaba en parte de esos factores políticos. La evidencia más clara es que ningún gobierno contó con mayoría legislativa y el Congreso estuvo siempre fragmentado. Era prácticamente nula la posibilidad de establecer alianzas de mediano plazo que estuvieran basadas en programas o por lo menos en objetivos comunes. Para aprobar cada ley o cada reforma, los gobiernos

se veían obligados a nuevas negociaciones, en particular con los grupos minúsculos –que habían obtenido representación gracias a la permisividad de las normas electorales- y con los representantes de intereses corporativos de carácter económico o social. Los costos para los gobiernos se reflejaban no solamente en las erogaciones que debían hacer, sino en el aplazamiento y finalmente el abandono de sus objetivos.

A esto se añadían dos prácticas políticas que alcanzaron carta de naturalización en el panorama nacional. El clientelismo, entendido como el intercambio de votos por favores, y el corporativismo, entendido como la representación directa de intereses particulares, pasaron a formar parte del quehacer político de todos los partidos y organizaciones sociales. Si en el inicio del período democrático se pudo diferenciar entre partidos ideológicos y partidos populistas, con el avance del tiempo todos debieron adoptar las prácticas de estos últimos. Era la garantía de sobrevivencia, en un sistema que los obligaba a entregar resultados inmediatos y tangibles. El bacheo de la calle o la exención tributaria de un pequeño grupo cobraban más importancia que el equilibrio macroeconómico o que la universalización de la seguridad social. Por todo ello, los gobiernos se abocaron a los objetivos inmediatos y la política se encerró en el corto plazo.

El cambio en las condiciones económicas no incidió sobre esos comportamientos. La dolarización, establecida en enero de 2000, generó un ambiente de certidumbre no solo para las actividades empresariales, sino sobre todo para quienes dependían de un ingreso fijo. Se suponía que, sin el fantasma de la inflación, unos y otros podrían guiarse por objetivos de mediano y largo plazo. Asimismo, se esperaba que los gobiernos, a pesar de haber perdido las palancas centrales del clientelismo (la emisión de dinero y la devaluación), podrían asentar su gestión sobre bases más estables y realistas. Por otra parte, la recuperación de los precios del petróleo en el mercado internacional (que más adelante alcanzarían niveles insospechados), permitiría contar con un flujo de ingresos que nunca tuvieron los gobiernos de las dos décadas previas.

Sin embargo, la política mantuvo la inercia de los años anteriores y no supo aprovechar ese escenario ideal para emprender no solamente en la redefinición del modelo económico, sino sobre todo para impulsar la reforma política. La eliminación de los problemas señalados antes podía lograrse por medio de un conjunto de normas, instituciones y procedimientos que ofrecieran resultados positivos para la cooperación entre los actores políticos. Pero, para ello era necesario contar previamente con un mínimo acuerdo entre esos mismos actores, con lo que se dibujaba un círculo rígido y muy difícil de romper. Los intentos de reforma impulsados en los dos gobiernos encabezados por los vicepresidentes Gustavo Noboa (2000-2002) y Alfredo Palacio (2005-2007), que reemplazaron a los respectivos presidentes, fracasaron precisamente por la ausencia de acuerdos políticos. La escasa o nula comprensión de la situación por parte de los partidos políticos y de las organizaciones sociales cerró las puertas que podían llevar a la reforma consensuada y abrió de par en par las que conducían a una solución caudillista, autoritaria y vertical. Al inicio del correísmo, todos ellos repitieron la receta. No hubo vino nuevo para los viejos odres.

La patada al tablero

Esas fueron las condiciones en que triunfó Rafael Correa en la segunda vuelta de la elección presidencial de 2006. En la primera vuelta llegó segundo, con el 23% de los votos, casi exactamente igual al promedio de los candidatos que habían ocupado ese lugar en todas las elecciones anteriores. Como había ocurrido ya en dos ocasiones (en 1984 y 1996), se revirtió el resultado en la segunda vuelta. También en este caso su votación se situó en el mismo nivel que el promedio de quienes habían triunfado en el balotaje (54%). Hasta ese momento no ocurría nada extraordinario, no se hacía evidente un fenómeno político. Se lo podía tomar como uno más de los candidatos que, desde una base electoral muy pequeña, alcanzaba la presidencia básicamente por el sistema de la doble vuelta. El último presidente elegido antes de él, Lucio Gutiérrez, mostró cifras relativamente similares y, casualmente, venció al mismo contendor y contó con el apoyo de los mismos grupos que constituían el núcleo central de la candidatura de Correa.

El fenómeno político que se mantendría a lo largo de los siguientes diez años comenzó aquel 7 de marzo, cuando pateó el tablero político y se impuso como única voz, inicialmente entre sus seguidores y posteriormente sobre todos los actores políticos y sociales. Con acciones que a momentos parecían actos suicidas, en un juego del todo o nada, logró imponer su ritmo, desconcertó a propios y ajenos, marcó la agenda y pudo comenzar la demolición de la institucionalidad existente.

Ocurrió lo que tarde o temprano debía ocurrir. El camino hacia la consulta y hacia la asamblea constituyente estaba destinado a desembocar inevitablemente en la ruptura del Estado de derecho porque, de la manera como fue trazado, no tenía cabida dentro de éste. Nunca hubo el interés de transformar a la propuesta de instalación de una asamblea en un gran acuerdo nacional. Por el contrario, fue un recurso de campaña y, como tal, una manera de marcar distancias con el resto de candidatos. Era una forma de excluir y no de sumar voluntades. Una vez llegado al gobierno, el presidente Correa buscó imponerla antes que consensuarla.

Una primera expresión en ese sentido fue la interpretación del artículo 104 de la Constitución, que le eximía de buscar algún acuerdo con el Congreso y le colocaba en posición de imponer la consulta sin más requisitos que su propia voluntad. La segunda manifestación se encontró en el estatuto, cuyo contenido claramente excluyente no dejaba dudas de la orientación que se pretendía dar a todo el proceso. Una tercera expresión fue la acción de los grupos violentos en el entorno del recinto legislativo, que llevaba la relación con los diputados exclusivamente al terreno de la confrontación. La última expresión de ese tipo fue el envío al TSE de un estatuto diferente al que fue aprobado por el Congreso, lo que significaba dejar sin efecto los débiles acuerdos que, en contra de la voluntad presidencial, se habían logrado hasta ese momento.

La cadena de inconstitucionalidades e ilegalidades eslabonada por el Congreso y por el TSE, fue el resultado de esos pasos previos y, de manera más general, de la concepción de la política que siempre guió a Rafael Correa y a sus más cercanos colaboradores. El tema estaba ya situado en un campo en el que poco podía hacer la Constitución y muchos menos las siempre maleables leyes. Acudir a una u otras era solamente una de las múltiples maneras de darle un matiz de legalidad y de constitucionalidad a algo que estaba fuera de ese campo. Pero llegó un momento en que ya ni siquiera se mantuvo la preocupación por conservar esas formas y la fuerza se presentó de la manera más descarnada. Fue cuando la mayoría opositora del Congreso y la mayoría gobiernista del Tribunal Supremo Electoral, casi al mismo tiempo, violaron abiertamente la Constitución y la Ley de Elecciones. Ambos organismos y Rafael Correa por su cuenta asestaron el puntillazo final al Estado de derecho y dejaron al país en una situación en la que fácilmente podía prosperar un proyecto autoritario.

Pero, esa patada al tablero la esperaba con ansia buena parte de la población ecuatoriana. La descripción de los acontecimientos de esos días no es suficiente para explicar su impacto. Su condición de punto inicial del fenómeno más agudo de caudillismo de la historia nacional se explica por los antecedentes mencionados. El de mayor peso, sin duda, es el desencanto con la política, que requiere de un tratamiento más detenido y por ello será materia del próximo capítulo. Aquí basta recordar que el grito *que se vayan todos* fue coreado con fuerza a lo largo de los diez años previos y se transformó en la consigna, muy efectiva por cierto, que acompaño al derrocamiento de los tres presidentes elegidos desde 1996. A partir de ese año, en que Abdalá Bucaram recibió la banda presidencial de manos de su antecesor Sixto Durán Ballén, no se produjo otra transmisión del mando entre presidentes elegidos en las urnas. Un presidente interino de dudosa constitucionalidad y dos vicepresidentes elevados a presidentes por sucesión a causa del derrocamiento de los respectivos mandatarios, fueron los encargados de mantener la ficción de normalidad de aquellos años. Todo ello, además, en medio de la peor crisis económica de la historia reciente del país. Eran las aguas turbias, muy apropiadas para el cultivo del germen del caudillismo.

El nacimiento del caudillo

El proceso de incubación de ese germen fue largo y traumático. Desde 1978 hasta 1992, las elecciones presidenciales fueron disputadas por candidatos de los partidos políticos que en aquellos momentos podían considerarse como tradicionales. Los *outsiders* y los *antisistema* (dispuestos a patear el tablero político) estuvieron presentes, pero no llegaron a disputar la presidencia. Los partidos, siempre débiles y volátiles, ganaban las elecciones apoyados por una legislación que les favorecía, pero también porque aún no se había extendido la desconfianza hacia los políticos y en general hacia la política. En la elección de 1996 se quebró temporalmente esa tendencia. El triunfo de Abdalá Bucaram, un *antisistema* que se desarrolló dentro del sistema, estuvo acompañado por la alta votación obtenida por el presentador de televisión Freddy Ehlers, un *outsider*, que, al ser

auspiciado por la Izquierda Democrática, expresaba los primeros síntomas de la descomposición de los partidos.

El fin del caótico y efímero gobierno de Bucaram llegó con un golpe parlamentario que siguió a una movilización ciudadana. Sin ninguna mirada de futuro y mucho menos lealtad a los procedimientos democráticos, las élites políticas no se limitaron a derrocar inconstitucionalmente al presidente, sino que además, en lugar de dar paso a la sucesión constitucional, instalaron un gobierno interino que solo estaba justificado por los temores de quienes lo instauraron. Para completar la cadena de irregularidades, ninguno de los partidos quiso hacerse cargo de la situación caótica que había contribuido a crear. Todos ellos se "bajaron de la camioneta", según la frase del interino que después sería repetida de manera acusatoria por el depuesto.

Aún con esas irregularidades, o precisamente a causa de ellas, esta pudo ser una oportunidad para enfrentar los problemas que se derivaban de un diseño institucional defectuoso y contradictorio. La expresión material de esa oportunidad debía ser la Asamblea Constituyente, encargada de revisar a fondo la Constitución vigente. La Asamblea, convocada en 1997, quedó bajo el control de los partidos que habían predominado desde el inicio del período democrático, a los que se sumó como fuerza emergente y renovadora Pachakutik, surgido apenas dos años antes. Era el momento apropiado para revisar no solamente los aspectos institucionales, sino para comprender los efectos nocivos de las prácticas políticas, así como la interacción que existe entre unas y otras, entre instituciones y prácticas. Sin embargo, en lugar de optar por un diseño que ofreciera incentivos a la colaboración y a los consensos, y que cargara de costos al bloqueo y a los comportamientos obstruccionistas, los constitucionalistas cedieron a los cálculos de corto plazo y dejaron intocados los aspectos que alimentaban esos problemas e incluso introdujeron otros que tendían a agravarlos.

El triunfo de Jamil Mahuad, con la más alta votación registrada en primera vuelta desde el inicio del período democrático hasta ese momento, fue la última oportunidad de los partidos. El manejo exitoso del problema limítrofe con el Perú, logrado en los primeros meses del gobierno, quedó desdibujado cuando el presidente sucumbió ante poderosos intereses económicos que le impidieron enfrentar adecuadamente la crisis financiera. La permisividad de la ley, el manejo fraudulento de una parte de las instituciones financieras y el inmovilismo del gobierno llevaron no solamente al colapso de más del sesenta por ciento de los bancos, sino a la más grave crisis económica del siglo XX. El *feriado bancario* de marzo de 1998 y el congelamiento de los depósitos por un año erosionaron el escaso apoyo con que aún contaba el gobierno y marcaron el inicio de su fin. Este llegó con el golpe de Estado de enero del año 2000.

A diferencia del golpe que derrocó a Bucaram, este contó con la participación directa de militares. No fueron los altos mandos ni se trató de un pronunciamiento institucional, sino de la acción aislada de un pequeño grupo de coroneles y oficiales de menor rango. Pero, eso fue suficiente para provocar la caída del gobierno y demostrar que el grado alcanzado

por la insatisfacción con la situación era tan grave que llevó a desempolvar arcaicas concepciones que ponían la salvación de la patria en manos de la fuerza militar. Después de episodios que lindaban con el sainete, la cúpula militar se encargó de poner el parche que establecería la ficción de continuidad constitucional. Si lo hizo por preservar la cadena de mando, que había sido rota por el grupo de coroneles, o si fue por el compromiso institucional mantenido desde la transición a la democracia, es algo no dilucidado. De cualquier manera, se evitó la dictadura, pero no se pudo evitar la pérdida de los referentes institucionales para el desempeño de la política.

A partir de ese momento, las puertas de la presidencia se abrían para cualquier persona que prometiera un cambio total. Por allí entró, en la siguiente elección, la del año 2002, quien había sido el cabecilla del golpe de Estado. El veinte por ciento con que obtuvo el primer lugar es la votación más baja obtenida por un triunfador de la primera vuelta, lo que por sí mismo es una clara expresión de la situación anómala por la que atravesaba la política. Pero, a pesar de que los candidatos de los partidos tradicionales se situaron por debajo del tercer puesto y con votaciones insignificantes, aún pudieron obtener los primeros puestos en las elecciones legislativas. Su anclaje en determinadas provincias, a las que habían convertido en verdaderos bastiones electorales, alentaba a los electores a dividir el voto entre la opción presidencial y la legislativa. Así, con una representación fragmentada territorialmente, mantuvieron su capacidad de negociación y bloqueo. La primera se la hacía en los subterráneos de la política, eludiendo cualquier compromiso en la gestión. El bloqueo, por el contrario, era la tarjeta de presentación que otorgaba el pase al escenario político.

A la inexperiencia del nuevo gobernante y de sus funcionarios se añadía un congreso fragmentado en el que apenas contaba con una minúscula representación. Empujaba a su favor la estabilidad económica, derivada de la dolarización –decretada por Mahuad nueve días antes de sucumbir por el golpe- y el incremento de los precios del petróleo en el mercado internacional. Sin embargo, a contramano de esa situación ventajosa, en diciembre de 2004, un mes antes de cumplir el segundo año de su mandato, dio el primer paso en el camino que conduciría a su derrocamiento. Con una mayoría legislativa armada al apuro, en una sola noche, sin juicio político y violando todos los procedimientos establecidos, destituyó y sustituyó a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia, del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo Electoral. De esta manera, sin soldados y sin tanques, el mandatario protagonizó el segundo golpe de Estado de su carrera, aunque esta vez ya no lo hizo como militar sino como presidente de la República. Cuatro meses más tarde, él mismo era la víctima de un nuevo golpe protagonizado por el Congreso que se enancó en la *rebelión de los forajidos*. Esa movilización social marcó la diferencia con los golpes anteriores y fue también la evidencia del desencanto generalizado con la política. Aunque la solución final estuvo en manos de los partidos, en esta ocasión no hubo la pasividad ciudadana, lo que constituyó un llamado de alerta. Obviamente, no fue atendido.

Esa larga cadena de hechos irregulares, que abarcó prácticamente diez años, fue la expresión de la crisis terminal del sistema político ecuatoriano. Esos episodios se derivaban de los problemas que se habían ido acumulando y, a la vez, cada uno de esos episodios magnificaba los problemas. La política se había encerrado en un círculo de hierro, que podía romperse solamente por una de dos vías contrapuestas. Una era la del acuerdo entre los actores políticos y sociales en torno a objetivos comunes, que solamente podían definirse a partir del reconocimiento de los errores y mediante renunciamientos de cada una de las partes. Otra era la imposición de una de las fuerzas sobre las demás para establecer un modelo que, obviamente, buscaría imponer para eludir el camino de los tres predecesores. Esta última fue la que tomó cuerpo desde la campaña, que se planteó como una competencia de propuestas refundacionales alejadas de cualquier asomo de acuerdos en torno a objetivos comunes.

El correazo: la campaña premonitora

El desencanto y la desconfianza –que habían afectado inicialmente a cada uno de los partidos, después invadió al conjunto de ellos y de ahí a la política en su totalidad- alentaron las posturas de demolición del sistema sin la contraparte de su reconstrucción. El rechazo al pasado, perfectamente sintetizado en el *que se vayan todos* de las marchas callejeras, se imponía sobre la necesidad de imaginar un futuro alternativo. Este únicamente se reducía al procedimiento que sería utilizado –la asamblea constituyente-, sin alusión alguna a sus contenidos. Esa fue la tónica de la campaña, y dentro de ella Rafael Correa asumió la posición más radical. Rechazando cualquier alianza con las organizaciones sociales y con los partidos de izquierda, tomó sus consignas y las presentó como propias. El lenguaje tecnocrático del economista crítico, que había ocupado el ministerio de Economía por menos de cien días, se combinó hábilmente con la retórica fundacional de los movimientos sociales.

A la contienda presidencial se presentaron trece candidatos, el número más alto registrado desde el inicio del período democrático. El desorden en que se desenvolvía la política daba visos de realismo a los cálculos de personajes que intentaban entrar en ella por la puerta que usualmente es la de salida o de fin de la carrera. La pérdida casi total de referentes institucionales, especialmente en lo que se refiere a los partidos y a la experiencia política, otorgaba probabilidades a las decisiones de competir por el cargo presidencial, que en otras condiciones habrían sido vistas como aventuras sin ningún futuro. La postulación de Rafael Correa era una de esas, pero obedecía también a la estrategia usual de sectores de la izquierda de utilizar la contienda electoral para la movilización social y para mantener la presencia testimonial. El primer objetivo de las fuerzas que lo impulsaron no era el triunfo. Si este se producía no sería fundamentalmente por la voluntad de sus integrantes, sino más bien por la confluencia de otros factores, como la descomposición del sistema de partidos, el desencanto ciudadano y la ceguera de los oponentes.

Sin embargo, todo indica que Correa no compartía esa percepción utilitaria y ciertamente derrotista, o por lo menos conformista, de la participación electoral. Las decisiones que tomó desde el inicio de la campaña hicieron evidente esa diferencia y pusieron de manifiesto la orientación personalizada y personalista que tendría la campaña (y que mantendría a lo largo de su gobierno). El primer indicador en ese sentido fue el alejamiento y posterior ruptura con las organizaciones sociales y políticas, en nombre de la necesidad de una *candidatura ciudadana*. El rechazo a conformar su binomio con Luis Macas, dirigente indígena histórico, fue un indicio muy claro y, de paso, un anticipo de la orientación que tomaría en el gobierno con respecto a las organizaciones populares y en particular a las indígenas.

Otra señal fue la decisión de no presentar candidatos para las elecciones legislativas, impuesta por él a sus partidarios y considerada por muchos de ellos como un acto suicida. Además, como lo percibieron varios de los impulsores iniciales de su candidatura, era un obstáculo para la participación electoral de dirigentes y militantes que valoraban como positiva la experiencia legislativa de las últimas décadas. Era una medida que de hecho desconocía los avances logrados por aquellos grupos desde el inicio del período democrático. Sobre todo, era una expresión de su concepción personalista y fundacional del proyecto político. La trayectoria de personas y organizaciones quedaba subsumida a la figura del líder.

Un indicador adicional fue el contenido ecléctico de sus propuestas, que basculaban entre la heterodoxia económica, propia de la izquierda, y el autoritarismo conservador, que lo situaba en el campo de los sectores de la derecha más tradicional. Económicamente propugnaba el papel activo del Estado, no solo como regulador sino como el actor central y, por medio de declaraciones ambiguas, dejaba entrever la posibilidad de abandonar la dolarización para volver a la emisión de una moneda propia. En lo político propugnaba un gobierno fuerte, que impusiera sus decisiones por encima de la lucha de facciones, en lo que coincidía con las vertientes autoritarias de la izquierda, pero al hacerlo desde posiciones paternalistas y moralistas se desplazaba más bien hacia la derecha. Esta posición –que, como se vería más adelante, era su concepción del ejercicio de la autoridad- quedó graficada en el cinturón blandiente como amenaza de castigo, tal cual el *correazo* del padre en la cultura patriarcal. No podía ser más elocuente el juego de palabras con su apellido.

Los estudios de opinión de la época –encuestas, grupos focales- permiten inferir que la personalización y el voluntarismo fueron determinantes para el triunfo de Rafael Correa. Al basar el diseño de la campaña en las características del candidato y no en una propuesta política claramente definida, los responsables de esta no hacían más que reflejar el estado de ánimo de la población. Los contenidos de la campaña recogían los anhelos de encontrar al líder fuerte, la mano dura que trajera el orden y que pusiera fin a las discrepancias. Era indiferente o, en el mejor de los casos una preocupación menor, si con ello se podrían restringir los derechos y las libertades. El contagio del síndrome de hastío a amplios sectores de la población nublaba la vista y llevaba a aceptar las fórmulas más

descabelladas. Era el contexto social y político ideal para el surgimiento de un personaje con las características que presentaba Correa y que eran potenciadas por su campaña. Estaba en el momento adecuado. Por ello, en esos mismos días no faltó quien sugiriera que, si Correa hubiera saltado a la arena política en las décadas de los ochenta o de los noventa, habría disputado los últimos lugares en la contienda presidencial. En las circunstancias de la campaña del 2006, por el contrario, logró entrar a la disputa de la segunda vuelta.

El peso del desencanto con la política relegó a las diferencias ideológicas a un segundo plano. Aunque gran parte de la campaña estuvo planteada como un enfrentamiento entre izquierda y derecha –sobre todo en la segunda vuelta y gracias a la presencia del pintoresco empresario Álvaro Noboa-, las propuestas de los candidatos eran demasiado vagas y ambivalentes como para reflejarlo. Si bien durante gran parte de ese año se debatió sobre un posible Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, este fue apenas un tema secundario en la campaña y no necesariamente el que marcó las diferencias y definió las preferencias. Incluso, el propio gobierno saliente, siendo todavía ministro Rafael Correa, aseguraba que aún no tenía una posición al respecto, como si la decisión le fuera ajena y no estuviera a cargo de la comisión que había formado para esa negociación. Los intentos de presentarla como una disputa entre izquierda y derecha llevaron a afirmar que quienes se enfrentaban eran Chavez y Bush, aunque más preciso, por el contenido *vintage* del debate, habría sido aludir a Stalin y Truman.

Ese vacío de contenidos de la campaña, cobijado bajo el manto de la refundación (que no fue llamada así para no rememorar experiencias recientes), no ofrecía las pistas que requieren los votantes para canalizar sus preferencias. De manera especial, no hubo el debate en profundidad sobre la economía, que requería un momento como el que vivía el país. Habían transcurrido seis años desde la dolarización, los precios del petróleo en el mercado internacional estaban al alza, se sentían los resultados positivos de la estabilidad económica, finalmente iban quedando atrás los peores recuerdos de la crisis de los últimos años del siglo anterior. Sin embargo, ninguno de los candidatos supo captar esas señales y convertirlas en guías para su campaña. Tampoco la población estuvo dispuesta a escucharlos. El voto, como había ocurrido tantas veces a lo largo del siglo XX, respondió a lo emocional. Se impuso la utopía salvadora de la constituyente alentada por el *correazo* castigador. La utopía del cambio total se ofrecía con la mirada hacia un lejano horizonte. Con la correa amenazante, era difícil no ver que sería una utopía reaccionaria.

Los lunes de esos tiempos

EL SUICIDIO DE LOS DINOSAURIOS

11 de septiembre de 2006

Cada una de las últimas resoluciones del Tribunal Constitucional ha sido una dosis del lento veneno con que se está matando a lo poco que queda del Estado de derecho. Cuando la televisión transmite la escena en que sus vocales, muy sueltos de cuerpo, fumando relajadamente en un edificio público, comunican que han aprobado la participación de unas cuantas candidaturas adicionales, sólo se puede suponer que son personas que le apuestan al caos y que forman parte de esa cuadrilla de demolición que viene cumpliendo eficientemente su función. No es posible encontrar una razón jurídica para justificar una decisión que desde cualquier punto de vista viola principios constitucionales y hace estallar en el aire cualquier asomo de la más elemental lógica. Aún más, ni siquiera es posible encontrar alguna justificación política, porque es obvio que lo hecho se vuelve en contra de los partidos que los colocaron en esos cargos. Las argucias encaminadas a quitar votos a determinadas candidaturas muy pronto les pasarán la factura en forma de mayor rechazo ciudadano.

A lo sucedido en el TC se puede añadir una larga cadena de maniobras realizadas por varios partidos políticos en diversas instituciones. Una de las más recientes fue el plazo amistoso que concedió el Tribunal Supremo Electoral a dos diputados para que presentaran su renuncia, cuando la ley establece que ésta debe anteceder a la inscripción de la candidatura. Otras, que van quedando en el olvido por el efecto somnífero del escándalo diario, tienen que ver con la forma en que se reestructuró hace unos meses al TSE, la aprobación de la ley Huaquillas, la eliminación del atentado al pudor como delito y la alegre eliminación del fondo petrolero, todas ellas en el Congreso Nacional. Invariablemente, en todos esos casos se procedió con la lógica de los resultados inmediatos que no mide las consecuencias al futuro. Consecuencias que se expresan en la erosión de las instituciones, pero también en el debilitamiento y posiblemente en la desaparición de los propios partidos políticos.

No se puede creer que gente ducha y experimentada como la que hace política desde los partidos no tome en cuenta los efectos de lo que vienen haciendo. Sus acciones impactan directamente en el núcleo de las instituciones democráticas, en las bases del Estado de derecho, que cada vez tienen menor credibilidad entre la ciudadanía y que día a día van perfilando de mejor manera su imagen de cascarones vacíos. No escucharon el QSVT (que se vayan todos) de abril del año pasado, y si lo hicieron lo solucionaron con la bravuconada de aquel talento de televisión que no encontró mejor argumento que sacar la pistola en la sala del Congreso, como años atrás lo había hecho su padrino.

Como viejos dinosaurios que no han podido adaptarse a los nuevos tiempos, los partidos han decidido suicidarse. Lo

grave es que en su caída pueden aplastar a cualquier ser viviente que aparezca por ahí. Bueno, talvez no a todos, porque la ciencia dice que la cucaracha siempre pudo sobrevivir.

REFUNDACIÓN

18 de septiembre de 2006

En el país de los imposibles, quienes aborrecen de cualquier forma de institucionalidad sostienen con fe ciega la necesidad de instalar una Asamblea Constituyente para cambiar las instituciones. De tanto insistir en el asunto, ha terminado por convertirse prácticamente en el tema central de la campaña. Sin duda, es algo que debe hacer muy felices a quienes en la tarde del 21 de abril proclamaban la refundación del país, porque la famosa asamblea no es sino otra forma de expresar los mismos delirios epopéyicos con los que tomó el mando el gobierno de los forajidos. La idea de poner el contador de vueltas en cero e iniciar a partir de ese momento la historia del país es tan vieja como los años que tiene de vida republicana. Tantas fundaciones y refundaciones han existido, que para algunos episodios ni siquiera se pudo encontrar un nombre adecuado y se optó por adjetivar el mes de los sucesos, con lo que pasaron a la posteridad los julianos y los marcistas.

Los dos candidatos que, según las encuestas, encabezan la carrera hacia la presidencia firmaron un compromiso en ese sentido. Es verdad que en gran medida lo hicieron al apuro porque el objetivo central era cerrar el paso a la candidatura del presentador de televisión Freddy Ehlers. Cabe recordar que, de haberse concretado, ésta habría sido la mejor forma de asegurar el triunfo del populismo o de la derecha, de manera que no les quedaba sino el espacio suficiente para estampar la firma y, en el caso de León Roldós, para poner una nota aclaratoria que explicaba el procedimiento a seguir. De cualquier forma, el compromiso está ahí y es altamente probable que el 15 de enero se inicie un tortuoso camino lleno de debates constitucionales, de cambios en las mayorías legislativas y de gente gritando en las calles.

Antes de que todo ello ocurra, sería conveniente respirar profundamente, contar hasta quién sabe cuánto y pensar en la validez, la oportunidad y la eficacia de la asamblea. Un primer punto en el que se debe concentrar esa reflexión es en su condición de vehículo adecuado para realizar la reforma política. La asamblea que funcionó en Conocoto entre 1997 y 1998 demostró que no lo es porque sobre ella se concentran todas las presiones corporativas propias de la política nacional. Un segundo punto a considerar es si en realidad podrá cumplir con la función enorme y pomposa de espacio para la refundación del país. Las leyes y las constituciones se discuten y se aprueban en nuestro medio de acuerdo a los intereses del momento, no en función de lo que los mismos refundadores llaman los grandes objetivos nacionales. Elíjase como se elija a sus integrantes, nada asegura que en esta ocasión se pueda producir algo diferente. Finalmente, el punto más importante es que de poco servirá instalar una asamblea o cualquier otro dispositivo si no se sabe a dónde se quiere llegar. De lo que se ha visto hasta

ahora, no hay una sola señal en ese sentido.

DONDE TERMINAN LAS CALLES
2 de octubre de 2006

El camino hacia la milagrosa asamblea que propone el candidato con mayor opción de triunfo está lleno de espinas y más de uno terminará pinchado. Para comprobarlo basta hacer un recuento de todos los pasos que se deberían dar para llegar a ella.

Primero, se supone que el presidente recién posesionado convocará a una consulta popular en la que pedirá la aprobación de los ciudadanos para instalar esa asamblea. Esto llevará de inmediato a debatir si esta medida es constitucional o inconstitucional, lo que inevitablemente se traducirá a un enfrentamiento con el Congreso, con el Tribunal Supremo Electoral y con el Tribunal Constitucional. La única forma que tendría un presidente sin apoyo en el Congreso para vencer este obstáculo sería la presión de la gente en la calle.

Segundo, si logra que la multitud se imponga –lo que, por cierto, podría demandar semanas o incluso meses-, recién podría convocarse a la consulta. Para que esta se realice y para que tenga un contenido democrático, será necesaria una campaña. Es poco probable que durante ese período se discutan los contenidos de las reformas, y que más bien se enfrenten posiciones radicales a favor y en contra del gobierno. La consulta podría transformarse en un plebiscito acerca de su gestión y de su permanencia. Para salir bien parado de esta, nuevamente tendría que acudir a la presión en las calles.

Tercero, si triunfa la tesis de la asamblea, deberá convocar a la elección de sus integrantes. Previamente, habrá sido necesario establecer nuevas normas al respecto, lo que seguramente provocará también enfrentamientos y presiones callejeras. Suponiendo que lograra superar ese escollo, deberá desarrollarse la campaña, con sus enfrentamientos y con la incertidumbre de los resultados. Si se procede con reglas democráticas será imposible asegurar un resultado favorable a alguien, aunque este alguien sea el gobierno que la impulsa. Lo que sí se puede anticipar, de acuerdo a la orientación que se quiere dar a las nuevas reglas electorales, es que habrá altísima fragmentación, lo que impediría conformar mayorías de cualquier signo. De esa manera, la aprobación de cada artículo de la nueva constitución dependerá más de los intereses particulares de cada asambleísta que de la necesidad de contar con un cuerpo jurídico coherente. Seguramente, la voz de las calles podrá imponerse sobre esas voluntades aisladas.

Finalmente, si la asamblea está destinada a fundar un nuevo orden, éste deberá materializarse desde el momento en que se ponga el ejecútese a la Constitución. Sería un absurdo mantener intocadas las viejas instituciones (Congreso, Ejecutivo, Función Judicial, organismos de control) si todo el proceso se ha hecho para cambiarlas. Por tanto, se deberían realizar nuevas elecciones y empezar nuevamente desde cero. Es probable que para ese momento la política ya se haya instalado definitivamente en las calles y

que sea ahí en donde se resuelvan tanto los asuntos políticos como los constitucionales. Desgraciadamente, algunas de esas calles se inician en los parques floridos de las buenas intenciones pero terminan abruptamente en la puertas grises de los cuarteles.

ALTIVA SUMISIÓN

25 de mayo de 2015

Según la secretaria de la Política, la salida del gobernador de Guayas se debería a una discrepancia sobre los arreglos de seguridad para la visita papal. De acuerdo a sus declaraciones, el representante del Ejecutivo en la provincia más poblada del país habría sugerido, "sin sustento", un cambio del lugar en que se realizará la misa, lo que –siempre según la funcionaria- podría poner en riesgo e incluso comprometer la integridad papal. Si eso es así, si la renuncia obligada se debió a la expresión de una sugerencia, de un parecer, entonces la atención se desplaza desde los temas relacionados con el manejo de la visita hacia las condiciones a las que están sometidos los integrantes de las filas altivas y soberanas.

No debe ser fácil moverse en ese espacio hermético, de puertas y ventanas cerradas, escasamente ventilado y donde dicen que la ropa sucia no se puede lavar a la vista de seguidores y votantes. Ámbitos de ese tipo solamente pueden mantenerse cuando logran implantar una palabra única que debe ser reproducida en todos los tonos y en todos los niveles. Mucho mejor si esa palabra nace de una sola persona, de un líder sabio e infalible. Así, los demás solamente deberán reproducirla cuantas veces sea necesario (¿no es eso lo que sale de la boca de ministros y asambleístas, lo que se lee en las redes sociales y en la prensa oficialista?). Pero, en ese repetir y repetir hay quienes se sienten con la responsabilidad de añadir algo de su propia cosecha, y es ahí cuando aparecen problemas como estos. Una simple opinión, una sugerencia, un parecer, puede constituirse en una intolerable salida del libreto.

Mal paga el diablo a sus devotos, dice el dicho. Pero, el problema no es el diablo sino el devoto que, por definición, es alguien que renunció al entendimiento y dejó que otros pensaran por él. Todo irá bien y será gratamente recompensado si es observante de la regla básica que transforma a la sumisión en una virtud, como lo sabe perfectamente la asambleísta que la pregona una y mil veces. La revolución ha sido generosa con sus fieles seguidores que se han ceñido a ese principio, pero es implacable con quienes voluntaria o involuntariamente lo violan. Muchos son ya los testigos que pueden dar cuenta de esto último, comenzando con el MPD y Pachakutik, pasando por Acosta, Larrea y los postadolescentes de Ruptura, hasta terminar con los Yasunidos. Son los de agenda propia, los infiltrados, los traidores, en fin, los merecedores de los calificativos de los sábados que, desde el oscuro rincón en el que fueron recluidos, deben estar a la espera de la llegada del defenestrado gobernador.

Son las reglas y las condiciones que se deben respetar para seguir perteneciendo al mundo de la altiva sumisión. Un mudo en el que una opinión o una sugerencia pueden terminar en la exclusión, aunque

a lo largo de todos los años anteriores se hubiera hecho todos los méritos, incluida la pérdida de la dignidad.

PICHICONGRESO

30 de octubre de 2006

Antes de la elección no había duda alguna sobre el pobre destino que les esperaba a los partidos que durante más de dos décadas ocuparon el centro de la escena política nacional. Ellos hicieron todo lo posible para merecer el rechazo de los electores. Jamás abrieron sus oídos para escuchar las voces de crítica ni para comprender los reclamos. Ensimismados, dejaron que se acumulara el malestar y que se transformara finalmente en una enorme corriente de votación en su contra. Sin mover un dedo para impedirlo, durante la campaña dejaron que se generalizara el calificativo de partidocracia, tan pobre como mal utilizado pero tremendamente útil con su carga peyorativa. Impávidos, prefirieron desgastarse en sus peleas internas o colocarse a la cola de viejos cadáveres políticos antes que hacer el mínimo esfuerzo por comprender la dimensión de los problemas que los amenazaban.

Al mismo tiempo, desde la otra orilla, allí en donde está esa cosa informe llamada sociedad civil, surgió la idea de no presentar candidatos a diputados y de convocar a anular el voto en la elección legislativa. Los brillantes ideólogos de esa posición suponían que de esa manera se castigaría a los partidos tradicionales y que el Congreso perdería la poca legitimidad que aún le queda. Claro que se olvidaron de dos pequeños detalles. Primero, que otros socios de esa misma partidocracia podrían beneficiarse con esa medida, ya que podrían alcanzar escaños con magras votaciones debido a que una alta cantidad de votos nulos reduce el número de válidos. Segundo, que la estrategia se justificaría únicamente en caso de que triunfara su candidato a la presidencia, que sería el paso inicial para convocar a una consulta que, a la vez, aprobaría la instalación de una Asamblea Constituyente, que finalmente podría disolver el deslegitimado Congreso. En fin, demasiadas condiciones para un solo efecto y mucha ingenuidad entre medio.

Solo faltaba que se juntara la sordera de los partidos y la ceguera de sus impugnadores para que unos terceros pudieran entrar por las tranqueras. El resultado es que el lugar que tenían reservado los viejos partidos en el Congreso no lo ocuparán ahora las organizaciones de la sociedad civil, sino otros dos, que se llaman igualmente partidos pero que apenas son una empresa de un magnate y una escuadra de un coronel. Los errores de los unos y la estrechez de mira de los otros –y no una espectacular votación– es la principal explicación del triunfo de quienes tendrán la presidencia y la vicepresidencia del Congreso durante cuatro años. Ellos podrán actuar muy cómodos y a sus anchas, como lo hicieron cuando formaron la mayoría que nombró a la Pichicorte y que arremetió contra las instituciones básicas del Estado de derecho.

Ya saben cómo se hace y seguramente tratarán de no cometer los errores del pasado, especialmente ahora que vienen con sed de venganza. Estamos a las

puertas de la era gloriosa del Pichicongreso, con todo lo que eso puede significar. La responsabilidad de que ello haya ocurrido se reparte equitativamente entre sordos y ciegos.

RETORNO AL PASADO

20 de noviembre de 2006

Las elecciones del próximo domingo han sido calificadas casi como un enfrentamiento entre Chávez y Bush. Pero, si de metáforas se trata, cabría la de una contienda entre Roosvelt y Stalin, porque es innegable que los candidatos finalistas han logrado el imposible de retornar en el tiempo. El lenguaje suena a viejo archivo de la guerra fría más que a las expresiones que acompañan a la mal llamada lucha de civilizaciones. La contienda entre Ponce y Huerta, allá por los años cincuenta, seguramente abordó temas más acordes con la modernidad o por lo menos debe haber estado más cerca de la realidad de su propio tiempo. La campaña de esta segunda vuelta es un retorno al pasado. Nuevamente los mismos temas que ya fueron superados en América Latina hace más de dos décadas y los mismos fantasmas que rondaban hace cuarenta o más años por esa parroquia que era el país.

Es verdad que la disputa se plantea entre las dos tendencias más radicales del amplio menú que se ofreció en la primera vuelta. Pero, radicales no es sinónimo de contraposición en todos los aspectos, o por lo menos no lo es en este caso. Claro que tienen concepciones opuestas en la forma de organizar la economía, pero a la vez ninguno de los dos puede ser calificado como una persona que privilegiará la estabilidad económica y que será cuidadoso con los indicadores macroeconómicos que tanto preocupan a los inversionistas y a los organismos internacionales. Para decirlo en dos palabras: con ninguno de ellos hay algo de certidumbre en torno al manejo económico. Los dos ofrecen experimentar hasta encontrar la fórmula mágica que haga la felicidad de los ecuatorianos. Que el uno haya sido más explícito al respecto, es solamente un detalle de campaña, pero en el fondo no hay diferencia.

La similitud mayor, sin embargo, se encuentra en un aspecto poco visible hasta ahora, pero que será de mucha importancia en el ejercicio del gobierno. Es la condición de ambos como outsiders, como ajenos al sistema, no en el sentido electoral del término, sino en cuanto a su inserción en el medio político nacional. El calificativo le ha calzado muy bien a Rafael Correa durante la campaña, pero no le queda grande ni chico a Álvaro Noboa en cuanto a su relación con el mundo político e incluso con el propio medio empresarial en que se mueve. La capacidad de cada uno de ellos para establecer acuerdos, para consolidar alianzas es muy reducida, y sin éstas simplemente no se puede gobernar. No se trata de las coaliciones políticas, que por lo menos uno de ellos podrá hacerlas en el Congreso, sino de esas otras, menos visibles, que se hacen con los diversos sectores de la sociedad. Cualquiera de los dos será considerado un advenedizo en ese campo, será visto con desconfianza y tendrá poco espacio para moverse. Más aún si los dos se han empeñado en volver hacia atrás el calendario recordar con precisión el pasado y olvidar totalmente el futuro.

ROUSSEAU ANDINO-TROPICAL

18 de diciembre de 2006

Ahora resulta que la asamblea no ha sido para hacer una constitución, sino para "movilizar a la ciudadanía, repolitizar a la sociedad, y construir un escenario donde podamos, los ciudadanos, disputar espacios de poder público a los grupos de poder y de presión". Palabras más, palabras menos, lo ha dicho quien se encargará de petróleos y sustancias contaminantes, pero que le ha entrado a eso que llaman filosofía política o, más terrenalmente, derecho constitucional. "El gran objetivo es tener un nuevo proyecto de vida en común para el Ecuador. Un nuevo pacto social". Ni más ni menos. La versión criolla del contrato social que pregonaba el ginebrino Rousseau, quien estaba convencido de que el hombre había sido alguna vez un buen salvaje hasta que por ahí apareció la maldición de la propiedad privada y le cayeron encima todos los males habidos y por haber. Creía que al mundo de su tiempo –como a este tiempo, según nuestro contractualista- le hacía falta un nuevo contrato social que permitiera volver al idílico estado de naturaleza que se había perdido por la perfidia y el egoísmo de los hombres (sólo hombres, como correspondía a una época en que no estaba de moda lo políticamente correcto de los ciudadanos y ciudadanas y cosas por el estilo).

En realidad, cuando escogió El Contrato Social como título para la que a la postre sería su obra más conocida don Jean Jaques tuvo uno de esos aciertos que cualquier publicista envidiaría. Nada mejor que un buen nombre para crear una marca, y él sin duda la creó cuando hizo imaginar a decenas de miles de personas que el interés general o el bien común existió en un pasado remoto y que la tarea de la sociedad sería recuperarlo. Parece que en eso andamos con esta onda que no quiere refundar al país sino repensarlo.

Pero, volviendo al personaje histórico, cabe recordar que antes de él dos filósofos ingleses sentaron las bases del contractualismo, aunque con planos, diseños y cimientos muy diferentes. Thomas Hobbes, por un lado, creía también que había existido un estado de naturaleza pero, al contrario de Rousseau, consideraba que estaba caracterizado por el enfrentamiento de todos contra todos, porque el hombre es malo *by deafult*. Por tanto, era necesario hacer un pacto, un contrato, pero para entregar el poder a un tercero que se encargaría de poner en orden a moros y cristianos. Ese otro no podía ser sino el poderoso Estado, el Leviathan, ese temible pero protector monstruo mitológico. Por otro lado, John Locke, se hacía menos ilusiones y, en lugar de buscar el retorno al pasado inexistente, se interesó en lo que se debería hacer para construir un ambiente en que los hombres pudieran vivir en armonía. Su solución fue el Estado de derecho, esto es, el imperio de la ley. Ahora, gracias a los refundacionales que no quieren refundar sino pensar, tenemos que escoger entre los tres padres del contractualismo, aunque de todas maneras, según los aires que soplan, nos tragará el Leviathan.

EL REY DE CORAZONES

15 de enero de 2007

No fue necesaria la posesión del presidente de la República para iniciar la madre de todas las guerras. Ni él ni los integrantes del congreso perdieron un solo minuto para marcar el campo del enfrentamiento. Desde uno y otro lado trazaron las líneas fundamentales para señalar el camino que seguirían de ahí en adelante. Desde ambas orillas hubo insultos, amenazas y puños crispados. Hubo desconocimiento y deslegitimación del adversario, hasta llegar a anuncios desembozados de utilización de prácticas inconstitucionales e ilegales para alcanzar sus respectivos objetivos. Los congresistas querían hacer nombramientos sin ceñirse a los procedimientos establecidos, como ya lo hicieron al destituir a dos diputadas. El futuro presidente se mostró dispuesto a utilizar los mismos recursos para conformar un organismo electoral que le permitiera saltarse todo el trámite establecido en la Constitución hasta llegar a una quimérica e inservible asamblea constituyente.

Pero, por el momento la sangre no llegará al río. Tostando granizo –como decía el inolvidable *Lluro* Córdova- el partido que pocas horas antes expulsó a las dos diputadas porque querían apoyar la consulta del gobierno, ahora mondo y lirondo se ha corrido a la posición que ellas defendían. Lo que se ha cocinado ahí –además del granizo- es un enigma que se despejará tan pronto se comiencen a hacer los nombramientos pendientes. En lo que no hay duda y no hay que esperar más tiempo para comprobarlo es que los forajidos han perdido su oponente, aquel que les daba su razón de ser. Ahora es su aliado. Habrá que ver si las explicaciones del Presidente les convencen o acuñan de una vez uno de esos calificativos, como *febresborjismo*, con los apellidos correspondientes a la ocasión.

Aún viéndole por lado positivo, por la necesidad de llegar a acuerdos, éste no significa el fin de la lógica de la guerra. Es un episodio más de un juego en el que sólo pueden haber vencedores y vencidos. Nadie quiere hacerle un lugar al diálogo. Palabras como consenso, acuerdo, entendimiento o compromiso les producen náuseas y vómitos. Incluso quienes podrían dar luces y que están en capacidad de orientar a la opinión con análisis reposados y meditados, aún aquellos que se anunciaban como esperanzas de renovación de la política, utilizan los espacios en los medios y en las columnas de opinión para ganar puntos en un cálculo personal que apunta a instalarse en uno de los bandos.

No hay término medio, porque la guerra ha sustituido a la política y, aunque Clausewitz dijo que aquella era la continuación de ésta por otros medios, la verdad es que entre ambas hay una brecha insalvable. En la guerra, expuesta cinematográficamente por Philippe de Broca en El rey de corazones, no se puede diferenciar a los soldados de los habitantes del manicomio. Por ello, hoy nos corresponde ser parte de esa espectacular escena en que un desnudo Alan Bates, hasta ese momento soldado, decide asumir el reinado atribuido por los locos y entrar al sanatorio. Era la escena final. Para nosotros es la inicial.

SM

5 de febrero de 2007

“Han ofendido la majestad del Presidente”. Casi textualmente, esas fueron las palabras pronunciadas por el elocuente mandatario recientemente posesionado. Puede ser que haya utilizado otro verbo, como irrespetar o atropellar, pero en lo de la majestad no hay donde perderse. De un momento a otro, sin necesidad de la asamblea constituyente, nos desayunamos con que ahora somos una monarquía. Por lo menos, a eso nos lleva la definición del diccionario: “Título o tratamiento que se da a Dios y también a soberanos y reyes”. Viniendo de una persona profundamente pía, como es el mandatario, se puede suponer que su afirmación no habrá tenido la connotación religiosa sino la otra, más mundana pero no por ello menos grandiosa ya que aún queda algo de la idea del origen divino del poder de los reyes. Claro que más terrenalmente y como reivindicación de nuestras profundas y sagradas raíces históricas, se puede pensar que esa no fue sino la primera expresión de la lealtad al pensamiento de Bolívar. Sabido es que al Libertador no le entusiasmaban mucho las formas republicanas y sostenía la necesidad de nombrar a un presidente vitalicio que pudiera incluso designar a su sucesor. Si eso no es un emperador, es algo que se la parece demasiado.

Las interpretaciones tendenciosas y malintencionadas dirán que las regias declaraciones de Su Majestad encontraron rápidamente un contradictor en la siguiente intervención del presidente todavía candidato. Que la soberanía radica única y exclusivamente en el pueblo, dijo y repitió cuando se refirió a los manifestantes que metieron un susto tan grande a los diputados que lograron eliminar cualquier asomo de resistencia a la gran pomada universal de la asamblea constituyente. Lo mismo afirmó cuando los exaltados viajeros frustrados que exigían del gobierno ecuatoriano una indemnización por la quiebra de una compañía de aviación española lograron entrar al palacio de Gobierno. Pero no hay tal contradicción porque, consecuente con su aprendizaje en las comunidades cristianas de base, SM conoce perfectamente las diferencias que existen entre el reino de este mundo y el otro reino.

Si se piensa bien se verá que no es mala la idea bolivariana remozada –según se dice- por un par de asesores valencianos que antes ya sembraron los frutos de su sabiduría en tierras venezolanas. El emperador puede ser el antídoto para ese mal que ha afectado a los últimos presidentes y que les provoca esas caídas prematuras que deben ser muy dolorosas (sobre todo para el amor propio o para ese argentinito que todos llevamos dentro). Lo bueno de las monarquías es que, después de unos cientos de fotos en las publicaciones de papel couché, la gente habla de las familias reales como de la suya propia y termina amándolas entrañablemente. A nadie se le ha ocurrido, por lo menos no en los últimos sesenta o setenta años, hacer una manifestación en contra de un rey aunque estén hasta la coronilla del gobierno. Sería una excelente manera de diferenciar, como ya lo hace SM en su pensamiento, entre el soberano y la soberanía popular.

La refundación

Aunque parezca una contradicción, los afanes fundacionales usualmente tienen una fuerte carga de temor a lo nuevo. Para diseñar el futuro, necesitan contar con un referente en el pasado. Requieren afirmarse en algo que existió. Lo más socorrido es volver la mirada a una epopeya, pero no a cualquiera, sino a una que fue truncada por la perversidad de las fuerzas oscuras que, ayer como ahora, se oponen al progreso y a la emancipación de los pueblos. Las gestas triunfantes son inservibles para las fundaciones porque solo pueden ser continuadas, y en la continuación no hay heroísmo. El procedimiento consiste en descubrir un episodio que justifique referirse a la Historia con mayúscula. Ese momento, glorioso pero mutilado, será el que oriente y justifique las acciones que desarrollarán en adelante. Así, lo nuevo será no solamente la creación del futuro, sino la recuperación del pasado. Un pasado heroico, doloroso e inacabado, por supuesto. Su primera tarea es reescribir la historia o, en palabras del historiador Eric Hobsbawn, *inventar la tradición*. Poéticamente, Borges advirtió que "El pasado es arcilla que el presente labra a su antojo, interminablemente"

Las raíces heroicas

La Revolución Liberal fue la epopeya escogida como referente para el proceso que, a partir de un momento indeterminado, se conocería como la Revolución Ciudadana. Pero no fue la totalidad de esa experiencia histórica, que abarca los treinta años comprendidos entre 1895 y 1925, sino solamente su fase radical, que concluyó en 1912. El asesinato de Eloy Alfaro en enero de ese año marcó el fin de la etapa *machetera*, aquella en que el enfrentamiento con los conservadores era un asunto que se zanjaba en el campo de batalla (aunque los últimos enfrentamientos del caudillo liberal fueron con sus propios coidearios). Fue el período de las transformaciones políticas y sociales que establecieron el Estado laico y aflojaron –sin llegar a romperlas- las amarras de la dominación oligárquica.

Fue también, con la excepción de los cuatro años del gobierno de Leónidas Plaza, el período de predominio de Alfaro sobre el conjunto de caudillos. Él gobernó once de los diecisiete años que duró esa primera fase, sin ningún reparo en recurrir a las armas en contra de sus propios compañeros para lograrlo. La habilidad de Plaza para sacárselo de encima y no actuar bajo su tutela, le valdría el calificativo de traidor por parte de los apologistas del viejo caudillo. Con golpes de Estado, cruentas batallas e intrigas palaciegas, Alfaro fue el personaje central de la escena nacional en esa época convulsa que, por cierto, ha pasado a la posteridad como el período *alfarista*.

Era inevitable, en consecuencia, que su desaparición marcara un punto de inflexión. A lo que vino después de 1912 y hasta 1925, una corriente de la historiografía lo ha denominado el período plutocrático, en alusión a la influencia de los banqueros y los nacientes capitales agro-capitalistas y comerciales en las decisiones gubernamentales. Si

este era o no un resultado inevitable de la propia orientación alfarista –con el caudillismo como obstáculo insalvable para la institucionalización del proceso-, es algo que se discute. Pero, para la visión heroica del pasado siempre resulta más rentable cerrar cualquier discrepancia y calificarlo como la traición a los altos ideales del conductor.

Ese fue el relato que ganó terreno a lo largo de los años, especialmente entre los sectores progresistas, y fue uno de los factores que, casi un siglo más tarde, llevaron a calificar como *revolución* –con el adjetivo *ciudadana*- al que debía ser un gobierno más en la alternación democrática. Aunque el hermano mayor de Rafael Correa asegura que la motivación para llamarla de esa manera fue menos trascendental, ya que solamente se habría buscado utilizar electoralmente las iniciales del candidato, la evidencia demuestra que además de la egolatría también hubo razones más profundas. La reminiscencia de esos hechos, por parte de ideólogos y dirigentes del movimiento que ocurría cien años después, se sostenía en tres pilares.

El primero era el carácter verdaderamente revolucionario asignado al proceso liberal. Siendo un lugar común calificarla, con evidencias o sin ellas, como la transformación más profunda de la historia ecuatoriana, era un modelo a seguir por parte de quienes aspiraban al título de revolucionarios. El segundo era el carácter épico de esa gesta, implantada en la memoria colectiva con los nombres de batallas que se sucedían en interminable cadena y de héroes inmortalizados en calles y plazas de ciudades y pueblos. La defensa a muerte –literal y no figuradamente- de las posiciones políticas tiene un atractivo que requiere de explicaciones tanto sicológicas como religiosas, y es inmutable frente al paso del tiempo. El tercero, derivado de esa visión de la política como una cruzada, es la inmolación del caudillo. El martirologio goza de buen nombre en las sociedades poco secularizadas y constituye uno de los valores más apreciados por las izquierdas latinoamericanas.

Sería ocioso buscar coincidencias en los objetivos de cada una de estas revoluciones, la liberal y la ciudadana. Más allá del intento de dar un vuelco a la situación existente, que es lo que las asemeja, la Revolución Ciudadana apuntaba a fines radicalmente diferentes a los que guiaron al liberalismo. Esta última pretendía liberalizar no solamente a la economía –y lograr que el país se abriera al mundo-, sino también a la sociedad. La otra, por el contrario, buscaba establecer controles tanto a la sociedad como a la economía y, con una prédica antiglobalización, buscaba restringir la apertura hacia el mundo. Sin duda, se pueden encontrar coincidencias o similitudes en asuntos de carácter secundario, pero no son suficientes para comprender el interés por equipararlas. Las diferencias se manifestaban incluso en los cuestionamientos al liberalismo que hacía, abierta y explícitamente, el líder y que amplificaban muchos de sus voceros, no solamente en referencia a la paupérrima versión economicista neoliberal, sino como componente indisociable de la democracia contemporánea. Democracia liberal pasó a tener, en su lenguaje, una connotación tan peyorativa como democracia formal o democracia burguesa (dando por hecho, además, que éstas existieran). La única semejanza entre ambos procesos, como se pudo ver con el andar del tiempo, estaba en la dependencia con

respecto al caudillo. *Alfarismo* y *correísmo*, fueron las señas de identidad con que los reconoce la historia.

La explicación, hay que insistir, se encuentra en la recuperación del carácter heroico del proceso. La adopción de un lenguaje que mezcla lo bélico con lo religioso, lo utópico con el sacrificio considerado necesario e inevitable para conseguirlo, fue la característica que se impuso desde la campaña, y que se mantendría hasta el último día de los gobiernos de Rafael Correa. El asesinato de Alfaro, una verdadera inmolación, era el elemento central ya que se adecuaba perfectamente a la concepción de la política como un conjunto de acciones que hace tabla rasa del pasado –excepto el glorioso y remoto, por supuesto- y que solo puede ser realizada por seres excepcionales, entregados en cuerpo y alma a esa causa. La superioridad moral, que fue reivindicada desde el primer momento, nacía de la férrea voluntad de emprender en una cruzada que exigía la plena disposición a entregar la vida. Correa y quienes lo seguían no venían a hacer política en el sentido tradicional de la palabra. En su diccionario no tenían cabida conceptos como intercambio de opiniones, establecimiento de acuerdos, respeto a la discrepancia, avances y retrocesos, en fin, triunfos y derrotas sin ganadores y perdedores absolutos. Al fin y al cabo, Alfaro y el Che Guevara –a quien Correa comenzó a evocar una vez posesionado como presidente- habían demostrado que entre vencer o morir no hay un tercer camino.

La vinculación con el alfarismo debía manifestarse no solamente en el discurso, sino en hechos palpables, en evidencias que hicieran visible el lazo con la historia y que dotaran de fuerza simbólica al proceso impulsado. El primer paso en esa dirección fue la instalación de la Asamblea Constituyente en Montecristi, el lugar de nacimiento del caudillo liberal. Al apuro y sin reparar en los costos, en un descampado se levantó una construcción que ocupa un área de ocho mil metros cuadrados. Para cualquier persona desinformada que llegara a pasar por ahí, sería algo muy similar a los centros de convenciones y de eventos musicales que adornan las periferias de las ciudades. Pero, siguiendo fielmente las reglas de la pomposidad que deben tener los hechos imperecederos y sin que tuviera una sola característica urbana, fue bautizado como Ciudad Alfaro. Allí se instaló durante ocho meses la Asamblea que debía entregarle al país una constitución que, al decir de sus autores, duraría trescientos años.

El segundo lazo con la historia alfarista fue menos evidente en términos materiales, pero más duradero y seguramente más efectivo en su contenido simbólico. Consistió en algo tan sencillo como la recuperación del apellido materno del líder liberal. Si hasta ese momento solamente se lo había conocido como Eloy Alfaro (tal como consta en los documentos oficiales de la época y como ha quedado grabado en calles, plazas, monumentos, escuelas y colegios), en adelante todas las referencias serían a Eloy Alfaro Delgado. El añadido del segundo apellido surgió a la par del anuncio de algún grado de parentesco que existiría con Rafael Correa Delgado. Si es real o no ese parentesco, es algo que no tiene importancia, pero sí llama la atención que haya sido reivindicado por grupos autocalificados de izquierda, que siempre han cuestionado los linajes como elementos de legitimación política. De cualquier manera, aunque no hay estudios ni

sondeos de opinión que puedan ofrecer pruebas del efecto que tuvo esa asociación genealógica, se puede suponer que impactó en una sociedad patriarcal, jerárquica y fiel a los valores de la familia tradicional. Desde poco tiempo atrás ya había quedado fijada en el imaginario colectivo la calificación de Alfaro como el más grande ecuatoriano de todos los tiempos. Que fuera establecida por las llamadas telefónicas a un programa de televisión (el mismo procedimiento con que se calificó a Gengis Kan como el personaje más importante de la historia del mundo) era un asunto secundario. Un familiar, por lejano que fuera, evidentemente tendría que compartir sus cualidades.

Con la reminiscencia del pasado glorioso pero truncado se había dado un gran paso para iniciar la refundación. Ciertamente, se evitó llamarla así, porque la palabra se había desgastado en sucesivos intentos anteriores. Por lo menos los tres últimos gobiernos se propusieron objetivos de esa naturaleza, pero sucumbieron frente a intereses poderosos o simplemente se empantanaron en su propia debilidad. Que no se la nombrara no significa que se buscara algo diferente. Su eliminación del diccionario político expresaba el inicio de la resignificación de las palabras, que a largo de los siguientes diez años se convertiría en una práctica cotidiana y muy eficaz. Se trataba de volver al inicio (como corresponde a la etimología del término revolución), colocar el marcador de los tiempos históricos en cero. Era el *adanismo* en toda su expresión.

El Sumak Kausay

Un objetivo de esa naturaleza requería de bases más firmes que las que podían ofrecer *apenas* un siglo de historia y un hecho que, aunque fuera de la talla de la revolución liberal, no pasaba de ser episódico. Era necesario engarzarlo con el pasado más remoto, con los orígenes del ser ecuatoriano y de la nación. Una gesta como la que se intentaba emprender tenía que venir de lo más profundo. Debía brotar de las entrañas de la tierra. Esa visión la proporcionó, muy a pesar del caudillo, el movimiento indígena. Este, desde su irrupción en el panorama político nacional a comienzos de la década de los noventa, apeló a la *Pachamama* como elemento central de lo que sus ideólogos proponían como una cosmovisión alternativa a la occidental. Aunque esa fuerza sociopolítica no apoyó orgánicamente la candidatura de Rafael Correa, los grupos de izquierda de la coalición electoral y posteriormente gubernamental hicieron suyas las propuestas de las organizaciones indígenas.

En el contexto refundacional, el *pachamamismo* ofrecía la posibilidad de asentar el nuevo relato revolucionario –que se iba construyendo ya en esos momentos- en un pasado supuestamente armonioso y a la vez glorioso. Armonioso, por la relación de los pueblos originarios con la naturaleza. Glorioso, por la resistencia de esos mismos pueblos al coloniaje y a las múltiples formas de explotación. No tiene importancia que el imperio inca y en general las sociedades precoloniales hubieran desarrollado formas tan o más autoritarias que las impuestas por los conquistadores españoles, ni que la ausencia de explotación intensiva de la tierra se explicara por la escasa población que habitaba allí y no por un ecologismo ancestral. Al fin y al cabo, como lo han hecho todos los pueblos en

procesos como este, es necesario leer el pasado con miras a lo que se busca construir hacia el futuro y no como ocurrió en realidad. La ya mencionada *invención de la tradición* tenía aquí un campo muy amplio para fructificar.

Pero, ese pasado armónico-glorioso solamente es una parte, y no necesariamente la más importante, de la interpretación *pachamamista*. Allí radica la que podría considerarse su fuerza objetiva, aquella que, con alteraciones y acomodos, puede encontrar referentes concretos en pueblos que habitaron estos territorios, fechas de eventos y sobre todo personajes extraordinarios. La otra parte, la que le da el sustento subjetivo y la convierte en una cosmovisión, es la que apela a la tierra, la *madre tierra*, como una deidad, que es el origen de la vida, la fuente de la sabiduría, la explicación del principio y el fin. No es una cosmovisión desacralizada o secular, en la que los individuos tienen la potestad de actuar según su libre decisión. Es una apelación a un orden predeterminado, en el que la naturaleza define la vida, el comienzo, el destino y el fin. Es una visión mitológica que puede potenciarse si se sincretiza con otras religiones, especialmente con la católica, como ocurrió en la historia de la conquista y la colonización.

La adopción de esa interpretación enlazaba adecuadamente con la prédica nacionalista, que en adelante sería una de las características de todo el proceso de la Revolución Ciudadana. La idealización del ser ecuatoriano, como un producto único que tiene sus ancestros en el pasado más remoto, es el primer paso para dotarle de múltiples virtudes que, de esa manera, vienen a serle inmanentes. Por alguna razón telúrica o divina, el nacimiento en esta pequeña porción del planeta –quizás porque está atravesada por la línea imaginaria que le da su nombre como país- aseguraría esas virtudes y conferiría superioridad con respecto a quienes no han tenido esa suerte. En el plano discursivo esa concepción nutrió el nacionalismo y el patriotismo que impregnarían toda la gestión gubernamental y que se retroalimentó con una eficaz y permanente campaña publicitaria.

El *pachamamismo* tuvo su expresión en dos temas adicionales. El primero fue su condición de puente con el ecologismo, que venía siendo propugnado por algunas agrupaciones que, atraídas por esta prédica, se sumaron al proyecto político. Contingentes de personas, principalmente jóvenes, preocupadas por el cambio climático y por los efectos nocivos de la explotación intensiva de los recursos naturales, adhirieron a esa visión que les aportaba explicaciones que iban más allá de la ciencia y de la racionalidad. En adelante, su lucha podría ampararse en la trascendencia de las creencias heredadas. Al ser insondables, estas ofrecen menos flancos para el debate y consecuentemente otorgan seguridad a los planteamientos propios.

El segundo fue la adopción de una posición colectivista, que volvía la mirada a una comunidad ideal, en la que habrían imperado valores como la solidaridad y la reciprocidad. Con la mirada en esa utopía retrospectiva, uno de los objetivos finales de la revolución sería implantar esos valores en el conjunto de la población. Esto significaría relativizar los derechos individuales, redefinir radicalmente el manejo de los recursos naturales, satanizar la búsqueda de lucro y, sobre todo, condicionar el albedrío del

individuo a las necesidades atribuidas a la comunidad. Era una aleación del hombre nuevo propugnado por el Che Guevara con el mítico buen salvaje que habría poblado originalmente estas tierras. También era el camino para la implantación de una visión organicista, en la que tiene poca o ninguna cabida el componente liberal de la democracia contemporánea con sus derechos y libertades individuales. Sin llegar al extremo de utilizarlo para tratar de sustituir a la democracia representativa por la democracia comunitaria, como se hacía en ese mismo momento en Bolivia, esa fuente sirvió para colocar los derechos colectivos en el mismo nivel que los individuales y para establecer constitucionalmente la coexistencia de dos derechos o dos sistemas jurídicos.

El conjunto de esos elementos resultantes de la adaptación de la cosmovisión indígena a los objetivos de la Revolución Ciudadana se expresó en la noción del *sumak kausay*, que surgió y tomó cuerpo en la redacción de la Constitución. Aunque este es la traducción al quichua del *vivir bien*, presente en la filosofía occidental desde los más antiguos textos que ella registra, su utilización en el idioma originario buscaba asentarlo en las raíces de la cosmovisión alternativa y en los orígenes remotos del ser ecuatoriano. De la misma manera que, algo más de dos décadas atrás, el movimiento indígena de varios países andinos tomó como emblema una bandera multicolor atribuida a un tiempo y a una sociedad en que no existían las banderas, la Revolución Ciudadana aseguró haber *recuperado* un concepto. Que este haya sido inexistente en la tradición a la que aludía, era apenas un detalle que no cabía considerar.

Aunque todos estos aspectos fueron rápidamente dejados de lado por causa del pragmatismo de Correa, que asentó todo su programa económico en la explotación de los recursos naturales, quedaron plasmados en la Constitución y fueron parte del discurso movilizador y moralizador a lo largo de todo el período. Fue una contradicción permanente, que tuvo su expresión más evidente en la confrontación con los grupos a los que llamó ecologistas infantiles cuando decidió abandonar el proyecto de preservación de la reserva del Yasuní en la Amazonía. En el plano de las políticas públicas y de las acciones del gobierno, el *pachamamismo* quedó solamente como un elemento discursivo. Ni siquiera se respetó la consulta previa a los pueblos indígenas, que quedó grabada como testimonio de buenas intenciones en el texto constitucional. En el plano simbólico, el ser telúrico ecuatoriano encontró su representación en las camisas bordadas, que hasta ese momento eran el distintivo de los meseros de restaurantes típicos, y que en adelante usaría Rafael Correa (con prohibición expresa de que las utilizaran sus ministros y seguidores).

Neoconstitucionalistas y socialistas del siglo XX

Después del tira y afloja con el Congreso y de la destitución de 57 diputados, pudo instalarse la Asamblea Constituyente. El plebiscito en que se aprobó su convocatoria fue el primer y más sonado triunfo electoral de Rafael Correa al recibir el apoyo de ocho de cada diez votantes. De inmediato, en la elección para su conformación, Alianza País se alzó con la mayoría absoluta, que se elevaba hasta casi los dos tercios por el apoyo de sus aliados (Partido Socialista-Frente Amplio, Movimiento Popular Democrático, Ruptura)

y, en determinados temas, de otras agrupaciones de centroizquierda (Izquierda Democrática, RED, Pachakutik).

Al contrario de la asamblea de 1997-1998, que requería de negociaciones para cada votación, en esta estaba asegurado el trámite expedito y el debate prácticamente se restringía a los aspectos de forma. La diferencia era notoria. En la anterior, los partidos o en particular los asambleístas estaban obligados a llegar a acuerdos, sin que faltara obviamente la jugarreta y, en no pocas ocasiones, la imposición de los más fuertes. Ciertamente, la presencia mayoritaria de partidos de derecha y centroderecha impuso su orientación, en especial en las disposiciones económicas, lo que le valió el calificativo de neoliberal. Sin embargo, su composición pluralista permitió que se introdujeran disposiciones que recogían las propuestas de los sectores históricamente marginados. El carácter pluricultural y multiétnico del Estado, la aplicación de los usos y costumbres en la administración de justicia por parte de las autoridades indígenas o el uso oficial del quichua, el shuar y los idiomas ancestrales, se derivaron de esa composición. En la última, en cambio, una organización creada apresuradamente para la elección presidencial no tuvo necesidad de buscar apoyos ni promover debates. Lo que saliera de ahí llevaría, única y exclusivamente, su firma. Era muy débil la huella que podían dejar los otros grupos y mucho menos si se llegaran a comprobar las denuncias sobre la alteración, por parte de personas del entorno presidencial, de los textos aprobados por los asambleístas.

Uno de los faros que guiarían la redacción de la nueva constitución sería el neoconstitucionalismo. Poco tiempo antes se lo había adoptado en Venezuela, con el apoyo de los mismos asesores españoles que se asentaron en Montecristi y que tenían entrada directa a Carondelet. Esa nueva óptica jurídica, de la manera en que se lo entendió en estos países, consistiría en superar lo que consideraban como limitaciones formales del Estado de derecho. Según la versión que se iba imponiendo, el orden constitucional bajo la concepción tradicional solamente habría tenido como función organizar el poder y limitarlo para garantizar los derechos individuales. Por el contrario, la implantación del *Estado constitucional de derechos* (en plural), como propugnaban los neoconstitucionalistas, haría del Estado no solo el garante de los derechos, sino que debería ser el proveedor de los medios para acceder al goce de aquellos. De esta manera, se abandonaría el Estado limitado del liberalismo (y, por supuesto, el Estado mínimo del neoliberalismo) para sustituirlo por un ente dotado de tantas facultades y atribuciones como supuestos derechos se pretendiera amparar.

El objetivo era diseñar un Estado fuerte, interventor no solo en el campo económico, sino también en lo político. No faltaron quienes desde esas filas consideraron que esta reivindicación era la respuesta necesaria al neoliberalismo, que desde finales de la década de los ochenta venía pregonando la reducción del tamaño del aparato estatal y la limitación de la facultad interventora del Estado. Con ello resbalaban hacia dos errores que se arrastrarían a lo largo de los diez años de gobierno. El primero es que restringían el problema a uno solo de los aspectos, y ciertamente no el más importante. Convertían a la mayor o menor intervención económica del Estado en el centro de la definición del

nuevo régimen que pretendían instaurar, sin considerar que ese es principalmente un tema de políticas públicas y no necesariamente un elemento de definición del régimen político. Es verdad que la adopción del neoliberalismo en algunos países sí significó cambio de régimen económico y político, pero es algo que no se puede generalizar y, sobre todo, no era el caso ecuatoriano.

El segundo error surgió del desconocimiento, en unos casos, y de la tergiversación intencionada, en otros, de la experiencia ecuatoriana al respecto. Desde el inicio de la última década del siglo pasado, los sectores de izquierda calificaron como neoliberal a la orientación económica de los diversos gobiernos que se sucedieron. Sin regirse por los parámetros construidos para la evaluación del neoliberalismo (o, con mayor precisión, de las políticas de ajuste) y sin acudir a una visión comparativa que pudiera arrojar luces en ese campo, dieron por hecho que en Ecuador se había implantado un modelo neoliberal. No importaba que con esa afirmación contradijeran a una realidad bastante más compleja y que no pudiera ser reducida a un modelo único ni homogéneo. La situación ecuatoriana se caracterizó por un empate de fuerzas socio-económico-políticas que desembocó en un modelo híbrido, a medio camino entre el proteccionismo y el neoliberalismo. Contradecían también los resultados de un estudio realizado por Rafael Correa, publicado en la Revista de la Cepal en 2002, en que Ecuador ocupa los últimos lugares de las tablas comparativas sobre la aplicación de las reformas en América Latina.

Ambos errores se explican fundamentalmente por la necesidad de contar con un enemigo contra el cual apuntar la artillería. Aunque conceptualmente era algo injustificable, políticamente resultaba muy provechoso, ya que el neoliberalismo es un enemigo débil y falto de sustento teórico. La repetición del eslogan *la larga y oscura noche neoliberal*, que comenzó a usar Correa en la campaña para calificar a la situación anterior, era una forma de crear un muñeco de paja muy fácil de destrozar. Pero, como fue quedando claro con el andar del tiempo, el enemigo al que verdaderamente buscaba vencer el neoconstitucionalismo en su versión ecuatoriana –y, en general, latinoamericana- era el Estado de derecho, de origen liberal, no neoliberal. El objetivo, planteado inicialmente de manera tímida pero después sostenido enfáticamente, era abandonar o por lo menos debilitar los componentes liberales de la democracia. El incremento de las facultades estatales y el fortalecimiento de las ya existentes apuntaban hacia ese objetivo.

La prédica de ese neoconstitucionalismo mal entendido iba de la mano de la propuesta del *socialismo del siglo XXI*, una idea que también había echado raíces en algunos países latinoamericanos en esos años y que se constituyó en otro de los faros para la redacción de la constitución. Con mucho menos sustento teórico que el que sin duda tenía el neoconstitucionalismo, este nuevo discurso buscaba aparentemente un *aggiornamento* del marxismo que pudiera adecuar los postulados socialistas a los tiempos de la globalización y de las sociedades secularizadas. Sin atreverse a enfilar una crítica al socialismo real –evitando reconocer los factores endógenos de la implosión de la Unión Soviética, mucho menos las causas intrínsecas del fracaso cubano-, ofrecía una relectura rústica de los manuales marxistas de materialismo histórico. Los galimatías sobre el valor

de uso y el valor de cambio –que mostraban un desconocimiento absoluto de Marx- retrotraían el tiempo a los oscuros años en que el debate teórico fue sustituido por la exégesis de los textos que *el partido* definía como sagrados. En este caso no era el partido, la primera y la última palabra provenían del líder, un personaje que según confesión propia nunca había leído *El capital*, mucho menos *La guerra civil en Francia* o *El dieciocho de brumario*.

Más que una propuesta de organización de la sociedad y del Estado, el socialismo del siglo XXI fue un instrumento muy útil para mantener el apoyo de los sectores de izquierda. Una organización heterogénea, huérfana de ideología, como ya se mostraba Alianza País, y un líder sin pasado de militancia política ni formación teórica de izquierda, necesitaban crear las condiciones apropiadas para que los sectores más ideologizados sintieran que este era su proceso. Su experiencia en la organización y la movilización popular era necesaria para afianzar el proceso (o *el proyecto*, como se lo comenzó a llamar). La recuperación de la idea del socialismo como utopía movilizadora tuvo éxito. La vieja militancia izquierdista, vio la oportunidad de desempolvar los anhelos revolucionarios que, desde el fracaso de la izquierda insurreccional y de la caída del Muro de Berlín, había archivado, no por reflexión propia, sino por la pérdida de la brújula. Por su parte, para los jóvenes insatisfechos y desencantados con una política ajena a sus intereses, era un atractivo, aunque nunca llegaría a convertirse en una pasión como para animarlos a la militancia. Fue un elemento movilizador sin más contenido que el de la utopía que nunca llega, como lo describió el propio Rafael Correa cuando, citando al siempre simplista Galeano, lo equiparó con la línea del horizonte. Inalcanzable.

A pesar de su pobreza teórica, el socialismo del siglo XXI confluyó con el neoconstitucionalismo –en realidad, con la interpretación de este que predominaba en las filas del gobierno- en la crítica a la democracia liberal. Se apuntalaba en los cuestionamientos que los fundadores del marxismo hacían al liberalismo de la primera mitad del siglo XIX, cuando la primera revolución industrial apenas gateaba y el Estado de derecho solo era un postulado que se encontraba en algunas obras de filosofía política. Era una crítica relativamente válida para aquella época, cuando el orden liberal y republicano como experiencia práctica recién daba sus primeros pasos –con el tropezón de la esclavitud- en la constitución norteamericana y en la prédica inicial de la Revolución Francesa. Pero, era un sinsentido para la primera década del siglo XXI en que, a nivel global, ya se podía evaluar positivamente el avance de los derechos y las libertades bajo la ola de democratización producida desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Mucho menos asidero tenía en un país que, a pesar de los avances logrados, aún mostraba grandes vacíos en la instauración de un Estado de derecho que pudiera garantizar la plena vigencia de las libertades. La mirada clavada en realidades históricas largamente superadas impedía comprender que sin el ingrediente liberal la democracia deja de ser tal. Incluso olvidaba la propia historia –aquella que personalizaban en la figura de Alfaro- al ignorar que la vigencia de esos derechos y su transformación en normas constitucionales y legales se debieron a las luchas de los sectores populares, que hicieron suyos esos principios.

Del singular al plural

En el vértice en que debían confluir las raíces histórico-telúricas propias del *pachamamismo*, el socialismo del siglo XXI y el neoconstitucionalismo debía colocarse la constitución. Su orientación y su contenido se anticipan perfectamente en el preámbulo que, en una actualización hecha a la luz de la corrección política, al *nosotros el pueblo* de la Constitución norteamericana lo transforma en *nosotras y nosotros, el pueblo soberano del Ecuador*. Reconoce las raíces milenarias, celebra a la *Pachamama*, invoca el nombre de un solo Dios (con mayúscula, sin cabida para el laicismo y mucho menos para el politeísmo), apela a la sabiduría de todas las culturas y declara a esas nosotras y nosotros como herederos (en un masculino excluyente) de las luchas sociales de liberación. Todo ello para construir una nueva forma de convivencia ciudadana, en diversidad y armonía con la naturaleza, para alcanzar el buen vivir, el *sumak kausay*. Esa ciudadanía se establecería en un país democrático, guiado por el sueño de Bolívar y Alfaro, dos líderes que entre sus muchos méritos no consta alguno que pueda llevar a calificarlos de demócratas, porque no correspondía al tiempo del primero, y porque el segundo sabía –y, además de decirlo, lo demostró con acciones- que lo ganado con bayonetas no se podía perder con papeletas.

Una idea generalizada entre quienes han analizado la Constitución es que presenta avances sustanciales en términos de derechos en su parte *dogmática*, la que contiene los principios generales. Muchos de sus detractores comparten esa opinión o por lo menos guardan prudente silencio acerca de esta parte y concentran sus cuestionamientos en la segunda, la *orgánica*, que da forma al sistema político. Sin embargo, la presencia de los principios orientadores mencionados antes (socialismo del siglo XXI, versión distorsionada del neoconstitucionalismo, *pachamamismo*, reducción del liberalismo al neoliberalismo) atraviesa todo el cuerpo de la Constitución y deja sin sustento a esa disección. Esos elementos confluyen en una concepción organicista de la sociedad, que le otorga al Estado una función protectora-rectora de los individuos, y que aparece desde el primer artículo. Allí se encuentra la ya mencionada sustitución del Estado de derecho por el Estado de derechos, que apunta en ese sentido y anticipa el régimen controlador que se desarrolla en la parte orgánica. El reemplazo del singular por el plural, el *derecho* por los *derechos*, disuelve la noción de un Estado limitado y sometido al imperio de la ley, que no puede intervenir en la vida de las personas, para dar paso a uno que regula unos derechos fragmentados. En ninguna parte del texto constitucional consta una frase que reconozca y garantice la libertad individual *per se*, sin que esté sujeta a condiciones específicas. Tampoco constan, como su correlato indisoluble, los límites que tiene el Estado con respecto a los ciudadanos.

Dentro de esa concepción, no son los individuos quienes, por su condición de seres humanos, son portadores de los derechos y las libertades. Aparentemente, es el Estado el encargado de establecerlos y hacerlos respetar. Pero, esa apariencia pierde asidero cuando no se apela al Estado en su condición de ente abstracto que expresa la voluntad general y que garantiza el imperio de la ley –a la vez que se somete a esta-, sino al gobierno como

ente concreto. Este, siempre transitorio en un régimen democrático, aparece en la primera parte de la Constitución como el encargado de formular y aplicar las políticas públicas que serán la única vía para materializar los derechos y las libertades. Esto se hace evidente en el denominado régimen del sumak kausay, que es la enumeración de una larga cadena de derechos que requieren de políticas públicas para su realización. Sin esas políticas, vale decir, sin la acción gubernamental, los derechos simplemente no existirán. No se los considera inmanentes a la condición humana y dependerán únicamente de la voluntad de quien ejerza la dirección de la administración pública. Se elimina el principio de la libertad entendida como ausencia de interferencia (*libertad negativa*, en palabras de Isaiah Berlin), que constituye la esencia del Estado de derecho y de la autonomía individual.

Esta confusión entre Estado y gobierno contiene el germen del régimen concentrador y constituye un terreno fértil para el autoritarismo. Al otorgarle al Estado la significación de los derechos y al disolverlo en el gobierno, se le atribuyen a este último todas las facultades que supuestamente serían necesarias para el cumplimiento de esos derechos. De ahí solamente media un pequeño trecho para que el gobierno interprete que puede y debe intervenir en la vida de las personas. Al estar supeditada la vigencia de los derechos a la acción gubernamental, se ofrece una excelente excusa para que los gobernantes excedan los límites de sus funciones y atribuciones en aras del bienestar de la población. Siendo las políticas públicas el único vehículo para el disfrute de los derechos y las libertades, quien tenga a cargo su formulación y su aplicación podrá establecer lo permitido y lo prohibido de acuerdo con su propia concepción y no en referencia a valores de aplicación universal. Uno de los resultados de esa concepción, como se vio claramente durante la gestión gubernamental, fue el intercambio negativo (un *trade off* diría la tecnocracia) entre obra pública y derechos. Lo que se ganaba en la primera justificaba lo que se perdía en los últimos. La inversión en carreteras serviría como excusa para criminalizar la protesta social, coartar la libertad de expresión o asfixiar a los medios de comunicación.

La larga enumeración de los derechos, en lugar de sumar resta. Al describir cada uno de ellos por separado y con las condiciones específicas para su respectiva vigencia, se los convierte en elementos aislados que no forman parte de un cuerpo integral de protección del ser humano. No solo se los pone en situación de dependencia de las decisiones gubernamentales, sino que se los fragmenta y se los aísla. Esta, como cualquier enumeración, es un acto de inclusión, pero al mismo tiempo es de exclusión. Solamente los que son explícita y particularmente enunciados adquieren el carácter de derechos constitucionales, mientras que los que no son aludidos quedan fuera. “Todas las ecuatorianas y los ecuatorianos son ciudadanos [¿y no ciudadanas?] y gozarán de los derechos establecidos en la Constitución”, dispone el artículo 6, en una clara reducción del Estado de derecho a una lista de derechos específicos. Los que no consten entre estos solo podrían ser reconocidos, en el mejor de los casos, por una ley y por tanto no contarían con la garantía del amparo constitucional. Como en una guía telefónica -según la irónica apreciación de un jurista extranjero- se listaron uno tras otro los derechos, con el riesgo

de dejar fuera a los que no constaran allí. El plural, *derechos*, resulta menos incluyente que el singular, *derecho*.

A pesar de la retórica neconstitucionalista, esa desagregación entra en contradicción con dos elementos básicos de esa perspectiva jurídica. La primera es la directa aplicación y protección de los derechos constitucionales, sin necesidad de leyes que los desarrollen ni instancias específicas para su tratamiento. Si la Constitución ecuatoriana se rige por el principio del derecho público que solo permite lo que está explícitamente establecido, entonces restringe esa directa aplicación únicamente a los derechos que están enumerados en su texto. La segunda es el carácter incremental de los derechos, que se hace prácticamente imposible porque se requeriría de tantas reformas constitucionales como ampliaciones o incorporaciones se pretenda conseguir. La permanente ampliación del alcance de los ya existentes y la incorporación de otros convertiría a la Constitución en un campo en permanente disputa, sin contar con las dificultades derivadas de los engorrosos procedimientos (los *candados*) establecidos para ese fin.

La desagregación de los derechos no está regida por un orden jerárquico, lo que lleva a interpretarlos a todos como equivalentes. En el mismo nivel se sitúan los individuos y las colectividades que, por lo demás, no quedan definidas. "Las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos son titulares y gozarán de los derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales", consigna el artículo 10. No se encuentra alguna disposición que establezca preeminencia en caso de conflicto, lo que deja vía libre para que se imponga la ya señalada concepción organicista, propia tanto del socialismo del siglo XXI como del *pachamamismo*, que relega a segundo plano los derechos individuales. Si se considera que las transgresiones y las controversias pueden procesarse en cualquier instancia judicial, sin que importe su especialización, es posible suponer que habrá un número muy alto de interpretaciones y que será imposible recogerlas a todas para ir creando jurisprudencia. Un mismo asunto podrá tener tantos tratamientos y resoluciones como jueces hayan intervenido en los correspondientes casos. El laberinto jurídico resultante termina incidiendo directa y negativamente en las garantías de las personas y añade un elemento adicional a la dependencia de los jueces a la autoridad política, que será donde realmente se radique la interpretación de esos artículos y las normas que se desprende de ellos.

Es difícil que un régimen político surgido de esos principios pueda cumplir con los estándares democráticos mínimos. La suma de estos no configura un Estado de derecho. El problema no está en el cambio del singular por el plural, que de todas maneras no es un hecho anecdótico, sino en la ausencia de los elementos constitutivos de aquel. Su objetivo principal, la protección del individuo frente al propio Estado y a la sociedad, no está presente en toda esa parte declarativa. La democracia contemporánea es impensable sin el Estado de derecho, como lo es este sin ella. Aunque vienen de dos tradiciones teóricas e históricas diferentes y que en algún momento estuvieron enfrentados, actualmente constituyen una unidad sólida e indisoluble. La pérdida de uno de los dos términos termina afectando a ambos y lleva, en el mejor de los casos, a la conformación

de una democracia disminuida, cuando no de una de las muchas formas de autoritarismo. Ahí, en esa parte de la Constitución está el núcleo de los sinsentidos y aberraciones que se encuentran en el diseño del sistema político.

El desequilibrio

En la parte *orgánica* de la Constitución es en donde aparece de manera más explícita el adanismo con su obsesión refundadora. A diferencia de la primera parte, en que es necesario buscarlo entre el lenguaje litúrgico de los que pretenden ser principios generales, en la segunda son observables a primera vista. Allí se presentan bajo la forma de instituciones y procedimientos que vienen a sustituir a los existentes o que, muy creativamente, se proponen como algo completamente nuevo. La más visible de esas novedades es la sustitución de las tres funciones clásicas –legislativa, ejecutiva y judicial- por cinco, al añadirse la de control social y la electoral. También hay ausencias que no pasan inadvertidas. Convencidos de su designio fundacional, e impulsados por los asesores externos que venían de experiencias similares en otros países latinoamericanos, los asambleístas constituyentes no perdieron la oportunidad de dejar impreso el sello de su imaginación. Una incontenible fantasía que quedó plasmada en cada uno de los 444 artículos y las 30 disposiciones transitorias del que vendría a ser el texto constitucional más largo de la historia nacional.

Preocupados por los problemas que, en su opinión, el país arrastraba desde tiempos inmemoriales, los asambleístas relegaron a segundo plano el tratamiento de las causas que habían acabado prematuramente con los tres gobiernos anteriores. No formaba parte de su agenda la comprensión de los factores de la inestabilidad política de los diez años previos. Con gran convicción repetían algo tan absurdo como que la preocupación por la gobernabilidad era parte del recetario neoliberal y que no cabía otorgarle alguna atención, ya que los problemas de fondo correspondían a la historia larga del país. Lo concreto, la dificultad para constituir gobiernos estables que pudieran definir políticas de largo alcance, era una minucia que no cabía dentro de objetivos de tanta trascendencia.

El desequilibrio entre los poderes, particularmente entre el ejecutivo y el legislativo, era uno de los legados negativos de la Constitución vigente en ese momento, que a su vez había heredado de las precedentes. Para corregirlo se requería de una intervención cuidadosa que respondiera a objetivos claros. Era necesario establecer las condiciones adecuadas para el ejercicio de los controles y balances que deben existir entre ellos para que fluya la política y para cerrar paso a las tentaciones autoritarias. En lugar de tomar esa vía, se optó por profundizar el desequilibrio al fortalecer al ejecutivo y debilitar al legislativo. Se incrementaron los poderes constitucionales del presidente, hasta el punto de otorgarle la facultad de disolver el órgano legislativo. Es verdad que este puede también destituir al presidente, pero para ello requiere el voto de las dos terceras partes de sus integrantes, mientras que el mandatario solamente precisa de su voluntad. También es cierto que si uno de los dos decide cesar al otro, ambos deben abandonar sus cargos y se debe convocar a elecciones generales. Pero, si la iniciativa es presidencial, el

legislativo cesa automáticamente en sus funciones y el presidente permanece en el cargo con facultad legislativa hasta que se posesione el reemplazante surgido de esa elección anticipada, que puede ser él mismo. Es difícil imaginar un modelo más presidencialista.

Para profundizar el desequilibrio, al legislativo se le recortó la mayor parte de funciones que tradicionalmente ha tenido en la historia ecuatoriana y que en general se encuentra entre las atribuciones de ese órgano en las democracias contemporáneas. Se redujo su capacidad de control a los otros poderes del Estado, especialmente al ejecutivo al incrementar las condiciones para el juicio político. Se le despojó de la función de interpretación de la ley, que fue transferida privativamente a la Corte Constitucional. Se eliminó su participación en el nombramiento de autoridades de otras funciones, como la electoral, la judicial, las autoridades de control, el defensor del pueblo, el fiscal general y los superintendentes.

La mayor parte de las funciones del legislativo fueron transferidas a un organismo ajeno al diseño de los sistemas políticos democráticos, y muy cercano al ideal de las formas corporativas de la Italia de Mussolini y de la España de Franco. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, conformado por siete personas seleccionadas en concurso de méritos, en el que no tiene cabida alguna forma de expresión de la voluntad popular, asumió las funciones que le corresponden al órgano legislativo –resultado, este sí, de esa voluntad popular- en el ordenamiento democrático y republicano. No solamente por su conformación, sino por su misma existencia, este Consejo es la materialización del ideal de estatización de la participación ciudadana y de la implantación de la concepción organicista presentes en la parte dogmática.

El desbalance resultante de esos arreglos institucionales dibujó un sistema que de inmediato recibió el calificativo de hiperpresidencialista. Muchos de los mismos asambleístas constituyentes habían utilizado este adjetivo para señalar los sesgos de la Constitución anterior y sobre todo para advertir de su potencial autoritario. Sin embargo, seguramente esperanzados en que se mantuvieran las condiciones políticas que les otorgaba una cómoda mayoría, no solo mantuvieron esas características, sino que las profundizaron. Los poderes políticos, conseguidos por el hastío de la población con el funcionamiento de la vieja política, fueron reforzados con los poderes institucionales que prefiguraban la imagen de un presidente dotado de enorme poder.

La tendencia a la concentración de las decisiones en el presidente se potenció con tres factores adicionales. Uno fue la modalidad de selección de los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana e incluso el número reducido de ellos. Esto hace innecesario que el presidente deba buscar acuerdos para el nombramiento de las autoridades de control y de los demás funcionarios que resultan de los concursos organizados por este organismo. Independientemente de quien sea el presidente en funciones, la posibilidad de manejo de ese organismo desde el ejecutivo es muy amplia y siempre va a ser muy fuerte la tentación de intervenir en su conformación y en sus decisiones. Se vio en la práctica que las posibilidades de influir sobre ese consejo y de controlarlo eran enormes. Seguramente en

ello influyó en gran medida la orientación autoritaria de Correa, pero la posibilidad de concretar ese afán estuvo dada por el diseño institucional que hace de este organismo una presa fácil de los presidentes. Al no ostentar la representación de la ciudadanía, esos funcionarios están exentos de responder a un mandato y de rendir cuentas a sus mandantes. A la vez, es muy amplio el margen de maniobra del presidente para influir en el concurso de selección de sus siete integrantes y, posteriormente, por medio de ellos, en la selección de las demás autoridades que está a cargo de este organismo.

El segundo factor fue el incremento de la deriva centralizadora que venía desde antes, tanto por el fortalecimiento del ejecutivo como por el debilitamiento de los organismos locales. A pesar de que Ecuador dio muy tempranamente pasos importantes hacia la descentralización, como fue la elección directa de alcaldes desde la década de 1940, hubo retrocesos entre el final del siglo XX y el comienzo del actual. La autonomía financiera era una tarea pendiente, que se expresaba además como el punto central de las múltiples movilizaciones de base territorial que se sucedieron a lo largo de por lo menos dos décadas. En lugar de orientarla en ese sentido, a la Constitución se la convirtió en una camisa de fuerza para los organismos locales. Estos comprobaron cómo pasaban a depender cada vez más de la voluntad del ejecutivo, bajo la retórica de asignaciones económicas automáticas. En adelante sería obligatorio no solamente el tradicional *lobby* en el ministerio de Finanzas, sino la espera paciente de las decisiones burocráticas de los tecnócratas encargados de la planificación centralizada. La mejor expresión de esa realidad la ofreció el propio presidente Correa cuando, en incontables ocasiones, sostuvo que cada acción municipal era obra de su gobierno, porque era el que asignaba los recursos. Incluso llevaba al extremo esa afirmación –y esa creencia- cuando, la mayor parte de las veces, utilizaba la primera persona del singular. A cambio, en lo que venía a ser una ironía, se los denominó Gobiernos Autónomos Descentralizados.

El tercer factor de debilitamiento del legislativo y fortalecimiento del presidente es el sistema electoral. No solamente se dejó intocados los aspectos más negativos de este, sino que se los profundizó y se añadieron otros elementos que distorsionan la representación, incentivan la personalización y llevan a la constitución de instituciones débiles. Se mantuvo la modalidad de votación en listas abiertas, que torna caótica a la representación y debilita a los partidos. Se dejó intocada a la conformación del legislativo mayoritariamente por provincias, con la consecuente percepción del diputado o asambleísta como un representante territorial que se ve obligado a colocar en plano secundario a los temas nacionales porque debe atender a su clientela local. No se alteró ninguna de las disposiciones que permiten a organizaciones minúsculas obtener puestos legislativos, mientras obligan a los partidos nacionales a competir con los caciques locales o con las asociaciones vecinales (en el fútbol sería un sinsentido que un equipo de la primera división disputara el campeonato con los equipos de las ligas barriales). Más adelante, en la ley pomposamente llamada Código de la Democracia, llevaron la fragmentación al extremo cuando (en un ejercicio de *gerrymandering*) dividieron las provincias y las ciudades de mayor población en distritos, con lo que dieron el golpe final a la proporcionalidad.

El leviatán criollo

El carácter concentrador de los poderes, expresado en los arreglos institucionales mencionados y en otros que quedaron como disposiciones constitucionales y legales, se derivaba directamente de la calificación de *revolución* asignada al proceso. Sus impulsores nunca lo concibieron como un gobierno temporal, sujeto a la decisión cambiante de la mayoría, como corresponde al aburrido y monótono mandato democrático. Su propósito era la sustitución del régimen, una alteración total de los principios y de las reglas de juego. El cambio de las instituciones, los procedimientos y las reglas de lo permitido y lo prohibido, era imposible hacerlo en un solo período presidencial. La expectativa de trescientos años de duración de la constitución podía ser ilusa, desmedida y ciertamente pueril, pero expresaba a cabalidad la intención de fondo que movía a sus impulsores.

Esa concepción se expresa no solamente en la dimensión temporal, sino sobre todo en la comprensión binaria de la realidad. En una revolución no caben los términos medios, se eliminan los matices y es innecesaria cualquier escala que se establezca entre el blanco y el negro, entre lo positivo y lo negativo, entre lo bueno y lo malo, entre el pasado oscuro y el futuro luminoso. Sobre todo, entre un nosotros y un ellos. *Somos más, muchos más*, la frase constantemente repetida por un presidente que nunca se asumió como el mandatario de todos los habitantes del país, expresaba con toda claridad esa concepción excluyente.

La línea de separación en esa dicotomía la establece una autoridad superior, colectiva o individual, ya sea el partido o el líder. En cualquier caso, es una autoridad que tiene la llave del futuro porque conoce las leyes de la historia. Es la vanguardia que, por sus conocimientos, por su entrega, por su sacrificio, debe conducir a los pueblos hacia la tierra prometida. Es la que otorga significado a los términos movilizadores: libertad, igualdad, paz, buen vivir, felicidad, patria, nación, pueblo. La vanguardia resuelve los conflictos y, en las revoluciones que usan el lenguaje de las armas, define si las cabezas se mantienen sobre los hombros o ruedan por el suelo. Tanto las ajenas –enemigas por su propia condición-, como las propias, que con la más leve crítica o el menor asomo de discrepancia obtienen el pase de entrada al campo de los traidores. Quienes abandonaron el glorioso tren del *proyecto* lo comprobaron con dolor, aunque sin el dramatismo de otros casos: *Oh, libertad, cuántos crímenes se cometen en tu nombre*, fue la última exclamación de la revolucionaria francesa frente a la guillotina accionada por otros revolucionarios,

Toda revolución, para merecer ese calificativo, debe considerar a la política como la disputa entre dos términos irreconciliables. Esta queda reducida a la dicotomía amigo-enemigo, planteada con toda claridad por Carl Schmitt, quien devendría en el teórico preferido del nazismo. Pero está presente también en los textos de Lenin, del Che Guevara y del sinfín de autores, tanto de izquierda como de derecha, que han convertido a su participación en la política en un asunto de vida o muerte. Teóricos y activistas consideran

que su acción es la cruzada emprendida para salvar a la humanidad en nombre de una ideología que se sostiene en la creencia, no en la razón. Es un asunto de fe. La revolución se transforma en una experiencia religiosa porque pretende imponer comportamientos en nombre de un destino predeterminado. El ideal movilizador –la igualdad o lo que fuera- no es una razón para vivir, es la causa perfecta para morir. El futuro exige que los esclarecidos estén dispuestos al martirio. Pero, es una medalla de dos lados, que en el reverso muestra que quien está dispuesto a morir por un ideal, también está dispuesto a matar por este.

La llegada al gobierno por medios democráticos no cambia la esencia de esa concepción. La noción de hegemonía, en una versión bastante acomodaticia de la formulación original de Antonio Gramsci, ha sido la herramienta a la que se acudió para tratar de compatibilizar la concepción dicotómica con componentes básicos de la democracia como el pluralismo y el disenso. Las reglas democráticas pasan a ser útiles únicamente mientras sirvan como instrumentos para la construcción de la hegemonía, entendida como la dominación de *nosotros* sobre los *otros*. Incluso menos que ello, solamente hasta controlar los recursos que permiten iniciar esa construcción. La vieja idea de la democracia como dictadura de la burguesía, que parecía superada por más de ciento cincuenta años de historia mundial, deja ver sus hilachas, aunque ahora se cambien los términos. El régimen que se construirá deberá expresar una nueva hegemonía, que ya no será la del proletariado sino la de un ente más difuso Ocasionalmente podrá llamarse pueblo o podrá recibir cualquier denominación que convenga a las circunstancias. En realidad, ese ente se identifica más por lo que no es, por alusión a su contrario o sus contrarios, a la oligarquía, los vendepatria, la argolla, la casta, la rosca. En la versión correísta, la hegemonía debía construirse en contra de los *pelucones*, un término en desuso, desempolvado de la época colonial quizás como otro intento más de anclar la lucha heroica en lo hondo del pasado y de demostrar que nada había cambiado en el país hasta su llegada. La dicotomía es ideal para la construcción del relato adanista.

Aunque todas las revoluciones han apelado a la sociedad como su motor, solo muy pocas de ellas han llevado al fortalecimiento de esta y mucho menos a su autonomía. Realizadas por medios violentos o pacíficos, han apuntalado el Estado y no la sociedad. El control del aparato estatal, planteado inicialmente como un medio para derribar al viejo régimen y como un recurso pasajero en la fase inicial de la construcción del nuevo, ha terminado por transformarse en el objetivo final. Es un control que abarca no solamente al gobierno y al legislativo, sino a todo el conjunto de factores y condiciones que definen el tipo de régimen. Rápidamente, como lo demuestra la historia del mundo en el siglo XX, se invierte la relación que consideraba originalmente a la sociedad como el núcleo activo que alteraría el orden desde abajo hacia arriba. El Estado pasa a ser el sujeto activo desde el que se imponen los cambios. Apoyadas en su visión dicotómica, que las alejan de la democracia, las revoluciones se han convertido en las más claras herederas del pensamiento de Thomas Hobbes. Su Leviatán, dotado de todos los poderes e inapelable porque ofrece seguridad y expresa un interés que el líder o el partido considera que es el

de la comunidad, tiene como contraparte a una sociedad que ha renunciado al derecho de autogobernarse.

Sin llegar a los extremos de las ocasiones en que el poder nació del fusil –para utilizar la figura del *Gran Timonel* chino-, el diseño institucional ecuatoriano y las prácticas políticas de la Revolución Ciudadana no se alejaron del esquema dicotómico. Seguramente sus impulsores ignoraban la teoría y posiblemente nunca habrán oído hablar de Hobbes (algunos de ellos sí conocieron el texto clásico de Lenin, aprovechado discípulo del autor inglés), pero siguieron al pie de la letra su idea de poner la toma de decisiones en manos de un ente superior. Lo hicieron cuando escribieron la constitución, cuando estatizaron la participación ciudadana y fortalecieron al ejecutivo o, ya en el ejercicio del gobierno, cuando criminalizaron la protesta social, coartaron la libertad de expresión y retornaron a los conceptos superados de la doctrina de la seguridad nacional.

El Leviatán criollo está contenido no solamente en el diseño institucional de la constitución, sino en los principios que la orientan. La muestra fehaciente de ello es la ausencia de disposiciones que limiten el poder (como corresponde al Estado de derecho) y que a la vez lo distribuya (como corresponde a la democracia). Como sostenía el mismo autor inglés, por medio de un acuerdo, la sociedad debía entregar a un tercero todas las atribuciones y las facultades. El contrato social serviría únicamente para ceder la soberanía, no para enraizarla en la sociedad, como era el ideal de John Locke que buscaba superar el absolutismo. No, en el pensamiento hobbesiano, sea de derecha o de izquierda, esta debe ser entregada a ese ente todopoderoso que podrá evitar la guerra o, en general, los enfrentamientos entre personas con distintos pareceres. El disenso no podía tener lugar si lo que se pretendía era construir la patria. Cualquier cuestionamiento a la constitución, a la revolución, al *proyecto* y a la palabra del líder sería una afrenta a la patria. A aquella patria que era obligatorio rememorar en todas las ceremonias oficiales, con una canción bélica rescatada del más primario nacionalismo.

La orientación plasmada en la Constitución y en las leyes que se desprendieron de ella, anunciaba no solamente la conformación de un Estado fuerte, con gran capacidad de intervención, sino sobre todo con total autonomía con respecto a la sociedad. La prédica de independizarlo de los poderes fácticos y de alejarle de los intereses de las oligarquías, nunca tuvo como correlato el fortalecimiento de la sociedad. No se establecieron los medios para que esta pudiera controlar al Estado. En la gestión gubernamental se castigaron todos los cuestionamientos de grupos sociales, que vivieron en carne propia la paradoja de la represión por parte de un gobierno autocalificado de izquierda. No fue solo la *descorporativización* del Estado, por medio de la neutralización de los sectores empresariales, (los pelucones), sino la marginación y el castigo a las organizaciones de trabajadores, indígenas, maestros y en general a todos los sectores que a lo largo de las tres décadas anteriores fueron actores directos de la política. De nada sirvió que ellos hubieran impedido que se concretaran las políticas neoliberales. En esa visión no cabía una sociedad autónoma, deliberante, activa, impugnadora y contestataria. La revolución solo podía ser un movimiento desde arriba hacia abajo. El Estado necesario para la

refundación debía ser el Leviatán, el monstruo incuestionable. Hobbes podría sentirse orgulloso de contar con discípulos tan fieles en un confín del mundo.

La oratoria inicial que apuntaba hacia un cambio radical de la sociedad y del orden político chocó frontalmente con esa concepción del orden político. Se equivocan o pretenden obviar esta realidad quienes sostienen que el autoritarismo se manifestaba solamente en algunas decisiones de Correa. Los desengañados –todos ellos de última hora porque se alejaron cuando el modelo ya estuvo implantado y en funcionamiento- han intentado presentarlo como un desvío de la línea original. Los más críticos entre ellos hablaron incluso de una traición de su líder a la propuesta elaborada en la campaña y plasmada en la Constitución. La realidad no les da la razón. El contenido de fondo de esa propuesta siempre fue el retorno al pasado. Lo fue no únicamente por la evocación de esos momentos tan gloriosos como fantasiosos, sino sobre todo porque ella no recogía los avances logrados en la ampliación y profundización de derechos a lo largo del período democrático. No era un programa de afianzamiento de la maltrecha democracia. Era la sustitución de esta por un régimen vertical, supuestamente protector, que veía un peligro en la sociedad activa, organizada, cuestionadora. La prédica revolucionaria se quedó en palabras que colisionaron con la realidad no solo de los hechos sino sobre todo de las normas. La Constitución quedó como el testimonio delirante de una utopía reaccionaria.

Los lunes de esos tiempos

APLAZAMIENTO

29 de enero de 2007

La propuesta estrella de Rafael Correa fue la asamblea constituyente. Su campaña giró en torno a ella y, de acuerdo a las encuestas, ahora la apoya la mayoría de la población. Cuatro de cada cinco ecuatorianos estarían dispuestos votar favorablemente en la consulta. Claro que una proporción relativamente similar de personas confiesa que no tiene idea de lo que significa la asamblea o, en el mejor de los casos, cree que servirá para generar empleo o para incrementar los salarios. Se podría decir, por tanto, que el anhelo generalizado de acceder a mejores condiciones de vida se encontró en algún punto de la historia con una oferta de campaña que ofrecía solución a todos los problemas. Sería impensable que no existiera el apoyo mayoritario, pero a la vez constituye una fantasía interpretar esa corriente como un respaldo a la reforma política o a la elaboración de una nueva constitución.

El hecho es que estamos frente a una situación bastante más compleja de lo que parecen interpretar los estrategas gubernamentales. El enorme apoyo con que cuenta el gobierno tiene múltiples explicaciones, tantas cuantos grupos sociales se quiera identificar. Por ello, puede ser no sólo ingenuo sino riesgoso creer que todas esas personas estarán dispuestas a jugarse todo por la asamblea. Peor aún, es altamente probable que, después de haber difundido la idea de que ésta arreglará todos los problemas, la decepción comience antes de que ella se instale y que se produzca una caída en picada de ese apoyo. El único camino posible para evitarlo es, por un lado, separar claramente los temas económicos de los políticos, de manera que se vea claramente cuáles son los límites de la asamblea. Por otro lado, es necesario ponerle contenido a ésta. Hasta el momento se ha discutido sobre los procedimientos (pésimamente planteados por el Gobierno), pero no se ha dicho una palabra de lo que se discutirá en ella.

Al hacer ese ejercicio de separación de los temas que ahora están entremezclados el Gobierno podrá salir del atolladero en que se está metiendo, ya que podrá explicar claramente lo que quiere –y lo que puede- hacer en lo económico y no hacerle depender de una aún improbable asamblea. Además, con ello podría llegar a la que sin duda sería la mejor conclusión para el momento político del país, esto es, que la asamblea es el peor camino para la reforma política y que constituye una irresponsabilidad impulsarla en las condiciones actuales. Con la expedición del estatuto ya se vio que nacerá sin legitimidad. La elección de asambleístas, en esas condiciones o incluso con la actual Ley de Elecciones, producirá un resultado que no será satisfactorio para nadie. La Constitución que salga de ahí no encontrará alguien que quiera reconocerla como propia. La única vía sería postergarla por lo menos un año y durante ese período abrir un proceso de debate de los temas de fondo. El Presidente tiene el liderazgo para

hacerlo y debe utilizarlo para evitar que el país se embarque en la aventura.

INSTITUCIONALIDAD

24 de marzo de 2008

Debe ser muy difícil para los asambleístas del gobierno resistir a la tentación de elaborar una constitución a la medida del presidente de la República o de su proyecto político. Con mayoría absoluta y poderes ilimitados, sin oposición y con amplias perspectivas de triunfo en el futuro inmediato, no deben encontrar motivos para no hacerlo. Al fin y al cabo, somos herederos de la tradición del todo o nada, del hoy me tocó a mí y mañana quién sabe. Por tanto, es muy probable que actúen como siempre se lo ha hecho, como actuaron los partidos cuando estuvieron en similar condición. Los primeros acercamientos de la Asamblea al tema constitucional, los famosos mandatos constituyentes y las leyes que ha aprobado hasta el momento son señas de que eso va a ocurrir. En todos esos productos hay un sello muy claro, que incluso hace imposible diferenciar si algo se originó en la Asamblea o en el Gobierno.

No se puede negar el derecho de este último a presentar sus propuestas e incluso de sus asambleístas a defenderlas, pero esto no quiere decir que se deba ignorar el límite que existe entre uno y otra. Es un límite que está marcado por la función última, primordial y única de la Asamblea, que es elaborar una nueva Constitución para el conjunto del país. El Gobierno, de la misma manera que otras instituciones estatales o que cualquier grupo de ecuatorianos puede acudir a ella para entregar insumos, pero solamente hasta ahí llega su atribución en este caso. Sin embargo, Carondelet ha sobrepasado largamente ese límite y ha logrado una influencia similar a la que tuvieron los gobiernos que convocaron a asambleas constituyente entre la década del veinte y la del sesenta del siglo pasado. Todos ellos buscaron hacer constituciones a la medida del gobernante o de su partido. Lo mismo sucedió con la asamblea de Sangolquí, aunque allí los sastres que tomaron las medidas no eran parte del gobierno, pero sí de los partidos que dominaban en el tablero político nacional y que sabían certeramente que gobernarían en el siguiente período. En todos esos casos se impuso la lógica de la imagen y semejanza, lo que llevó a elaborar constituciones perfectas para sus respectivos gobiernos, pero defectuosas para quienes se hallaban fuera de él y mucho más para la oposición. Nunca pensaron que en algún momento ya no serían gobierno y que tendrían que sufrir la parte negativa de la constitución que ellos mismos habían diseñado.

De esa experiencia se deduce que para elaborar una buena constitución hay que ponerse en el lugar de la oposición o, dicho de otra manera, hay que hacer una constitución que resulte excelente incluso para la época en que habrá que dejar el gobierno. Los asambleístas de Montecristi podrían vencer a la tentación del traje a la medida con solamente pensar en que mañana puede ser presidente cualquier populista corrupto o un derechista con aires dictatoriales, y que el único antídoto para ellos será un sólido orden constitucional.

LAS PALABRAS

25 de diciembre de 2006

Refundación es uno de esos términos que prácticamente ha caído en desuso en la política criolla. Quienes por alguna razón lo utilizan, lo hacen con tono despectivo y a nadie se le ocurriría reivindicar de esa manera una acción propia. Hasta los impulsores de la asamblea y de todos los cambios habidos y por haber, que hace poco tiempo no habrían dudado en calificarse como refundadores, han desarrollado una admirable capacidad para evitar el uso de la dichosa palabrita. No les falta razón después del desgaste que ésta ha tenido desde los confusos episodios de la tarde del 20 de abril. Ahora, para decir lo mismo, tienen que acudir a eufemismos y sinónimos, lo que sin duda debe exigir gran esfuerzo para lograr la transmisión de las ideas básicas sin afectar a la comunicación.

Así es el destino de las palabras. Al estar estrechamente ligadas a los hechos, su significado puede variar en cualquier momento y puede ser totalmente diferente de un país a otro. En el nuestro, acostumbrados a que lo único estable sea la inestabilidad, nos referimos a políticas de Estado cuando queremos aludir a decisiones y orientaciones que duren algo más que el poco tiempo que les concedemos a los gobiernos. En cualquier otro lugar del mundo simplemente serían políticas a secas, sin calificativos ni explicaciones, pero debido a nuestro afán por el reemplazo anticipado de presidentes nos vemos obligados a poner el adjetivo para darle un toque de seriedad y de responsabilidad.

Pero, mientras unas palabras desaparecen o se vuelven aborrecibles, otras renacen y se generalizan. Ahora, con la elección de nuevo presidente hemos vuelto a escuchar palabras que casi se habían borrado del diccionario político y que al parecer están destinadas a florecer nuevamente en el fértil campo del habla nacional. Socialismo es una de estas, y ha retornado de la mano –o más bien por la boca- del futuro primer mandatario. La ha utilizado para calificar no solamente lo que será su gobierno, sino para señalar el rumbo que seguirá América Latina a partir de este momento. Desde Venezuela hasta Chile, pasando por toda la gama de izquierdas del continente estarían en ese camino según las declaraciones que ha hecho en Venezuela. No cabe duda de que es un excelente tema para la investigación de politólogos y lingüistas porque, por un lado, habría que saber cómo es eso de socialismos que fortalecen el capitalismo y, por otro lado, no es seguro que en todos esos países se entienda de la misma manera esa palabra.

Bolivariano y bolivarianismo son otras palabras que están entrando por la vía presidencial en el léxico político ecuatoriano y que también ponen en el tapete un debate más político que lingüístico. Resulta difícil explicar cómo es que quien fuera un conservador de toda la vida, casi doscientos años después de su muerte ha podido convertirse en el icono de la revolución. Bolívar revolucionario es una afirmación contradictoria, un oximoron, pero hay que acostumbrarse porque esos son los secretos que guardan las palabras.

LAUREL Y CHUQUIRAGUA

19 de mayo de 2008

A pasos de gigante avanza la epidemia de originalidad en esa enorme ONG que funciona en Montecristi. Ya quedó atrás la soberanía del cuerpo, con el consecuente derecho al placer que, según un abogado, es coherente con el buen vivir pero poco compatible con el bien común. Aparentemente han pasado también a segundo plano los derechos de la naturaleza, con el hermoso retorno a los brillantes años del medioevo en que se podía enjuiciar y castigar a animales. Claro que, como mandan los aires del siglo XXI, era necesario incluir a los habitantes de los reinos vegetal y mineral para que la tierra sagrada esté completa.

Se ha mantenido, en cambio, la declaración de la ciudadanía universal, hasta transformarse en uno de los pocos artículos de la nueva constitución que han sido aprobados y sacramentados, con lo que de ahora en adelante los demás países del mundo ya saben cuál es el camino que deben seguir en el futuro. También triunfó la revolucionaria concepción de la nueva política internacional, alimentada del más puro sentimiento de ombligo del mundo, que pondrá bajo control de este pequeño pero altivo país a los siniestros y amenazantes tratados con sus respectivos organismos, culpables del empobrecimiento y del resto de males conocidos y por conocer.

Ya que el generoso árbol de la originalidad no conoce de estaciones ni se amilana ante la sequía o la lluvia, cada día da nuevos y más nutritivos frutos. Ahora estamos en la época de los símbolos patrios: el escudo, la bandera y el himno. Si el coronel venezolano hizo un pequeño cambio en el escudo de su país porque no le parecía lógico que el caballo mirara hacia la derecha, ya que dicho está que los caballos deben mirar a la izquierda, la ONG de Montecristi está dispuesta a ir mucho más allá. Del himno hay que eliminar toda la letra, porque es antiespañola y eso no es políticamente correcto cuando hay tantos ecuatorianos nacidos en esas tierras y además niega la esencia de la ciudadanía universal. Debe ser reemplazada por una letra condenatoria del actual imperio, que es el obstáculo para que todos (y todas, por supuesto) vivamos bien aquí y ahora. Del escudo hay que arrancar los laureles por su condición de símbolo guerrero, de una guerra mala, diferente a la que fecundó la sangre y engrandeció el dolor, que es la guerra buena, la que se expresa en la chuquiragua.

Demócratas hasta el tuétano, en el escudo hay que poner la huipala y el spondylus, porque no puede faltar la referencia a ese gran imperio que en aras del buen vivir de sus habitantes los trasladaba en masa de un suyo a otro suyo y proporcionaba idílicas condiciones de vida a toda su población, mitimaes incluidos. En estricta justicia regional, habrá que encontrar un lugar para la hoja de plátano. Será el reconocimiento imprescindible a esa noble fruta que nos representa en el mundo y así todos podrán entender la profundidad de los símbolos de la banana republic.

SOMOS UNA LEYENDA

22 de noviembre de 2010

“Nada nos derrotará”, dijo con seguridad el líder máximo antes del inicio de la

convención de Alianza País. Lo repitió nuevamente en su intervención de apertura del evento en que se aprobaron por aclamación unos documentos que nadie discutió. La confianza en la victoria infinita se apoyaba en la organización que comenzaban a conformar y que por magna decisión no sería partido sino movimiento. De paso hay que decir que si siguen ganando elecciones estarán obligados a dejar de ser movimiento y convertirse en partido, porque así lo establece el artículo 110 de la Constitución. Pero, bueno, para eso deberá pasar todavía un buen tiempo y además siempre está el recurso de hacerle el by pass a su propia carta política.

La reunión final de la convención dejó tres hitos dignos de constar en la historia de la gran organización. El primero es la despolitización con que ella nace a la vida pública. Aparte de los discursos de cajón, con más arengas que análisis, con más consignas que líneas ideológicas y políticas, la reunión sirvió para dar cuenta de las habilidades de un sinnúmero de grupos musicales que han aflorado al calor y al amparo de la Revolución Ciudadana. Alcivar Zurita, Son País, Emily Fierro y, obviamente, Pueblo Nuevo que puso Secretario Ejecutivo, fueron algunos de los que hicieron arder los corazones. Parece que la consigna que pedía que se vayan todos, en la que se subió AP, ha sido tan efectiva que ha penetrado muy hondo en la propia organización política gubernamental. Todos se han ido de la política, no queda nadie para debatir, para intercambiar ideas, menos aún para mostrar el desacuerdo –aunque fuera mínimo- que suele existir en organizaciones democráticas.

El segundo se deriva directamente de ese, y es la ausencia de rumbo en la hoja de ruta del renacido movimiento. Además de servir como punto de encuentro con amigos y familiares y de escenario para cantar con ellos, una convención es el lugar ideal para definir posiciones. Habría sido útil para sus militantes pero también para la ciudadanía en general, que de allí saliera, por ejemplo, alguna luz acerca de la similitud de la Revolución Ciudadana con el proceso cubano o con el coreano, que según diversos momentos del humor presidencial serían los modelos a seguir. También era la oportunidad para decirle al país en qué consiste el socialismo del siglo XXI y en qué se diferencia de los socialismos de siglos pasados y de la socialdemocracia.

En tercer lugar, es evidente que la convención sirvió para hacer una depuración interna. La composición de la nueva directiva expresa el triunfo del círculo íntimo del Presidente y la marginación de los pequeños grupos que pueden hacer ruido. La izquierda, aquella que mantiene lazos con los movimientos sociales, quedó en el mejor de los casos en alguna comisión de segundo orden. De los otros se escogió por ahí a los más manipulables, que ahora se llaman leales.

“Somos una leyenda”, dijo sin intención de bromear el máximo líder.

LOS OTROS RESPONSABLES

26 de marzo de 2007

Mientras la patria volvía, altiva y soberana, en la madrugada lluviosa dentro de un bus rigurosamente vigilado por tropas policiales, no valía la pena perderse en detalles y recordar que alguna vez hubo intentos de tener en estas tierras esa cosa llamada democracia. No, más urgente era calcular los beneficios que podían dejar las irregularidades que se cometían en las propias narices, como lo hicieron los partidos que dicen no estar con el gobierno ni con la oposición (sino todo lo contrario, diría un exmandatario mexicano). De los otros, aquellos que sustituyeron al presidente del Tribunal Supremo Electoral no se podía esperar nada, ya que estaban simplemente pagando las consecuencias de sus propios actos. Desde hace semanas que para ellos el juego venía desarrollándose en el campo de la violación de los procedimientos, de la inconstitucionalidad y de la ilegalidad.

Pero se suponía que en ese campo no estaban los otros partidos, aquellos que en una situación como ésta tenían todas las condiciones para demostrar que, por encima de los cálculos inmediatos, existen unos principios mínimos que sustentan a la democracia. Básicamente a la Izquierda Democrática y a la RED les correspondía esa responsabilidad. Se creía, hasta que comenzó esta última fase del largo caos ecuatoriano, que esas agrupaciones actuarían no solamente como un balance entre el radicalismo gubernamental y la ceguera conspirativa de la oposición, sino que serían la garantía de preservación de los principios básicos de una política democrática. Pero, en contra de todas las previsiones y de todas las esperanzas, no dijeron una sola palabra cuando el TSE aportó a la historia una novedosa forma de golpe de Estado. Por el contrario, pasivamente mostraron su credencial al policía que, lista en mano y en la puerta del congreso, asignaba o negaba la condición de diputado a cada uno de los que se acercaban por ahí. No importó siquiera la dignidad personal, a la que se habría aludido en tiempos pasados. Aún más, en lugar de condenar lo realizado por el organismo electoral, desde ese sector nació la barbaridad jurídica que permitió la posesión de quienes, para no confesar lo inconfesable, pocas horas antes abandonaban precipitadamente una reunión clandestina con representantes del gobierno y huían desesperados cubiertos por manteles.

El golpe iniciado por los otros fue santificado por quienes pudieron haberlo impedido a tiempo con una simple declaración de lealtad a la democracia y con la negativa a pasar por la puerta custodiada del congreso. Pero sólo se animaron a actuar cuando ya no había remedio, e hicieron lo posible para volver una vez más a un ficticio Estado de derecho sin esencia y sin contenidos. Si éste había sido despedazado por las acciones de la mayoría legislativa y del TSE, lo único que cabía era rechazar a ambas y no darle carta de legitimidad a una de ellas, como se hizo finalmente por iniciativa de ese sector. Por omisión, primero, y por acción, después, ellos son los otros responsables de la ausencia de Estado de derecho.

DELITO GRUESO

24de diciembre de 2012

Quien miente en lo menos, miente en lo más. Palabras más, palabras menos, ese fue uno de los argumentos cuando, exultante e impetuoso, defendió a su primo. Lo calificó como la víctima de un linchamiento mediático, ya que, como siempre, era otro invento de la prensa corrupta. Para graficarlo, pidió un ejemplar de El Universo y lo rompió mientras pedía a los jóvenes que siguieran su ejemplo (¿podrá alguno de los militantes de izquierda que aún quedan en el gobierno explicar la diferencia que hay entre ese acto y la quema de libros que muchos sufrimos en carne propia aquí y en otros países del continente?). No era la primera vez que hacía lo uno y lo otro. Varias veces defendió a quienes aparecían involucrados en actos de corrupción, incluso visitándoles en la cárcel, y muchas tantas también demostró materialmente su intolerancia con los medios.

Siguiendo la misma lógica utilizada para la defensa de este personaje, aquella de la mentira chica y la mentira grande, ahora todos sus actos quedan cubiertos por un espeso manto de sospecha. El préstamo al argentino, la participación de éste en la comitiva que viajó a Irán, las cajas de seguridad en bancos rusos, las cuentas cifradas en Suiza, las ventas de las empresas incautadas, el manejo del banco convertido en caja chica, la desmemoria sobre el origen del préstamo para la compra de la casa en Miami, en fin, todos sus actos deben ser vistos ahora a la luz de la mentira chica que, en las sabias palabras del poderoso primo, es la muestra de la mentira grande. No se reduce a la arrogación de un título, mucho menos a la pueril justificación de la inmadurez (que, por cierto, se ha extendido hasta su edad biológica adulta y no sólo hasta los veintiocho años que, según un agencioso embajador, parece ser el límite de la edad despreocupada). No, esa es solamente la mentira chica. El tema de fondo está en las grandes. Allá deberían apuntar los organismos de justicia, obviamente si ellos existieran y si fueran independientes.

En términos políticos, es evidente que la situación se hacía cada vez más insostenible para el líder y sus seguidores. La bomba iba a estallar y era más conveniente que fuera ahora, cuando la gente está preocupada de las fiestas navideñas y faltan casi dos meses para las elecciones. Cuando éstas lleguen ya se habrá olvidado el tema, como se ha olvidado la narco-valija, los comecheques, los contratos del hermano mayor y tantos otros. El tiempo es un gran aliado de la corrupción, especialmente en un país en donde los valores quedan sepultados bajo el pavimento de carreteras y bonos denigrantes. Además, el papel de víctima, de haber sido engañado por alguien de su entorno político y familiar, funciona perfectamente cuando hay un caudillo al que se le ha rodeado con un halo de pureza. Pero, ¿será posible sostener y demostrar ese desconocimiento arrastrado durante varios meses y frente a abundantes evidencias? Un delito tan grueso no pudo pasar desapercibido.

EXTRAVÍO

23 de marzo de 2009

Como “Abdalá con PhD” le calificó un académico que pocos días más tarde se

transformó en funcionario de la Revolución Ciudadana. “El PhD puede hacer la diferencia” sostuvo un joven con el entusiasmo de la campaña, y esa fue una de las esperanzas cuando se eligió a una persona que no presentaba otra trayectoria que su paso por las aulas. Pero, parece que el cartón que certifica ese título se ha extraviado en alguno de los desplazamientos diarios, porque las últimas declaraciones presidenciales no corresponden a la persona que dedicó buenos años de su vida a estudiar en universidades europeas y norteamericanas y otros tantos a enseñar en las nacionales. Sostener que quien encabeza el poder ejecutivo representa también a los demás poderes del Estado significa simple y llanamente ignorar el principio básico de la división e independencia de poderes, sobre el que se asienta desde hace más de dos siglos el constitucionalismo. Así mismo, asegurar que los periodistas deben triunfar en elecciones para ganarse el derecho a opinar constituye una declaración de desconocimiento de los fundamentos de la libertad de expresión, que no es más que el derecho de todos los ciudadanos, periodistas o no, a dar su opinión.

Es verdad que, en los regímenes presidenciales, como son todos los latinoamericanos, la presidencia del gobierno y la jefatura del Estado las ejerce una misma persona, pero nadie medianamente informado podría sostener que eso anula la separación de poderes. Si así fuera, se trataría de una monarquía absoluta, ni siquiera constitucional como la de Bélgica tantas veces aludida en tiempos de chefs palaciegos y de suegros jubilados. Seguramente no es eso lo que quiso decir el presidente, pero no deja de ser preocupante que una afirmación de esa naturaleza se la haga cuando el órgano legislativo no fiscaliza, cuando hay una instancia de control constitucional espuria y cuando se negocian los términos de la publicidad con el Consejo Nacional Electoral. Son demasiadas pistas que conducen a pensar que no se trató simplemente del error aislado de la persona que jamás comete errores.

La otra afirmación, esa que manda a los periodistas a ganar elecciones antes de hablar, no por absurda deja de ser preocupante. O, precisamente, por eso es que debe llamar a reflexión. Vista en el contexto general, se trata de un episodio más en el enfrentamiento con los medios que tantos triunfos le ha dado al presidente. Una vez desaparecida la maldita partidocracia y acallados los movimientos sociales, alguien debía quedar en el escenario para recibir los golpes. Ese alguien son los periodistas y las personas que opinan en los medios. El discurso presidencial los ha convertido en actores políticos y les ha transformado, a pesar de ellos mismos, en la oposición. Por tanto, si son políticos y además opositores, el paso siguiente dentro de la lógica pueril, es exigirles que hagan lo que hacen los políticos. Claramente expresado, en la Revolución Ciudadana habrá que ganar elecciones para poder hablar

Sí, en alguna parte se traspapeló el cartoncito con el título que hacía la diferencia.

El enemigo al acecho

La revolución, con su visión dicotómica, requiere contar con un enemigo. Mejor si son varios, y mucho mejor si se los puede encerrar a todos bajo un solo membrete. O bajo una idea fija que va cambiando de membrete. La sociología y la ciencia política han destacado este fenómeno como una característica del populismo latinoamericano. Pueblo contra oligarquía, nación contra imperialismo, patria contra traidores, son apenas algunos eslabones de una larga cadena de antinomias que se superponen y que han adquirido lugar propio en la tradición del continente. *Patria o muerte*, con su apelación al martirologio los engloba a todos. En el folclore local de cada país pudo ser *Braden o Perón, pueblo contra trincas*, o simplemente la *querida chusma* que deja implícita la parte no querida, u odiada, que es lo mismo en ese mundo de blanco o negro.

La movilización popular inducida desde arriba –no la que surge espontáneamente y sin propietarios- es más efectiva cuando se plantea un conflicto abierto, en el que no hay más opción que vencer o morir (siempre con el irresistible atractivo de la muerte gloriosa). No queda un resquicio por el que pueda caber la más pequeña posibilidad de acuerdo. *Al enemigo, ni agua*, dice la consigna deportiva que ve a la cancha como el escenario de una guerra sin cuartel y considera que el empate es una derrota. Los líderes carismáticos, de izquierda o derecha, conocen perfectamente el potencial movilizador de las dicotomías. Su juego es de todo o nada. Sin matices, porque la revolución se defiende en su totalidad, en cada uno de sus detalles, sin discrepancias, como sostenía el casi imberbe Saint Just. Remataba el guillotinero-guillotinado francés que "los que se pasan la vida haciendo revoluciones a medias no hacen más que cavarse una tumba". Siempre con la muerte como destino luminoso. *Vencer o morir. Patria o muerte*.

Sinónimos, metáforas y sinécdoques: la gramática revolucionaria

El correísmo no se alejó de esa tradición. Por el contrario, como ya se vio antes, la alimentó desde el primer día, cuando su líder comenzó la campaña blandiendo el cinturón. Su sinónimo en el habla ecuatoriana y de varios países latinoamericanos, *la correa*, proporcionó un excelente instrumento semiológico para asociar su apellido con el ejercicio de la autoridad. Apenas con un par de palabras, pero con la inapelable fuerza de la imagen, el *correazo* de los spots publicitarios hundía en terreno firme por lo menos tres pilares en los que se afirmaría no solamente la campaña, sino que sustentarían el proceso que se abría con ella. Expresaba perfectamente la concepción dicotómica de la política, anunciaba el castigo que merecerían quienes se situaran en el lado equivocado y definía el papel que de ahí en adelante tendría el líder. Dueño –por apellido y por ideología- del instrumento de sometimiento, la campaña pronto lograría que lo fuera también por el voto ciudadano. Los malos estaban advertidos. Solamente podrían esperar el castigo. Fue el temprano anuncio de la que sería una práctica tosca, burda, pero bien trabajada, que se extendería por diez años a todos los frentes de la política.

Rápidamente, la imaginativa metáfora del correazo descendió del plano simbólico a la realidad. Los primeros pasos –seguramente siguiendo su formación religiosa que afirma que en el inicio fue el verbo- transcurrieron en el campo semántico. Eran necesarias palabras. Palabras claras, sencillas, de fácil llegada y recordación para que tuvieran el efecto esperado. La primera fue la *partidocracia*, un término que no resiste el más débil escrutinio académico si se lo trata de aplicar a una realidad política como la ecuatoriana, en la que los partidos siempre fueron prácticamente inexistentes. Claro que lo académico no llevaba vela en ese entierro que buscaba sepultar a la vieja política, de modo que, incluso los más preclaros militantes de las filas revolucionarias, aquellos que algo sabían de la historia reciente –porque participaron en ella, más que por curiosidad intelectual-, repitieron incansablemente la palabreja. No cabía detenerse en minucias ni en exquisiteces conceptuales. El sustantivo adjetivado funcionaba perfectamente. Al fin y al cabo, los partidos habían hecho suficientes méritos para convertirse en cadáveres que merecían sepultura.

Por esos mismos días, Rafael Correa extrajo de algún baúl familiar la palabra que en corto tiempo obtuvo carta de legitimación en el léxico nacional. *Pelucón*, generalizada con su plural, *pelucones*, para abarcar a un grupo y no a una persona en particular, venía cargada de fuerte olor a naftalina. Traía reminiscencias coloniales, de los tiempos en que ni por asomo se podía hablar de la lucha de clases que el autor prusiano, mucho más tarde, identificaría como motor de la historia. Correspondía a tiempos, relaciones y lugares marcados por una complicada escala de castas que, para el siglo XX, no se diga para el inicio de la Revolución Ciudadana, ya constituía un objeto de estudio que había pasado de los antropólogos y los sociólogos a los arqueólogos. El objeto denotado no estaba presente, pertenecía a la prehistoria. Pero, más que por su carácter denotativo ocupó un espacio por la novedad de lo antiguo (para decirlo con un oxímoron). Su dejo *vintage* le bañaba con una simpatía que difícilmente podían tener sus sinónimos más contemporáneos. Oligarcas, burgueses, gamonales y más sustantivos y adjetivos que aludían a condiciones socioeconómicas, ya habían sido desgastados por líderes anteriores y por sucesivos fracasos. Pelucones se usó inicialmente con cierto aire festivo, con la sorna que provoca un término que no tiene referentes concretos, una metáfora que puede alentar juicios de valor tanto irónicos como denigrantes.

No pasó mucho tiempo para que Correa encontrara un referente mucho más concreto. Los medios de comunicación, reducidos con nombre y apellido a la *prensa corrupta*, se convirtieron de ahí en adelante en el enemigo principal del líder, por consiguiente, del pueblo, de la patria, de la revolución. La identificación de ese referente encerraba una triple sinécdoque. En un ejercicio imperceptible para la persona común –y seguramente inconsciente para él mismo, que nunca dio muestras de elaboradas abstracciones-, convertía a los medios escritos (la prensa) en la expresión del conjunto. Radio, televisión e incluso redes sociales quedaron sumidas en ese término que, incluso sin el adjetivo *corrupta*, se cargó de un contenido peyorativo. Ese fue el primer escalón en el ejercicio de nombrar a la parte para aludir al todo. El segundo consistió en identificar a los medios con la comunicación, en general. En el ideario colectivo se sembraba la idea de que

comunicación es solo lo que se encuentra en los medios y que por tanto únicamente era preciso incidir sobre ellos para construir la visión verdadera de la realidad. El tercer nivel de este juego de representaciones fue la disolución del concepto de opinión en el más genérico de comunicación.

La opinión, el atributo natural del ser humano que es la materialización de su libertad para pensar y expresar lo que piensa, pasó a ser un ámbito que debe estar sujeto a regulación. Por medio del descenso y el ascenso en la escala de esos intercambios de lo general por lo particular –de los medios a la comunicación, de la comunicación a la opinión- y viceversa, se hacía posible controlar la opinión. Si esta se reduce a los medios, el sometimiento de estos en realidad apunta al control del pensamiento. Al aludirlo como comunicación y al revestirlo con el ropaje de medios o prensa, podía ser objeto de control.

Los tres enemigos –*partidocracia*, *pelucones* y *prensa corrupta*- se integraban en uno solo. Todos ellos se habían confabulado para engañar y explotar históricamente al pueblo ecuatoriano. La lucha debía ser contra ellos y contra lo que representaban. Eran múltiples los campos en que había que dar la batalla. Aunque la partidocracia –si por ella se entiende a los partidos que predominaron en la escena política desde la transición a la democracia- ya estaba derrotada antes del primer triunfo de Correa, toda la prédica político-electoral durante los diez años se enfiló contra ella. La alusión reiterada a esos partidos no se hacía en referencia a realidades existentes en ese momento, sino en rememoración de un pasado aborrecible. Simplificaba así la disputa política, ya que identificaba a la partidocracia, vale decir a unos cadáveres, como la única oposición posible. Cualquier propuesta contraria al *proyecto*, como se lo comenzó a llamar, era en sí misma una vuelta al pasado. No había espacio para una oposición progresista, porque el futuro ya estaba definido, tenía marca registrada y nadie se lo podía disputar.

A ese futuro, que estaba previamente dibujado, se llegaría con el apoyo popular expresado electoralmente, pero para ello era necesario entrar en las cabezas de los votantes. Ciertamente, también estaba a disposición la otra puerta de entrada, la que se abre con la llave del clientelismo, ese intercambio de votos por favores que siempre ha dado excelentes resultados a quienes manejan la chequera del erario. *Tú me diste un voto, yo te doy una escuela*, fue la frase con la que se inauguró la democracia ecuatoriana en 1979. *Pero, tenemos carreteras*, fue el estribillo de los diez años de correato. Ambas oraciones dicen lo mismo, aluden a ese intercambio que convierte a la obra pública en un favor que debe ser agradecido, aunque el costo sean las libertades y la dignidad. Para que ese favor se produzca y tenga éxito, se necesitan no solamente recursos, que Correa los tuvo en abundancia, más que cualquier gobierno de la historia nacional, sino de palabras que hagan nido en las cabezas. Las carreteras por sí solas, sin las palabras denotativas del enemigo, no habrían sido suficientes para mover a ese electorado. La gramática ocupó un lugar central desde el pistoletazo inicial hasta el final del período. Lo más probable es que ni Correa ni sus operadores estuvieran conscientes de eso, como el burgués gentilhombre de Moliere, que se sorprendió al enterarse de que hablaba en prosa. El sinónimo, la

metáfora y la sinécdoque no fueron construcciones académicas. Eran expresiones anímicas y así debían ser recibidas por los receptores.

La palabra tenía que hacerse cuerpo. Partidocracia, prensa corrupta, pelucones, fueron recogidas –con términos ligeramente menos burdos- en la Constitución y en las leyes. A los partidos, existentes o por existir, se los puso a competir con cualquier asociación de vecinos que consiguiera las firmas de los familiares cercanos. Esto equivale, como se vio en un capítulo anterior, a poner en juego el título de campeón en un partido con el equipo barrial que domina en la cancha barrosa. En la nueva política ese era el único terreno permitido para una competencia desigual y con reglas hechas de plastilina. A los pelucones se los cercó con regulaciones e impuestos, que los más grandes y menos transparentes –amigos silenciosos del régimen- eludían con mayor habilidad que nunca. Los más, los ilusos que creían que el capitalismo es competencia, fueron amedrentados con el discurso altisonante que anunciaba un infierno más temido que el purgatorio que establecía en la práctica.

La prensa corrupta recibió la mayor atención del líder y del aparato de control, por lo que merecerá un tratamiento especial en la siguiente sección. Pero, antes de pasar a ese punto, cabe señalar que aparte de los tres adjetivos, que sus fieles seguidores repitieron en profesión de fe, desfilaron también los que cabían para la ocasión. *Ecologismo infantil*, *sicarios de tinta*, *sufridores*, *restauración conservadora* y, obviamente, *traidores*, fueron utilizados con deleite por el líder, especialmente en sus espectáculos sabatinos. Esas palabras, convertidas en conceptos, pasaron a convertirse en el gran aporte del correísmo al pensamiento político. A estas se añade la larga lista de adjetivos –más de ciento setenta según la cuidadosa recopilación de varias fuentes- con los que calificó a cada persona que medianamente discrepaba. De la reproducción de unos y otros se encargaban, entusiasta y maquinalmente, las redes montadas precisamente para ese objetivo. Más allá de ellas, inconscientemente las hizo suyas el ciudadano común.

El correísmo tuvo éxito en la lucha por la palabra. En el campo del lenguaje libró una guerra tan encarnizada como la que dio en lo electoral. Sabido es que la palabra denota y connota. Alude a algo específico (un objeto, una idea) pero también puede darle un sentido particular. Denotativamente, pelucón es simplemente una persona con el pelo largo, pero connotativamente pasó a ser un individuo de una condición social, económica y política específica. La revolución fue una lucha en el plano connotativo, un esfuerzo denodado por implantar el nuevo significado de los hechos, especialmente los de la historia. Como lo anticipó Orwell en su distópica novela *1984*, con la apropiación de la palabra se puede controlar el pasado, y quien controla el pasado puede controlar el futuro.

Por eso y por otras razones, la connotación de algunas palabras no permanece estática. Las necesidades de la política obligaron a cambiar una y otra vez el significado, lo que no presenta mayor dificultad cuando se ha logrado instalar en las cabezas de las personas el reconocimiento a una sola y única autoridad que reina sobre la palabra y le da la connotación adecuada al momento. Pasar del extractivismo como algo execrable a

convertirlo en la panacea del desarrollo, no requirió sino un discurso televisado del líder. A la noche de ese día, el ecologismo que alimentó la utopía inicial ya no podía ser pronunciado sin el adjetivo *infantil*, que lo colocaba en el otro extremo del espectro político. Igual suerte corrieron otros términos que debían ser adaptados a las cambiantes decisiones. Era un ejercicio complejo, que requería de enorme fuerza comunicativa y también de la neutralización de todos los demás emisores, ya sean reales o potenciales. Una condición indispensable era el monopolio de la palabra. Por ello, la batalla debía privilegiar los campos en donde se trabaja con palabras. Los medios de comunicación se constituyeron en el objetivo.

La lucha por el relato: la prensa corrupta

Para vencer en la lucha por el significado de las palabras se precisaba de enemigos concretos y visibles. La reducción de la opinión y de la comunicación a los medios y de estos a la prensa, formaba parte de la construcción del aparataje básico para la instauración del modelo controlador que se anunciaba desde la campaña. Para comprender la importancia que se le asignó es necesario aludir a tres factores determinantes. En primer lugar, se debe recordar el contexto de incertidumbre predominante en el azaroso período inmediatamente anterior al triunfo de Correa. En segundo lugar, cabe considerar el peso de algunos postulados de la izquierda tradicional, específicamente su interpretación de las libertades. Finalmente, es necesario recordar algunas características políticas personales de Rafael Correa y en particular la trayectoria que siguió hasta llegar a la presidencia de la República. Esos tres factores ayudan a comprender las causas por las que el correísmo convirtió a los medios en uno de los enemigos –acaso el principal- que debía ser enfrentado y derrotado por su revolución.

En cuanto al contexto social y político, es necesario aludir nuevamente a la desconfianza que había invadido el ánimo de las personas a partir de la traumática experiencia del período previo. La inestabilidad política, expresada en la caída de los tres gobiernos elegidos desde 1996, era un reflejo del deterioro de la situación económica y del agotamiento de las prácticas políticas desarrolladas por partidos y gobiernos. Entre 1980 y 2000, el producto interno bruto per cápita no creció y el clientelismo perdió su eficacia para garantizar la fidelidad de las redes que se beneficiaban de réditos inmediatos pero parciales y acotados a sectores específicos. Si América Latina lamenta hasta ahora su década pérdida, Ecuador lo hace por partida doble. Perdió dos décadas completas. Consecuencia inevitable fue el ya mencionado rechazo de la población a quienes habían gobernado, vale decir a los políticos y a los partidos. La consigna coreada en las calles *que se vayan todos*, no establecía diferencias entre partidos ni entre personas. Abarcándoles a todos, el rechazo se extendió a la política en general. Con ello, el quehacer político quedaba vacío de sujetos y de contenidos. Se perdía el factor aglutinante de la política, la capacidad de construir un orden integrador que pudiera ofrecer certidumbre.

Una de sus consecuencias, como ocurre siempre en esas situaciones, es la búsqueda de elementos integradores. Según lo plantean la sociología clásica y algunas corrientes de la

sicología, la pérdida de las pautas de convivencia –la anomia- tiene un primer momento en que se incentivan las actitudes individualistas. Es el *sálvese quien pueda*, el *estado de naturaleza* al que aludieron algunos autores clásicos. Pero, a partir de un determinado momento se va imponiendo el gregarismo, que da lugar a la persecución desesperada de un grupo de referencia. Es la búsqueda de puntos de afirmación. Son apoyos que las personas comunes y corrientes buscan en hechos concretos y en un relato que las ampare y las reagrupe. En las situaciones extremas se requiere de sucesos extraordinarios y dramáticos –guerras o revoluciones-, como lo testimonia la Rusia de 1917, la Italia de 1922 o la Alemania de 1932. Son momentos ideales para la incursión de líderes que recogen la frustración y la transforman en el relato que tiene un poder a la vez movilizador y enfervorizador. Movilizador contra el pasado que se rechaza y enfervorizador por el futuro que se anhela. Las palabras constitutivas de ese discurso se van interiorizando de manera inconsciente hasta que llegan a establecer lazos en torno a un proyecto único. Es una lucha en el nivel de las creencias, no en el de las ideas. Es la negación de estas últimas en pro de la adopción de afirmaciones que no pueden ser discutidas, porque ponerlas en duda podría llevar nuevamente a la situación que se quiere dejar atrás. Para ello, se hace imprescindible controlar la información, evitar la opinión. Es imprescindible eliminar o por lo menos neutralizar a los seres deliberativos.

Los postulados de la izquierda tradicional, aquella que nunca comprendió o no quiso comprender que el mundo había cambiado, encontraron un nicho adecuado en esa situación. Alimentada teóricamente por autores cuya obra envejeció mal, esa izquierda supuso que la frustración colectiva generaba las condiciones subjetivas para el inicio de un proceso revolucionario. Las condiciones objetivas estarían dadas de antemano por los niveles de pobreza y de desigualdad, de manera que el camino estaba prácticamente trazado. La revolución que encabezaba Correa –apellidada *ciudadana* para que algo huela a actualización- sería la materialización de aquella que no pudieron hacer cuando el mundo se dividía en dos bandos irreconciliables. El inmovilismo intelectual le impidió a esa izquierda comprender, aceptar y hacer suyos –como en efecto debían serlo por historia y por luchas sociales- los principios de libertad y tolerancia propios de la democracia. Mirando con los lentes del pasado, recuperó los fundamentos leninistas y estalinistas sobre el control de la opinión y apoyó las arremetidas en contra de todo lo que se asemejara a periodismo y a expresión autónoma. Muchos de sus integrantes, incluidos los que habían hecho carrera en los medios y los que se convirtieron en asiduos visitantes de estos en calidad de analistas, aplaudieron cada vez que Correa ejercía la práctica fascista de romper un periódico en público. Poco tiempo había sido necesario para que esos viejos militantes olvidaran que ese acto caracterizó en América Latina a las dictaduras que asesinaron y desparecieron a decenas de miles de sus coidearios. Nunca entendieron que el acto simbólico de romper un periódico encerraba la intención de borrar archivos de la memoria colectiva y dejar abierto el camino para el predominio del silencio. De ahí en adelante sería posible no solamente comenzar la historia, sino escribirla a la luz del futuro que intentaban construir.

La trayectoria de Rafael Correa, el tercer ingrediente de esa arremetida contra la opinión, empata, aunque solo de manera tangencial y episódica, con la posición de la izquierda. Sin pasado de militancia política y sin trayectoria pública, su ingreso en la escena pública fue exclusivamente una construcción mediática. Su presencia en radio y televisión, como uno de los múltiples invitados para analizar la economía nacional, fue la puerta de entrada. Adhirió a las posiciones de la izquierda en los temas económicos, pero no sucedió lo mismo en los demás aspectos, en que siempre mantuvo posiciones conservadoras. Sin embargo, muy tempranamente hizo suya la percepción, propia de la izquierda, que considera a los medios como expresión de la dominación de clase. El juego de palabras para calificarlos como defensores de la libertad de empresa y no de la libertad de prensa, convertido en muletilla a lo largo de su gobierno, provenía de los lejanos años setenta, cuando los estudios sobre el periodismo se concentraban en el accionariado y no en el contenido. De manera mecánica se deducía que este último dependía directamente de la propiedad de los medios, sin atender a criterios como la recepción por parte de la ciudadanía ni la credibilidad que se ponía diariamente en juego.

La adopción de esa visión maniquea de la izquierda, le permitía dar la batalla en el terreno de las creencias –y no de las ideas, hay que insistir- y a la vez le podía proporcionar réditos políticos inmediatos. A esto se suma la inevitable mirada que debe haber hecho a su propia trayectoria. Si él apenas requirió de una breve exposición en radio y televisión (con notable ausencia en la prensa escrita), no habría razón para que otros no utilizaran el mismo camino si esos medios permanecían en manos particulares. Era necesario controlarlos y asociar en las mentes a la prensa con valores negativos. Por esa vía, acudiendo a viejos mecanicismos que simplifican la realidad, asoció actividad empresarial con corrupción. El sustantivo y el adjetivo se fundieron en el nombre propio de *prensa corrupta* con el que bautizó al conjunto de medios. Una vez que logró degradarlos moralmente, pudo sumar apoyos para la arremetida en contra de ellos. El destrozo material de sus ejemplares en sus espectáculos sabatinos era poderosa metáfora de lo que paralelamente estaba perfeccionando por medio de leyes e instituciones construidas a la medida.

La opinión al banquillo

En la Constitución, dentro de la enumeración de un sinfín de derechos, aparecen las disposiciones que limitan y controlan la opinión. Camuflados, como si fueran algunos de esos derechos, cinco adjetivos califican a la información. Para ser reconocida como un derecho, se establece que esta debe ser "veraz, verificada, oportuna, contextualizada, plural". Cada una de estas características –que en realidad son condiciones o limitaciones- requiere de una fuerza coercitiva para concretarse. Alguna institución cargada de atribuciones y reglamentos debe garantizar su cumplimiento, lo que significa colocar una espada lista a ser descargada sobre quienes intercambian información. Esa espada sería innecesaria si se consignara el derecho de las personas no solamente a informar y a informarse, sino a emitir, recibir e intercambiar opiniones. El tratamiento reduccionista de la opinión como un tema exclusivamente de información, le sitúa a ese elemento

esencial e inseparable de la libertad ciudadana en un plano secundario y sometido a los controles.

No existe en todo el texto constitucional una sola línea que haga referencia a la libre opinión de las personas y mucho menos que la garantice aunque sea de manera indirecta. En una Constitución que se ha publicitado como un gran avance en derechos, no figura el derecho que, al ser la expresión del pensamiento, constituye la base para todos los demás. Esa ausencia no es casual. Se deriva de la concepción de la libertad que impregna a todo el aparataje jurídico construido en el correato. Responde a la idea del Estado protector que niega la ya mencionada noción –acuñada por Isaiah Berlin- de *libertad negativa*, entendida como la posibilidad de disfrutar de la libertad sin interferencias. Esta es consustancial a la democracia contemporánea y tiene a la libertad de pensamiento-opinión como el eje en torno al que giran los demás derechos. En la visión del Estado protector, por el contrario, prima la concepción de la *libertad positiva*, que supone que el individuo es libre únicamente cuando cuenta con los recursos necesarios para la autorrealización. El Estado pasa a ser el proveedor de esos recursos y, en esa condición, es el que determina el momento en que las personas están en capacidad de autorrealizarse y de disfrutar de su libertad. Mientras este proceso no concluya, la libertad estará sometida a restricciones. Cada derecho estará cargado de adjetivos. Testimonio extremo de los efectos de esa visión es lo que ocurrió bajo los regímenes que, a lo largo del siglo XX, hicieron de la igualdad y la libertad términos antagónicos y supeditaron esta última a la realización de la primera.

Con esa concepción, obviamente adaptada a los tiempos y a las condiciones, en el nuevo ordenamiento jurídico se definió a la información como un bien público y se estableció que "la comunicación social que se realiza a través de los medios de comunicación es un servicio público". Este fue uno de los temas que se situó en el centro del debate que antecedió a la aprobación de la Ley de Comunicación. Finalmente, se impuso ese criterio impreciso pero claramente autoritario y quedó abierta la posibilidad de múltiples interpretaciones acerca de las atribuciones y las limitaciones de los medios. Al determinar que la comunicación es un bien público y que los medios ofrecen un servicio público, estos pueden ser objeto de las sanciones que corresponden a las instituciones públicas o privadas que se encargan de esos servicios. De ahí en adelante, su contenido pasó a ser definido, directa o indirectamente, desde las instancias gubernamentales en nombre del interés público. Lo que publicaran los periódicos y lo que difundieran las estaciones de radio y de televisión estaría sujeto a lo que la autoridad considere que es el interés público. El margen para la orientación específica de cada medio se redujo al mínimo, con el objetivo de que en un momento no lejano desaparezca.

En la cúspide de la pirámide jurídica sobre este tema se encuentra la Ley de Comunicación. La importancia que se le otorgó a esta desde el inicio del gobierno se pone en evidencia en la primera disposición transitoria de la Constitución, que determina que debería ser aprobada en un plazo de trescientos sesenta días. Que solamente se la haya podido aprobar después de cinco años de expedida la Constitución, es una muestra de la resistencia que generaba. A pesar de contar con la mayoría absoluta en la Asamblea

Legislativa, el gobierno no pudo imponer unos criterios que iban claramente en sentido opuesto a derechos establecidos desde mucho tiempo atrás en el país y que contradicen explícitamente los convenios y tratados internacionales sobre derechos humanos y libertad de opinión de los que es signatario Ecuador. Siguiendo la orientación marcada por la Constitución, las disposiciones contenidas en la ley tienen como fin la regulación de los medios y el control de la opinión.

Dentro de esa ley, a última hora y sin el debate de primera instancia que establece el procedimiento legislativo, se incluyó la creación de la Superintendencia de Comunicación. Como se desprende de su nombre y siguiendo con la orientación controladora, fue constituida como una institución encargada de la vigilancia a los medios y de establecer restricciones a la libre información de la ciudadanía. Sus funciones y atribuciones la sitúan en el núcleo central de un complejo entramado institucional, diseñado para el control y la regulación del contenido de la información proporcionada por los medios. Pasando por encima de principios jurídicos básicos, al titular de esta entidad se le atribuyó la potestad de investigar, acusar, procesar, sancionar y resolver en apelación los casos que instaura en contra de los medios. En términos coloquiales, pasaba a ser juez y parte. Es también instancia de apelación de sus propias resoluciones. En síntesis, se constituyó una oficina encargada de la censura, que incluso en ocasiones llegó hasta las redes sociales, a pesar de que sus atribuciones no se lo permiten.

Son muchas las similitudes que tiene esta legislación y en particular la figura de la Superintendencia, con la Ley 14/1966 de Prensa e Imprenta expedida por la dictadura de Franco en España. A mediados de la década de los sesenta, Manuel Fraga, como ministro de Turismo e Información, quiso hacer un guiño a Europa. De allí debía venir el turismo, pero previamente era necesario lavar la cara de uno de los últimos regímenes autoritarios que, afuera de la órbita soviética, quedaban en ese continente. El agua y el jabón para ese lavado debía ser esa ley de prensa e imprenta. Sus impulsores sabían que la apertura resultaba falsa por las condiciones que se ponían a la información y porque nada cambiaba en realidad, pero confiaban en su efectividad porque de todas maneras mostraba un gesto de cambio, por minúsculo que fuera, en el régimen autoritario.

Ciertamente, las limitaciones y restricciones de la ley franquista rebasaban a las que cinco décadas después se establecieron en la ley del correato, pero no en la medida necesaria y suficiente para hacer perder la similitud en el objetivo central. En ambos casos el interés era mantener el control de los medios, de la información y de la opinión, bajo un cuerpo legal que presenta a las limitaciones como parte de los derechos. La ley franquista pretendía implantar el disfraz de un elemento propio del Estado de derecho en un organismo ajeno. La ley correísta también intentaba un trasplante, aunque en sentido contrario. Insertaba un componente propio de un régimen autoritario en el ordenamiento que se presentaba como democrático, que con ello perdía una parte muy importante de ese carácter. En el primer caso se buscaba revestir con ropaje digno a un cuerpo cuya desnudez resultaba impresentable. En el segundo, el ropaje más bien lo desnudó y lo presentó de cuerpo entero.

La Superintendencia fue concebida como un órgano de censura. Hasta febrero de 2018 impulsó 817 procesos, con aplicación de multas que en varios casos produjeron la quiebra de medios. Para muchos de esos procesos se utilizó un artículo de la ley que fue adulterado por la misma superintendencia, en un acto que nunca fue observado por la Corte Constitucional ni por la Asamblea Legislativa o por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. El temor se generalizó entre los medios. La autocensura impuesta a los medios se constituyó en el resultado más exitoso de la ley y en particular de la superintendencia. Sin necesidad de intervenirlos directamente, habían logrado penetrar en la línea noticiosa y editorial de los medios. La existencia de esa ley y la manera en que se la aplicó fue uno de los factores fundamentales –junto a la manipulación de la justicia, el manejo dudoso de las elecciones y la criminalización de la protesta social- para la caída de Ecuador en todas las mediciones de calidad de la democracia.

El contenido punitivo de las disposiciones constitucionales y legales, la amplitud del campo que abarcan, su imprecisión conceptual y, sobre todo, la apropiación de la definición del interés público, abrieron la puerta al absurdo. En episodios dignos de *El proceso* kafkiano, los medios fueron juzgados no solamente por lo que habían publicado, sino por lo que habían dejado de publicar. Un alcalde logró que se sancione a un medio que no cubrió un acto rutinario de su gestión. Varios periódicos fueron encausados por no reproducir un artículo publicado en un diario argentino, que contenía denuncias en contra del candidato opositor en la elección presidencial de 2017. En ambos casos sirvió como argumento jurídico el derecho de las personas a recibir información y la obligación de los medios, como encargados de un servicio público, de proporcionársela. Se cumplía la advertencia de Erasmo de Rotterdam: “Hay tiempos en que callar o hablar es igualmente riesgoso”. Así, la línea informativa y editorial de los medios podía ser impuesta por una autoridad que actuaba en nombre del interés general (un interés que solamente puede ser leído e interpretado por las mentes lúcidas que conocen las leyes de la historia). Un objetivo muy racional al que se llega por los vericuetos del absurdo y que, de haberse aplicado sin sesgos a los medios gubernamentales, habría producido el quiebre de estos, que hicieron de la restricción noticiosa y de la exclusión editorial su línea periodística.

Si bien la Ley de Comunicación fue muy útil para agilizar los procesos en contra de los medios de comunicación, no quiere decir que antes de su promulgación hubieran existido condiciones adecuadas para la actividad periodística y en general para la libre expresión. Viejas disposiciones del Código Penal, muchas de ellas expresamente derogadas por la vigencia de la propia constitución de 2008, fueron utilizados por el gobierno para instaurar juicios. El más sonado de estos fue el que Rafael Correa, como ciudadano y no como presidente, impulsó en contra del diario El Universo en marzo de 2011. La causa era un artículo de opinión escrito por el columnista Emilio Palacio, que Correa consideraba que el periódico debió negarse a publicar. Por tanto, reclamaba porque el medio no había aplicado la censura previa, expresamente prohibida en las disposiciones legales y en los instrumentos internacionales. El artículo anticipaba la posibilidad de una

acusación en contra de Correa por delito de lesa humanidad, debido a que él dio la orden de atacar al hospital de la Policía en que se hallaba refugiado durante la revuelta policial del 30 de septiembre de 2010. Palacio no lo acusaba de ese delito, solamente advertía que alguien podría hacerlo.

La demanda era por ochenta millones de dólares, una cantidad que, además de engrosar el patrimonio de Correa –como ya lo hizo al inicio de su gobierno con un juicio ganado a un banco del que obtuvo el dinero suficiente para comprar un departamento en Bélgica-, habría causado la quiebra del periódico. El caso fue llevado de una manera que, incluso para los cánones que ya se habían establecido en el sistema judicial, resultaba demasiado burda. Una sentencia de más de doscientas páginas elaborada en una noche (casualmente en las mismas horas en que se introdujo un dispositivo de almacenamiento, conocido como Chucky Seven, en el computador del juez), utilización de pruebas inexistentes, amenazas a una juez, prevaricación en la interpretación de las leyes, entre otras irregularidades, además del objeto mismo de la demanda, generaron el rechazo nacional e internacional. El demandante se vio forzado a otorgar el perdón, eso sí una vez que obtuvo sentencia favorable con una reparación de cuarenta millones de dólares por su honor mancillado.

En cadena nacional de radio y televisión, con transmisión al inglés y al francés (no al quichua o a alguna otra lengua nativa), desde el palacio presidencial, con presencia del cuerpo diplomático, de su gabinete ministerial, de autoridades de las otras funciones del Estado y de corresponsales de las agencias internacionales, anunció el perdón. Lo hizo como presidente de la República y no como el ciudadano que había iniciado el juicio. El ciudadano demanda, el presidente triunfa y perdona. El ciudadano es víctima, el presidente es justiciero y magnánimo. Una indiferenciación de roles que legitimó el juez cuando calculó la indemnización sobre el presupuesto del Estado y no sobre el sueldo o los bienes del demandante, mucho menos del demandado. La misma confusión de personalidades que apareció en toda su magnitud en el discurso del perdón, leído y repartido a todos los asistentes. Allí (con una gramática de colegial poco aprovechado) colocó como la primera víctima de la “dictadura mediática” a un “joven estudiante, Presidente de las Universidades Particulares del Ecuador, al cual en el año 1986 le prohibieron hasta la entrada a El Universo”. Casi un cuarto de siglo después, el estudiante, con la fuerza de presidente, cobraba venganza de un hecho que nunca ocurrió, pero que guardó en su imaginación hasta que llegara la ocasión para la venganza.

La arremetida en contra de los medios particulares fue complementada por la conformación de un holding de radio, televisión y periódicos gubernamentales. Parapetados bajo la engañosa denominación de medios públicos, estos actuaron como instrumentos de propaganda del gobierno que, en estricto sentido, significa de Rafael Correa. No solo la línea editorial, sino sobre todo la informativa reflejaron las posiciones establecidas por el presidente de la República. Nunca contaron con directorios y comités editoriales pluralistas que garantizaran el acceso de otras visiones y, sobre todo, que seleccionaran la noticia en función de su importancia y del interés ciudadano, como sus

propias leyes disponían. Por primera vez en la historia contemporánea del país, el presidente tenía a su disposición un aparato multimedia que a lo largo de todo el día emitía sus mensajes y consignas, mientras denigraba a quienes adoptaban posiciones críticas.

Para sobrevivir los medios privados y comunitarios debieron acudir a diversas estrategias. Ninguna de ellas podía calificarse como óptima, ya que no garantizaban la independencia necesaria para el periodismo y apenas permitían asegurar la permanencia. Como lo dijeron tempranamente varios periodistas y propietarios de medios, en el mejor de los casos solamente eran artificios para capear el temporal. La fuerza desplegada por el gobierno determinó que los medios evitaran el enfrentamiento directo y más bien se acogieron a tácticas defensivas. El despido de periodistas –siempre los más capaces y con alta incidencia sobre la audiencia- y la aceptación de los límites impuestos se contaron entre las más usuales. En las escasas ocasiones que decidieron litigar comprobaron la inutilidad de entrar en la arena de una justicia tan atemorizada como ellos y por consiguiente parcializada. La alternativa heroica, la resistencia, significó la muerte de por lo menos dos medios. El diario Hoy y la revista Vanguardia cerraron cuando sus páginas se quedaron sin publicidad. Bastó que el gobierno no pautara más en ellos y que a la vez ejerciera presión sobre los empresarios para que los efectos fueran catastróficos. Al final de su mandato, Rafael Correa se ufanaba de no haber cerrado un solo medio de comunicación. Es cierto, no lo hizo él directamente. Más eficiente y menos burdo era hacerlo por medio del aparato creado para el control y por la asfixia económica.

La presión sobre la pauta publicitaria no fue el único componente del cerco económico a los medios. Un instrumento eficaz fue la prohibición para que los accionistas que cuentan con más del 6% del capital participen en otras actividades económicas. Se supone que con ello se evita que intereses oligopólicos controlen la comunicación. Ciertamente, una ingenuidad en un mundo de alta complejidad económica, pero muy eficaz en el objetivo de debilitar a los medios. Los desafíos de desarrollo profesional y avance tecnológico se reducen significativamente y quedan supeditados a factores externos. La subvención estatal, de manera directa o por múltiples formas indirectas, puede ser la solución que muchos de ellos deban aceptar para sobrevivir. La prohibición de difundir piezas publicitarias producidas fuera del país apunta también al debilitamiento económico al no contemplar los efectos positivos de economías de escala (y, de paso, favoreció a las empresas de dos ministros que manejaron toda la publicidad estatal y, con presiones de por medio, buena parte de la privada). Las multas desmedidas se añaden al cerco económico.

Más allá de leyes y reglamentos, Rafael Correa delineó claramente ese camino. El tratamiento de *prensa corrupta* para el conjunto de medios y de *sicarios de tinta* a los periodistas, encerraba su visión de fondo al respecto. Siempre fue claro en describir su modelo ideal, de unos medios controlados, encargados exclusivamente de difundir el pensamiento único. Los calificativos mencionados, la introducción del *linchamiento mediático* como un tipo de delito en la Ley de Comunicación, la ruptura de ejemplares de periódicos en sus actos sabatinos, la persecución a periodistas –incluidos juicios en los

que buscaba indemnizaciones millonarias-, la conformación de un ejército de *trolls* y el montaje de redes y sofisticados equipos de espionaje, expresaban con fidelidad su idea acerca de la información y la comunicación. En una memorable declaración hecha durante una visita a Cuba, manifestó su admiración por la libertad de prensa lograda en ese país, atribuyéndola a la existencia de periódicos serios y objetivos. Se refirió explícitamente a dos medios del Partido Comunista –*el* partido, el único, el que tiene la clave de las leyes de la historia- *Juventud Rebelde* y *Granma* (*Abuelita*, en su traducción al español, nombre muy apropiado para un periódico revolucionario). Ratificó esa visión ya como expresidente, en su función de entrevistador en el canal *Rusia Today*, constituido y sostenido por Putin, en diálogo con el español Pablo Iglesias, cuando acudió a otra de las frases que había repetido innumerables veces y que, para mantener la línea ideológica, la atribuyó a Raúl Castro: "desde que se inventó la imprenta, la libertad de prensa no es otra cosa que la voluntad del dueño de la imprenta". Si la información es un derecho ciudadano y un servicio público –razonaba en un ejercicio deductivo admirable-, "es contradictorio que sea suministrado por empresas con fines de lucro, porque por definición va a prevalecer este último". En un simulacro de entrevista con uno de sus seguidores más fieles, reinterpretó a un Marx que jamás había leído: "el nuevo opio de nuestros pueblos se llama prensa mercantil". Kafkianas, macondianas o marxistas de la línea Groucho, ahí están las declaraciones.

El 30s: hallazgo e invención del enemigo

Quienes buscaban al enemigo necesario tuvieron su momento de fortuna el 30 de septiembre de 2010. Ese día, por casualidad, Rafael Correa encontró a las personas, seres realmente existentes, que encarnaban el monstruo que había venido moldeando en su imaginación por más de cuatro años. Desde los primeros días de su candidatura presidencial, advirtió acerca de las amenazas que se cernían sobre su revolución. Todavía poco conocedor de los procesos vividos en América Latina –a lo largo de su presidencia se iría enterando de unos pocos hechos claves de la izquierda continental-, no ponía nombres y apellidos a los peligros. Eran enemigos abstractos, casi fantasmagóricos. El imperialismo y la partidocracia fueron los objetos más concretos que pudo identificar. Para ese momento no hacía falta más. Un sueño puede ser amenazado por ruidos reales o por pesadillas absurdas. El efecto es el mismo. Si hay un enemigo externo, habrá excelente motivo para mantener la unidad y el espíritu combativo en el interior. Como en la novela de Coetzee, hay que levantar fortalezas, acopiar provisiones castigar anticipadamente a los que no colaboran o son indiferentes, porque están por llegar unos bárbaros a quienes nadie ha visto nunca. Y nunca los verá.

Ese 30 de septiembre aparecieron los bárbaros. Según describió el entonces ministro de Gobierno –y más adelante presidente del Consejo de la Judicatura-, cuando se disponía a salir de su casa en la mañana le informaron telefónicamente que había una protesta policial en el principal cuartel de Quito. No era la primera ocasión que algo así ocurría en el país y tampoco era un hecho desconocido en América Latina. Los cuerpos policiales han recurrido frecuentemente a esas medidas de hecho cuando han considerado que se

han violado sus derechos. Era un problema que debía ser atendido y resuelto por el ministro. Antes de hacerlo, antes de dirigirse al cuartel –o de convocar a los jefes policiales a su oficina para tratarlo como un problema administrativo, que habría sido lo pertinente-, le informó al presidente. Seguramente obedeció a la norma, implantada desde el inicio del gobierno, de la verticalidad y singularidad del mando. Lo cierto es que esa llamada dio inicio a la sucesión de hechos que pasaron a la historia como una sigla. Había nacido el 30S.

La insubordinación policial se originó en una media verdad. Días antes, el gobierno envió una ley que buscaba estandarizar la administración pública, especialmente en términos salariales y de escalas jerárquicas. En lo referido a policías y militares, a cambio de incrementos de sueldos se eliminaban las condecoraciones y los reconocimientos vinculados a los grados. La importancia simbólica de esas distinciones hacía inevitable que en esos ámbitos se diera más importancia a los aspectos negativos. Cuerpos que valoran en fuerte grado los símbolos y tienen a lo ritual como materia aglutinadora e incluso como elemento constitutivo, difícilmente podían reaccionar de otra manera. El gobierno podía dar todas las explicaciones que hicieran falta, pero chocaba con una realidad inmaterial mucho más fuerte que los argumentos técnicos que explicaban las ventajas materiales.

Que una medalla en el pecho tiene un valor social imposible de obtener con un salario más alto, fue algo que sí entendieron algunos asambleístas de Alianza País. El día anterior dieron a conocer su discrepancia sobre esa parte de la ley e insinuaron un posible voto en contra en esos artículos. Era la primera ocasión en que podía romperse la unanimidad del bloque parlamentario. La reacción gubernamental fue inmediata. Una de las ministras de la política dejó abierta la posibilidad de la disolución de la Asamblea por parte del presidente, con la aplicación de la que, en términos que gustan al espíritu guerrero, pasó a llamarse la *muerte cruzada*. Era miércoles cuando la funcionaria señaló el siguiente lunes como el día escogido para tomar esa medida. En caso de aplicarse, a Correa le habría permitido gobernar, durante un tiempo indeterminado, con poderes legislativos y sin esos compañeros que comenzaban a resultar incómodos. La discrepancia interna debía ser ahogada drásticamente, aunque eso supusiera transformarla en un enfrentamiento entre poderes del Estado. Debía sentarse un precedente. Esta tenía que ser la última veleidad de sus legisladores.

En efecto, así fue, pero no por causa de la muerte cruzada. Debido a los sucesos del jueves 30, la bancada legislativa volvió al orden y el lunes se presentó nuevamente unida. Nunca más hubo fisuras ni opiniones individuales. Correa no tuvo necesidad de acudir a medidas traumáticas. La obediencia en sus filas estaba asegurada y así permaneció por los siguientes seis años y medio. Fue uno de los efectos inmediatos y de mayor significación del 30S. Aunque la misma ministra de la advertencia de la muerte cruzada y el ministro coordinador de seguridad interna y externa, sostuvieron ese día que no había intento de golpe y que el presidente no se encontraba retenido ni secuestrado, el relato ya les había puesto cuerpo, nombre y capacidad operativa a los bárbaros.

La llamada del ministro fue el detonante que determinó la presencia de Rafael Correa en medio de la asonada policial. Desde el momento en que el presidente puso un pie en el cuartel, el conflicto se colocó en la cúspide del poder político nacional. Aunque él no hubiera dicho una sola palabra ni hubiera tenido un solo gesto, el mensaje era demasiado evidente y no podía pasar inadvertido para los policías. Su presencia ahí quería decir que el conflicto, cualquiera que este hubiera sido, se situaba en el plano político y, claramente, en su punto más alto. Ahí terminó lo que comenzó como una reivindicación corporativa. Por encima de ese vértice no queda una instancia a la que se pueda apelar o que pueda intervenir para desactivar el problema. A los policías les quedaba la opción de declinar su protesta o mantenerla con el inevitable escalamiento de sus demandas, como ocurre siempre en esos casos. La experiencia enseña –y las disciplinas que estudian las conductas sociales lo comprueban- que una vez encendida una acción colectiva de tintes violentos, entra en actividad un mecanismo de retroalimentación. Toda medida tomada para enfrentarlo en su propio campo y con los mismos procedimientos es combustible para la acción. Para enfrentar a esa disrupción de la sicología colectiva es necesaria una sicología individual con capacidad para comprender que la decisión óptima es eludir el conflicto. Es indudable que, en situaciones de este tipo, una sola persona piensa con mayor frialdad y racionalidad que el conjunto afiebrado. Si es que se detiene a pensar, obviamente.

Sin esa reflexión pausada, sin el cálculo estratégico necesario, el presidente entró en el terreno menos favorable para él. La velocidad de los hechos y en especial lo inesperado de su decisión, impidieron que se activaran los procedimientos establecidos para garantizar su seguridad. Que estuvo en riesgo su integridad física –ya menoscabada por una reciente operación en una rodilla- e incluso su vida, es muy cierto. Tan cierto como lo puede comprobar cualquier persona que se adentra con la camiseta de su equipo en la barra contraria en medio de la euforia por un penal discutible. Inicialmente su escolta logró sacarle de esa situación, pero él obligó a que su caravana retorne. Lo que debió ser prudencia presidencial constituía cobardía para el vengador *boy scout*.

Fue ahí cuando se produjo el episodio del aflojamiento de la corbata. Había amagado hacerlo tres o cuatro veces en esa mañana. Seguramente era la manera de enviar el mensaje del torso desnudo que está dispuesto a recibir las balas. "Si quieren matar al presidente, aquí está, mátenlo si les da la gana y valor, en vez de estar en la muchedumbre cobardemente escondidos". Fue un desafío temerario. Si la respuesta hubiera ido más allá de los gritos de los policías, el país habría enfrentado una situación aún más grave que la que vivió veintitrés años antes con el secuestro de León Febres Cordero en un cuartel militar. La foto ocupó la primera plana de gran parte de los periódicos del mundo. Muchos de ellos la acompañaron de otra, en que una máscara antigases ladeada, descolocada, le hacía poco favor al dramatismo de la situación. Esa noche, un eufórico presidente ofreció su versión de los hechos a quienes se habían reunido al pie del balcón presidencial. Puso el énfasis en el delgado hilo que lo separó de la muerte, pero sobre todo subrayó su decisión de entregar la vida por su patria. “Antes muerto que perder la vida” fue la frase que dijo esa noche y repitió muchas veces en los siguientes días. Seguramente, cuando la

oyó por primera vez, en sus años infantiles o quizás juveniles, no captó la ironía con que la había acuñado el Chavo del Ocho, el cómico mexicano de gran audiencia en aquel tiempo. Y así se le quedó grabada, sin entender el sarcasmo del mexicano. La repitió con toda la seriedad del caso.

Habiendo roto los puentes de la retirada –que, según el poeta ruso, es lo que corresponde a un buen revolucionario-, el único refugio posible que quedaba era el hospital de la misma policía, a pocos metros del cuartel. Hasta allí llegó Rafael Correa. Sus asistentes debieron forcejear con el candado oxidado de una puerta sin uso frecuente. Desde el hospital dio declaraciones, concedió entrevistas, recibió a ministros de su gabinete y firmó el decreto que ordenaba a los militares que lo sacaran. A la una de la tarde fue entrevistado por la Radio Pública, de propiedad del gobierno y convertida desde el inicio de los disturbios en la cabeza de una cadena obligatoria de emisoras de radio y televisión. En su declaración afirmó que el hospital estaba rodeado y que no permitían la entrada de otras personas. No hizo referencia a alguien o algún grupo que lo hubiera obligado a entrar allí. No mencionó la palabra secuestro. Fue poco después de eso que sus ministros negaron que hubiera golpe o secuestro.

La insubordinación se extendió a otras unidades policiales y dos grupos pequeños de militares se plegaron por breves minutos a la protesta. El canciller, que siempre mantuvo fuerte protagonismo en la política interna, convocó a los partidarios del gobierno a movilizarse. La respuesta no estuvo en proporción con el enorme apoyo que el presidente obtuvo en las elecciones del año anterior ni con el que mostraban mes a mes las encuestas. Las bancadas de oposición se perdieron en la confusión y no faltó entre ellas alguien que buscara aprovechar la situación para deshacerse de Correa. No hubo un pronunciamiento claro de defensa de la democracia. El pedido de amnistía para los policías demostraba la limitación de miras. Como había sucedido en crisis políticas anteriores, se impusieron los cálculos de corto plazo y la deslealtad con la democracia. Era el mejor insumo para que desde el otro lado se alimentara la teoría del golpe, que comenzó a tomar forma esa noche, cuando el presidente dio su discurso desde el palacio de gobierno.

La orden presidencial de acudir en su rescate fue obedecida por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas liderado por el ministro de Defensa. Se puede suponer que contemplaron todas las alternativas posibles, pero no han entregado evidencia que sostenga que la utilizada era la más apropiada. En el operativo hubo cinco muertos. Lo vieron cientos de miles de personas que seguían la transmisión en vivo por la televisión estatal y por los canales privados que estaban obligados a enlazarse. Temas sensibles de derechos humanos, como la obediencia debida de los militares y la incursión armada en un hospital, quedaron pendientes de resolución judicial. En ese aspecto, a diferencias del político, el 30S no es un caso cerrado.

El relato construido posteriormente lo convirtió en un punto de quiebre, un hito revolucionario. Fue motivo de celebración con canciones y bailes en cada aniversario y sirvió sobre todo para el reagrupamiento de sus fuerzas. A más de los juicios a los policías

directamente involucrados y de otras personas que finalmente demostraron su inocencia, nunca se presentaron pruebas que permitieran calificarlo como golpe. Los organismos de inteligencia desconocían la preparación de un hecho en que, según la construcción posterior, estaban involucrados partidos políticos, movimientos sociales y gobiernos extranjeros. Sería muy extraño para la historia nacional, tan rica en golpes de Estado, uno que sea protagonizado por la tropa policial, que no cuente con un líder o un grupo conductor, y que no tenga más proclamas que las referidas a las reivindicaciones salariales y más consignas que los insultos al presidente. Un golpe que incluyó un secuestro en el que se alteró el orden natural de este tipo de eventos, que consiste en impedir la salida de una persona, mientras en este, en palabras del secuestrado, un oficial al que identificó como autor "puso candado para no dejarnos entrar".

El relato se mantuvo. El enemigo había sido identificado. Hubo los muertos que, según el canciller de ese momento, siempre deben tener las revoluciones. Quedó en evidencia que ese enemigo, seguramente con otro nombre y otra apariencia, podía reaparecer en cualquier momento. El 30S, su relato, serviría de ahí en adelante para mantener al país en alerta. No se podía perder la oportunidad que se presentó ese jueves de septiembre para construir la imagen de una revolución amenazada por fuerzas reaccionarias. Era imprescindible cerrarle el paso a lo que, de ahí en adelante y retomando la frase utilizada en Argentina, se llamaría la *restauración conservadora*. Todo ello había que pregonarlo incansablemente para que se fijara en la mente de cada habitante de la patria amenazada. Así se lo hizo. Habían aparecido los bárbaros de Coetzee. O, quizás, no era más que el lobo de Pedrito, el niño del cuento, que lo anunciaba para reírse a carcajadas de los vecinos del pueblo.

La apropiación del relato

"En una fortaleza asediada cualquier disidencia es traición", repitió múltiples veces Rafael Correa. La frase, atribuida a Ignacio de Loyola, había sido esgrimida también reiteradamente por Fidel Castro, otro líder formado en la ortodoxia religiosa. El dictador cubano la utilizó para justificar con ella el silenciamiento de cualquier posición crítica, por insignificante que esta fuera. La condición de isla, sin vecinos inmediatos, hacía muy fácil la conversión de Cuba en una ciudadela, con el mar como foso natural. El irracional bloqueo norteamericano ponía su parte para dar credibilidad a esa metáfora que servía no solamente para acallar todas las voces autónomas y críticas, sino sobre todo para dividir a la población en dos bandos irreconciliables y situados en territorios delimitados. *Compañeros*, dentro de la fortaleza, *gusanos*, fuera de ella. Quienes no quieren pasar al territorio de extramuros, saben que su silencio es el único derecho del que pueden disfrutar. Difícilmente se podía esperar otra cosa de una revolución enfundada en uniforme militar, encerrada en la disyuntiva de la patria o la muerte.

Rafael Correa trasladó esa y otras frases a la que él consideraba su revolución. Al calificarla como ciudadana y al provenir de elecciones libres, propias de la vilipendiada democracia, descartó el uniforme corporal, pero adoptó el mental. El peligro del enemigo

acechante debía martillar desde adentro la cabeza de cada una de las personas que vivían en ese país que pasaba a ser una fortaleza. Una isla en un mundo hostil. La imagen era ideal para instalar la concepción amigo-enemigo, tan enraizada en él. Desde su formación más temprana, como catequista y como *boy scout*, estuvo tan presente que no era necesario que alguien le hiciera saber que, aparte de Loyola, hubo un Carl Shmitt que, con esa idea como núcleo, le dio a Hitler el sustento teórico para fanatizar a todo un pueblo y aniquilar a otro. Esa corta frase –menos de una decena de palabras- era suficiente para enlazar la visión dicotómica de origen religioso, que labró a lo largo de años, con la epopeya a la que convocaba desde su función de político.

El burdo correazo que anunciaba en la campaña había encontrado un sustituto más presentable en la metáfora de aquel religioso que, en su momento, se convirtió en adalid de la cruzada contra la reforma protestante. El relato glorioso necesitaba de esa ciudadela sitiada para anidar en la cabeza colectiva. La alusión a la patria amenazada podía traer reminiscencias del fascismo y también del leninismo-estalinismo. No importa de cuál de ellos amamantara, si en el ensalzamiento a los reaccionarios valores del nacionalismo ambos siempre fueron gemelos, enfrentados únicamente por imponer su marca en el totalitarismo que construían. La patria –no la sociedad, no el pueblo, no la comunidad- fue el ente abstracto que debía ser glorificado. El relato glorioso debía ensalzar a esa construcción imaginada y nada mejor que el llamado a salvarla para lograr el enrolamiento, si no de la totalidad, por lo menos de la mayoría. Ciertamente, lo logró. Los triunfos conseguidos en sucesivas elecciones y el apoyo reflejado en las cifras de los sondeos de opinión lo certifican. Sin que se deje de lado el auge económico –en el que no tuvo nada que ver su gestión gubernamental- como factor decisivo de ese apoyo, es preciso reconocer que el discurso patriotero caló hondo en una sociedad huérfana de valores compartidos.

El derrame de los recursos gratuitamente producido por el mayor auge económico de la historia nacional, proporcionó el sustento material a ese discurso, pero no es suficiente para explicar su efectividad. El mensaje apuntaba a lo profundo de esa sociedad que siempre encontró más factores de separación que rasgos de identidad. Fraccionada regionalmente, fragmentada socialmente, diferenciada étnicamente, pero obligada a vivir conjuntamente, estaba dispuesta a oír un discurso que le ofreciera la corporeidad que nunca tuvo. La patria, ese ente abstracto que, como diría un historiador, ampara a una *comunidad imaginada*, logró instalarse en la cabeza de la mayoría.

En el centro, como actor y factor único, se situaba el emisor de ese discurso, el generador del milagro. Así lo concibió él y le creyó la gran parte de esa sociedad que lo reeligió y lo apoyó ciegamente. Para que todas esas personas le creyeran, debía antes que nadie creerlo él mismo. Contrató a publicistas y académicos militantes para eternizar en un museo el antes y el después en la trayectoria de esa patria. La prehistoria y la Historia. Esta última, con mayúscula, comenzaba con él. Todo lo anterior eran traspiés de un niño que no llegaba a caminar o, en el mejor de los casos, irresoluciones de un adolescente que no entendía lo que le sucedía. Así quedarían, como testimonios indelebles en el Palacio

de Carondelet, sus fotos, su único libro –publicado ya en su condición de presidente-, sus incontables intervenciones públicas, sus premios, sus doctorados honoris causa. Sus palabras. Su palabra, la única. “Sé bien que yo ya no soy yo, soy todo un pueblo”, dijo rotundamente el 1 de mayo de 2015 y –para que no se vaya a pensar que fue un lapsus- lo repitió el 20 de septiembre de 2016. Nadie mejor que él, autor y actor del relato, para hacer ese reconocimiento. Alguien quiso interpretar psicoanalíticamente esa frase, pero era inútil e innecesario hacerlo, simplemente expresaba el contenido exacto de esa revolución.

Pero, el discurso encontraba un tropiezo para materializarse y sobre todo para permanecer en el tiempo. Un tropiezo que lo ponía el mismo emisor. En el momento de pronunciarlo, se encargaba de que perdiera el contenido general e integrador. La patria a la que invocaba no era de todos, a contracorriente de la hábil publicidad, pilar central del gobierno, que repetía incansablemente. “La patria ya es de todos” clamaba el eslogan con que se abrían y cerraban los enlaces diarios de emisoras radiales. El adverbio, ese *ya*, esa simple palabra de dos letras, establecía la diferencia entre la historia y la prehistoria. Pero, en sus propias palabras, la patria no era el todo ni era de todos, era de un grupo, de una porción de esa sociedad, de quienes sumaban una pasajera mayoría electoral. “Somos más, muchos más” proclamó todos los sábados de esos diez años y cada vez que pretendía silenciar a sus críticos con la fuerza del número. Tampoco era la patria de la gente común y corriente, era de quienes reverenciaban *Patria*, la canción militarista de los años cuarenta desempolvada no solamente para sus actos oficiales como presidente, sino para los de carácter partidario. La patria era solamente esa parte que cabía en su organización política desde que la colocó como primera palabra en su inscripción oficial, Patria Altiva y Soberana. El nacionalismo no tenía una nación en la base.

Sociólogos, antropólogos e historiadores que han buceado profundamente en los laberintos del nacionalismo coinciden en que este no es exactamente el producto de las condiciones propias de las sociedades. Tradiciones, cultura, etnia, religión, lengua pueden explicar la convivencia de un grupo humano. Pero, para que estas –o una parte de ellas- se conviertan en sentimiento nacional requieren de una fuerza que las impulse a ello. En la modernidad, el Estado es esa fuerza encargada de crear aquello que, en acertada denominación Benedict Andreson denomina *comunidades imaginadas*. Épica, mitos, monumentos, relato, deben confluir para crear esa idea que, finalmente, se convertirá en sentimiento compartido. Sabiéndolo o no, las decenas de caudillos que en Ecuador han florecido, intentaron seguir ese camino. Cada uno en su momento quiso construir o refundar la nación. Rocafuerte, García Moreno, Alfaro, Velasco Ibarra, los militares en muchos momentos y, por supuesto, Correa. Unos con la Biblia y el Corazón de Jesús, otros con la Ilustración, el último con la Teología de la Liberación y un guevarismo de guitarreo. Cada uno con *su* propia idea de nación. Ninguno con la idea integradora del ciudadano libre. Todos fracasaron. No podía ser de otra manera. Convirtiendo a críticos y opositores en enemigos, excluyéndolos explícitamente, era imposible que pudieran construir la ruta por la que todos caminaran en una misma dirección. El relato de la nación no puede ser el relato político de una parte de ella, aunque momentáneamente los de esa

parte sean más, *muchos más*, como se encargaba de recordar constantemente en sus discursos. Termina convertida en el relato –una vez más en la historia nacional- de una utopía reaccionaria.

SILVESTRE

11 de octubre de 2010

Él no sabe que la guerra terminó. No sabe o no quiere saber que el Muro cayó hace mucho tiempo y que sólo quedaron los escombros de la guerra fría. Él no sabe ni quiere saber que los suyos fueron derrotados. No quiere ni oír sobre esas cosas. Sabe –y lo sabe perfectamente- que si pusiera oídos a esas palabras podría caer en el pesimismo de los otros. No puede darse el lujo de ser indiferente, porque eso le llevaría al mismo derrotismo que invade a los demás. No puede seguir ese camino porque únicamente conduce al diálogo y de ahí directamente al pacto con los enemigos. Entonces, aunque están en sus mismas filas y le siguen con los ojos cerrados, él ve con desprecio a todos quienes dependen de él y solamente de él. Él está allí para salvarles, y ninguno de ellos tiene la autoridad moral –y la mayoría ni siquiera la sinceridad, menos la valentía- para decirle que no siga, que no vaya a ese sitio, que se detenga a pensar unos instantes.

Sabe con toda certeza que tiene una misión en el mundo. Ha decidido cumplirla hasta las últimas consecuencias. Si tiene que enfrentarse a decenas, a cientos e incluso a miles de uniformados hostiles lo hará el sólo, porque su destino está trazado. Como en las tragedias griegas, la suerte está echada, lo único que hace falta es la voluntad para acatarla e impulsarla para que el final llegue sin distorsiones. No puede dejar en manos de los dioses lo que puede hacer con la fuerza inquebrantable de su decisión. Al fin y al cabo, lo más que puede ocurrirle es la muerte. Una verdadera insignificancia si se considera toda la responsabilidad que lleva a cuestas por designio divino. Además, ya lo dijo el filósofo mexicano, más vale muerto que perder la vida.

Por ello, en cada una de sus acciones hay una invocación a la muerte. Permanentemente la invita a bailar con él. Declara que tal o cual sitio es bueno para morir si es que hay una causa noble, y la suya sin duda lo es. Nada más noble que luchar y morir por unos ideales que están grabados con hierro ardiente en la puerta de la Historia (así, con mayúscula). Claro que antes de que llegue su muerte pueden producirse las de otros, muchos otros, de este lado o del enemigo, porque así lo exige el proceso. No hay términos medios. Incansablemente se repiten las escenas en que caen los malos, pero también se van acabando los suyos, especialmente los más débiles, los que insinúan que se puede hacer acuerdos con el enemigo, los que flaquean cuando más se requiere de sus fuerzas. Al final, triunfa él solo, allí donde antes fracasaron todos.

Se lo puede ver en la televisión cualquier sábado (en la noche, no en la mañana), porque repiten incasablemente sus películas. Se llama Rambo y está interpretado por un señor cuyo nombre, Silvestre, es sinónimo de rústico, inculto, grosero, tosco, salvaje

INVENTAR LA OPOSICIÓN

17 de diciembre de 2007

Contar con la mayoría del órgano legislativo, o del que oficia de éste, y además con todos los poderes, debe ser el mejor de los mundos posibles para cualquier gobierno. Ninguno de los presidentes elegidos desde 1979 conoció el disfrute paradisíaco que puede ofrecer una mayoría en el Congreso. Jaime Roldós logró los votos y los puestos, pero el jefe de su partido se encargó de convertirle en presidente de minoría aún antes de que llegara a posesionarse. Rodrigo Borja pudo sobrepasar el límite anhelado sólo por la gracia de una alianza que se deshizo en corto tiempo. Todos los mandatarios que se turnaron en el cargo debieron hacer maromas, de las buenas y de las malas, para conseguir esos votos tan necesarios para aprobar leyes, reformas y presupuestos, pero también tan esclavizantes por su carga de presiones, demandas y deudas inconfesables. En definitiva, todos los antecesores de Rafael Correa debieron gobernar (o tratar de gobernar) desde la minoría.

Mucho se ha insistido en que ser oposición era el mejor negocio en esas condiciones, y esa afirmación guarda una enorme verdad porque siempre es más conveniente enfrentarse a los presidentes débiles que estar junto a ellos. Era la situación ideal para presionar y conseguir incluso más de lo que se podría haber tenido al ganar la presidencia. Pero algo que no se ha visto, porque nunca apareció con claridad, es que también los presidentes sacaban su tajada de todo este juego. Al tener al frente a enemigos poderosos podían atribuirles a ellos todos los males y todos los problemas, aunque muchos de estos no fueran sino el resultado de los errores propios. Además, como candidatos podían ofrecer siempre mucho más de lo que ellos mismos sabían que podrían lograr, ya que siempre habría alguien a quien echarle la culpa por el incumplimiento de las promesas. Se dibujó así una lógica perversa en la que cada uno hacía ofertas más descabelladas que el otro y, lo que es peor, cuando llegaban a la presidencia las seguían haciendo porque siempre estaría la oposición a mano para justificarse.

Por lo que se ha podido ver en la última semana, parece que hay mucha nostalgia por esa lógica. Tanta que hay que inventar la oposición. El único presidente que disfruta de la situación que todos sus antecesores anhelaron no encuentra nada mejor que convertir a una pequeña protesta parroquial en un tema de seguridad nacional. La lleva a tal extremo que la convierte en el elemento que define si continúa en el cargo o se va dando el portazo. Identifica a los supuestos titiriteros, con lo que entrega la carta de identidad de opositores fuertes y activos a quienes no pudieron conseguirla con votos. Pero a la vez crea una oposición puertas adentro. Se encarga de abrir brechas dentro de la propia casa cuando exige que sus partidarios escojan entre la lealtad a los principios y la lealtad al líder. Toda su fuerza y toda su mayoría no parecen suficientes para abandonar la lógica de décadas.

DICTADURA DEL CORAZON

18 de mayo de 2015

Los eminentes semiólogos del consejo encargado de orientar a los censores deben estar ansiosos por analizar el vídeo

que ensalza la dictadura. Lástima que por orden superior estén prohibidos de hacerlo. Con eso nos privan a los simples mortales de contar con un sesudo tratado sobre la forma de endulzar a una palabra que, sin duda, es una de las más amargas para los latinoamericanos. Para que ellos pudieran darnos su aporte sería conveniente que algún medio reprodujera el texto completo del vídeo y así se le podría acusar (al medio, por supuesto, no a los autores del vídeo) de atentar contra la Constitución y de fomentar el odio.

"Si esto es una dictadura, es porque el corazón les está dictando", repite cinco veces el estribillo, como para que penetre en lo profundo de esa zona de la psiquis que no está controlada por la razón ni por la voluntad. Pero, la repetición no es el único ni el más eficaz instrumento utilizado para ese fin. La clave está en la vinculación entre esas dos palabras, dictadura y corazón, que en el contexto de la canción son absolutamente contrarias. El objetivo es disolver la carga negativa de la primera en la ternura de la segunda. Así, todo lo que evoca la palabra dictadura (represión, asesinatos, opresión, intolerancia, arbitrariedad, corrupción) se evapora cuando ella corresponde al mandato del corazón.

De ahí a que en el inconsciente individual y colectivo se instale la idea de que las dictaduras pueden ser buenas, solamente hay un pequeño paso. Por eso, para que se cierre el círculo, y con el lenguaje que estuvo en boga en 1917, afirman que es "la dictadura del pueblo, patria y revolución". Con toda la naturalidad del mundo, no solamente transforman a la dictadura en un régimen positivo e incluso deseable, sino que intentan instalarla en el subconsciente como algo propio de todas las personas.

Ninguna de las dictaduras de los últimos dos siglos quiso reconocerse como tal ni permitió que se la llamara de esa manera. Hasta para ellas resultaba una palabra oprobiosa con la que había que poner la mayor distancia posible. Incluso los gobiernos que buscaban instaurar la dictadura del proletariado prefirieron –con bastante cinismo, por cierto- llamarse democracias. Siempre fue muy grande la carga negativa de la palabra.

Que logren o no maquillarla es un problema preocupante, pero no es el principal. Lo de fondo es averiguar por qué lo hacen. Si quisieran negar cualquier afán dictatorial, esta sería la peor entre todas las opciones posibles. La reivindicación de la dictadura solamente puede interpretarse como una declaración de pérdida o de abandono de la noción de democracia. La cancioncita es la aceptación de la derrota en la lucha por la significación de su proyecto como un régimen democrático. Por eso, no es casual que termine por reconocer que una dictadura no puede ser de todos, cuando pide "un aplauso para el corazón que con amor está dictando". Un corazón. Uno solo, de una sola persona que está dictando.

AUSENCIAS
4 de octubre de 2010

Condena total, incondicional e irrestricta a la insubordinación policial es la premisa que se debe adoptar cuando se producen hechos como los del último jueves de septiembre. Después de eso es

posible entrar en cualquier análisis o emitir una opinión. Una persona demócrata no puede aceptar que se secuestre a un Presidente, sea quien sea, y no puede pensar ni remotamente que se condicione su libertad al cumplimiento de determinados acuerdos.

Con esa premisa, cabe destacar tres ausencias que fueron evidentes a lo largo ese día. En primer lugar, no se vio por ningún lado –o fue tan débil que paso desapercibida- la lealtad con la democracia. Era el momento propicio para que todos los dirigentes políticos, especialmente los de oposición, hicieran declaraciones claras y terminantes de condena de las acciones desplegadas por los policías y de apoyo a la institucionalidad. Lo único que cabía de parte de ellos era cerrar filas en torno al presidente de la República y respaldarlo irrestrictamente.

La segunda ausencia vino desde el lado ciudadano o, como se acostumbra a decir, de la sociedad civil. Su presencia en las calles era necesaria para mandar el mismo mensaje requerido a los políticos, esto es, su voluntad de defender la institucionalidad democrática. Sin embargo, el número de personas que estuvo dispuesto a hacerlo fue mínimo. Los medios oficiales hablaron de alrededor de tres mil y, de lo que se pudo ver, su motivación central era el apoyo a Rafael Correa como persona y no necesariamente a la institucionalidad que el representa. Pero, aún así, resulta incomprensible que la defensa del mandatario que cuenta con los mayores niveles de aprobación en las encuestas quede en manos de tan pocas voces y de tan pocas voluntades. Posiblemente esto sea un resultado del fuerte liderazgo, que asume todas las responsabilidades y alimenta la pasividad de la ciudadanía.

La tercera ausencia estuvo en el terreno gubernamental, donde no hubo una concepción institucional y democrática de la política. No fue institucional, porque desde el momento en que el mandatario se bajó del vehículo en el cuartel policial, se hizo evidente que no se activaron las instancias ni los procedimientos establecidos para procesar los conflictos. El comando policial y el ministro del Interior eran los fusibles que se debió accionar antes de cualquier intervención presidencial (que habría sido innecesaria en caso de funcionar aquellos). No fue democrática, porque se dejó como única solución a la fuerza, no sólo desde que se agotó el breve intento de diálogo presidencial (y ya no quedaba otra alternativa), sino desde que se procesaron las leyes. La indiferencia al debate, a la búsqueda de acuerdos y a la incorporación de la opinión de los otros sectores es una imposición que en algún momento pasa la factura. La calificación como golpe de Estado y como conspiración a lo que comenzó como un conflicto interno de la Policía es el peor punto de partida para una comprensión que debería llevar a la autocrítica y al abandono de la política entendida como guerra.

PRENSA CORRUPTA
19 de marzo de 2012

El novedoso aporte revolucionario ecuatoriano al periodismo mundial es una fórmula que está destinada a hacer historia. Esta consiste en la censura posterior con cambio retroactivo de

contenidos y formatos. Hasta hace poco sabíamos que había que tenerle miedo a la censura previa, esa que quedó establecida por la sentencia del gran jurista Chucky Seven. Pero, gracias al ejercicio periodístico estrictamente profesional de un medio público, ahora sabemos que los contenidos y las formas se pueden cambiar de acuerdo a los efectos de una noticia o simplemente porque se hizo evidente la gran metedura de pata.

Dos historias recientes dan cuenta del novedoso invento. La primera, ya comentada en esta columna, fue el cambio apresurado de una primera plana en la que había una apreciación de Eugenio Espejo que era, por decir lo menos, caricaturesca, grosera y contraria a la verdad histórica. Las protestas de algunos asambleístas llegaron hasta los responsables de la publicación y en cuestión de minutos sustituyeron las barbaridades por un par de frases que pretendían cambiar el sentido del artículo. Como que no hubiera pasado nada, no hubo una sola disculpa ni una sanción a la persona responsable del artículo ofensivo. Muchos menos hubo algún reconocimiento de los directivos de la publicación (que, por cierto, se hace con los recursos de todos los ecuatorianos y, por tanto, según la reiterada frase del líder, venimos a ser los dueños de la imprenta).

La otra historia también alude a un cambio, pero en este caso no de contenidos sino de formatos. Inicialmente, el medio oficial publicó una entrevista al funcionario que, después de la avalancha de críticas en el plano internacional, había ido a Washington a explicar la posición del gobierno acerca de la libertad de prensa. Era una entrevista con todas las de ley, con preguntas y respuestas. No era una crónica de esas en las que el periodista refiere lo que un personaje dijo o habría dicho y que, por consiguiente, siempre deja espacio para que se filtre algo de la subjetividad propia del autor de la nota. Era el clásico esquema de pregunta-respuesta. Pero, maldita globalización que pone todo en tiempo real, los señores con los que se reunió el funcionario en la capital norteamericana dijeron que eran falsas las afirmaciones que él hacía en sus respuestas al periodista (no en las interpretaciones de éste, que no constaban en la entrevista ni caben en éste género periodístico). Rápidamente vino la solución. Nada mejor que romper la cuerda por la parte más débil y acusar a la periodista de haber recogido fragmentos de una conversación que sostuvo informalmente el funcionario con otras personas. La pobre periodista asumió su culpa, la entrevista se transformó en crónica y todo el mundo en paz.

El invento es creativo y sobre todo muy efectivo. Exime de la responsabilidad ulterior, manda al tacho a mamarrachadas como la deontología y preserva la integridad del funcionario. Si todos los medios aplicaran esto, el líder podría tomarse un descanso en su ardoroso combate a la prensa corrupta.

ADIÓS POLÍTICA

25 de octubre de 2011

Tres semanas después del jueves 30, es evidente que el gobierno tuvo éxito con su calificación de esos hechos como un

intento de golpe. Las encuestas reflejan que una mayoría ha plegado a esa tesis. Pero, esa misma mayoría reprueba la manera en que actuó el Presidente y condena el ataque armado de la noche. Es un mensaje contradictorio. Por un lado, considerando que las pruebas presentadas al respecto son prácticamente inexistentes, se ve que una gran proporción de la ciudadanía necesita muy poco para creer firmemente en la palabra presidencial. Por otro lado, un alto número de esas personas discrepa con unos procedimientos que rompen la tradición nacional de solución pacífica de los conflictos políticos. Dentro de esa contradicción se ha impuesto la creencia –casi una fe ciega- en la palabra presidencial, que hace que aquella mayoría acepte como un mal menor los procedimientos que reprueba.

Este doble mensaje debería preocupar al gobierno, ya que en cualquier momento pudieran invertirse los términos. Varios factores económicos, sociales o políticos pueden hacer que la crítica a los procedimientos supere a la fe en la palabra presidencial. En ese caso la situación no sería de tan fácil manejo como aparece ahora, con el agravante de que se habría agotado el único y último recurso, que es la figura de Rafael Correa. Sin embargo, el triunfalismo con que han enfrentado los hechos, la ausencia de una visión institucional de largo plazo –con el correspondiente fortalecimiento del caudillismo- y la reducción de todo el problema a una supuesta conspiración, son obstáculos para que en esas líneas se analice detenidamente la situación y se considere el riesgo latente.

En lugar de entenderlo en términos políticos, lo que se hizo desde las filas gubernamentales y en general desde Alianza País fue reendosarle el cheque en blanco a Rafael Correa. Es lo que se desprende del reagrupamiento incondicional de la bancada legislativa y de la ausencia de un debate serio, profundo y público en torno a los hechos del jueves 30 (¿recordarán a Bobbio cuando decía que la democracia es el manejo de lo público en público?). Lo que se ha visto, en cambio, es la repetición incansable y monótona de un libreto predeterminado, en el que no faltan piezas macondianas como la cámara fotográfica de cuarenta centímetros con cacha de revolver y el ofrecimiento de cinco mil dólares al primero que pasa por ahí para que la opere.

Coincidentemente, esta negación de la política se produce en medio de la larga convención de Alianza País, que debe concluir el 15 de noviembre. Esta era una oportunidad para el debate dentro de esa amalgama informe e inorgánica. En lugar de ello, se han consolidado las condiciones para que se imponga definitivamente la estrecha mira del caudillo, con su aversión a la palabra partido y al contenido de ella. Por ello, ahora aparece como más importante consolidar los comités de defensa que construir una organización política sujeta a normas democráticas. Es el adiós a la política con el triunfo del patiñismo.

RETAGUARDIA

27 de diciembre de 2010

Como el motín policial que escaló a conflicto político, al desalojo de la

revista Vanguardia se lo ha presentado como un simple problema de inquilinato que por casualidad tiene efectos políticos. Incluso los periodistas de ese medio han preferido mostrarse cautos y se han abstenido de calificar a los hechos como una persecución. Sin embargo, todo indica que desde el comienzo fue una acción política y que el objetivo no era únicamente cobrar los arriendos atrasados, sino callar las críticas y dejar sentado un precedente. Nadie, por más poder que tenga, utiliza un cuerpo de élite de la Policía, armado como para cualquier treinta de septiembre, solo para desalojar a los inquilinos deudores.

La morosidad no justifica la retención de los equipos, ya que el objetivo debió ser únicamente la recuperación del local. Todo el mundo sabe que esas computadoras valen más por la información que contienen que por su precio en el mercado, y que muy poco se obtendría en una potencial subasta encaminada a recuperar los arriendos adeudados. En nada quedó el derecho al trabajo, garantizado constitucional y legalmente. Las computadoras debieron ser entregadas a los periodistas para que pudieran continuar con su actividad, a menos que se quisiera instaurar la modalidad de secuestro de los bienes y de los instrumentos de trabajo como medio de chantaje para lograr otros objetivos. Obviamente, ahí hay una intención que va mucho más lejos que el cobro de un arriendo impago que, por cierto, sería el gran logro a exhibir después de cuatro años de discurso acerca de la banca corrupta. Con trece mil dólares que deberán ser consignados en un juzgado de inquilinato ya no habrá razones para preocuparse por los cientos de millones que todavía están bailando por las redes financieras internacionales.

Pero no se puede negar la creatividad altiva y soberana. En lugar de enfrentarse directamente con los medios, como lo hace a cada momento el gran líder o como lo hacían hasta hace poco los hermanos publicistas, ahora se manda a un funcionario de segunda y sin relación alguna con el campo de la comunicación. No hay persecución por los contenidos ni por las investigaciones que puedan demostrar fraternales corrupciones. Ni siquiera se alude a eso. La experiencia enseña que no se pueden repetir los errores. Por ello, el libreto es diferente al que utilizaron hace un año para suspender por varios días a Teleamazonas, cuando a ese canal se le ocurrió la malévola idea de transmitir por unos pocos segundos una corrida toros. En esa ocasión saltó el debate sobre la libertad de expresión, lo que no conviene en absoluto y se debe evitar a toda costa, especialmente cuando se quiere volver al tratamiento de la ley de comunicación.

Ahora la estrategia es más inteligente y consiste en entrar por la retaguardia. Ayudó mucho la ingenuidad de los directivos de la revista que nunca se percataron de los riesgos que corrían al arrendar una casa que está en manos estatales y su falta de pulcritud al no pagar el alquiler.

OBIGATORIO RECORDAR

19 de diciembre de 2011

Se puede pensar que la ausencia del sentido del ridículo ya es de todos o que se trata de una hábil maniobra política, de esas que aborrecían cuando las hacían

los pelucones o la partidocracia. De cualquier manera, resulta grotesco que ahora quieran registrar la abreviación de una fecha y una consigna política. El 30S corresponde a ese treinta que el líder quiere dejar grabado con letras heroicas en la historia nacional, de manera que es un contrasentido tratar de que nadie más lo use, cuando por el contrario deberían divulgarlo urbi et orbi, sin restricciones y sin propiedad exclusiva. Con la consigna "prohibido olvidar" quieren hacer justamente lo contrario a lo que ésta proclama, ya que olvidan (o simplemente ignoran) que desde hace aproximadamente setenta años ha sido una de las armas del pueblo judío para enfrentar a quienes quieren negar la realidad del holocausto. Basta que le pregunten al amigo iraní para que salgan de la ignorancia o para que aviven el recuerdo.

Los ejemplos de la distribución equitativa del ridículo son múltiples y se encuentran a cada paso. En el nivel internacional tenemos ejemplos recientes con el airado abandono de una cumbre cuando hablaba la representante del Banco Mundial y el inmediato nombramiento del esposo de la embajadora como representante ante ese mismo organismo. O la presentación de un vídeo en que tanto se repite la acusación de autoritarismo que al final en los presidentes espectadores quedó flotando la duda que se suele expresar con aquella frase que alude al río que suena. Aún más, hay que recordar que el mensaje que se quería enviar se refería a los derechos humanos y lo peor que se podía hacer era traer el recuerdo de las dictaduras que condenaban a las entidades y a las organizaciones encargadas de su vigilancia.

Pero, posiblemente todo esto no se deba solamente a la distribución equitativa de la pérdida del sentido del ridículo ni a la ignorancia del pasado (incluida la excelente salsa de Rubén Blades), sino a la búsqueda de un objetivo estrictamente político. En el fondo, como bien saben los comunicadores que manejan estos temas en las altas esferas, la meta es apropiarse de las palabras, darles un único sentido. 30S o 30-S solamente deben significar lo que se quiere que signifiquen, no lo que crea la gente siguiendo los dictados de su libre interpretación. Prohibido olvidar debe referirse exclusivamente al pasado oprobioso de la larga y oscura noche neoliberal, no vaya a ser que a alguien se le ocurra aplicarlo para los olvidos de las promesas de campaña o de la aplicación de las rimbombantes disposiciones de la Constitución altiva y soberana.

Nuevamente hay que acudir a la sabiduría de Lewis Carroll, cuando a través de Humpty Dumpty le explica a Alicia que las palabras significan lo que el poder quiere que signifiquen. Por eso, porque de aquí en adelante, esas palabras dirán sólo lo que desde allá quieran que digan, habrá que mantener en el recuerdo su viejo significado. Será obligatorio recordar.

No hay, jurídicamente, un caso Samán contra Palacio. Lo de ahora quedará registrado como el caso Revolución Ciudadana contra libertad de expresión.

MATONES
5 de abril de 2010

Lo que se debate no es la calificación del adjetivo matón, que finalmente significará lo que se le ocurra a un juez de segunda en su afán de servir al poder. Lo de fondo son las reglas puestas sábado a sábado por el líder y reafirmadas con mayor claridad en el discurso de su segunda posesión –que, por la magia de la refundación, cuenta como primera- en agosto del año pasado. Allí, en acto solemne, frente al país y a los invitados extranjeros, aseguró que el principal enemigo del gobierno y de la revolución en los 31 meses que llevaba de gestión habían sido los medios de comunicación.

Vale la pena detenerse en este mensaje, porque a la luz de los últimos acontecimientos cobra dimensión de pieza fundamental de la maquinaria que se está montando en el campo de la comunicación. Textualmente y haciendo un llamado a sus colegas latinoamericanos dijo que "Debemos perder el miedo y a nivel de países plantearnos formas de controlar los excesos de la prensa". Controlar y excesos son palabras que pueden sonar muy bien siempre que no se pregunte por quién calificará lo que es exceso y lo que no lo es. Cualquier respuesta que se intente dar a esa pregunta llevará una fuerte carga de coacción y limitación de la libertad de expresión. Esto lo saben muy bien quienes han redactado y quienes han firmado los instrumentos internacionales establecidos precisamente para garantizar ese derecho. Entre esos firmantes se encuentra el Ecuador, pero extrañamente el discurso parece haber sido hecho por alguien que no conoce esos acuerdos y convenios o que no está empapado de las concepciones que los guían.

En efecto, solamente alguien que los ignora o que no comparte su esencia puede afirmar que no está "en contra de la prensa crítica", sino "contra la prensa mediocre y corrupta". Precisamente en esos instrumentos se establece la necesidad de eliminar todos los adjetivos con los que se puede calificar a la comunicación en general y a los medios en particular, porque al hacerlo se camina inevitablemente a la constitución de instancias de control. Nuevamente cabe aquí la misma pregunta sobre quién tiene la facultad de atribuir esos calificativos (con la respectiva conformación de los organismos controladores) y nuevamente se llega a comprobar que cualquier respuesta significará represión.

Pero, como en tiempos de revolución no hay para qué darle tantas vueltas al asunto, mejor pasar rápidamente de las palabras a los hechos. Allí están. Uno es la inclusión de la rendición de cuentas de los medios de comunicación en la Ley de Participación. El segundo es la creación del consejo controlador en la Ley de Comunicación, que va porque va. El tercero (aplicado en esta ocasión) es el desprestigio a los columnistas y la utilización de acciones preventivas o, en términos criollos, de amedrentamiento, con matones y jueces incluidos para callarlos la víspera.

NO-DO

29 de julio de 2013

Junto a los cuerpos policiales especializados y a los grupos de choque,

los regímenes autoritarios valoran enormemente la propaganda como uno de los instrumentos para mantener la paz de funeraria que tienen como objetivo. El ejemplo que viene a la cabeza cuando se habla de esto es la Alemania nazi, con Göring repitiendo la mentira hasta que se convierta en verdad. Mientras las bandas de las camisas pardas se encargaban de los cuerpos, la propaganda trabajaba en los cerebros. Pero es menos conocido lo que hizo durante un tiempo bastante más largo su hermana gemela, la dictadura franquista. Fueron los años del No-Do, que ahora podemos conocerlos gracias a la televisión española.

A inicios de la década de los cuarenta se instauró el programa Noticiarios y Documentales (sintetizado en No-Do para el consumo masivo). La receta era sencilla y eficaz. Consistía básicamente en la proyección obligatoria en todos los cines, antes del inicio de la película, de un noticiero que recogía las realizaciones del régimen y sobre todo de su caudillo. Era lo que ahora llamaríamos una cadena, pero propia de la época prehistórica en que no había televisión. Allí estaban infaltablemente las inauguraciones de obras, las bondades del régimen, la apología de los valores de la españolidad encarnados en el caudillo y, sobre todo, los discursos de ese personaje de voz aflautada. Como para que nadie olvide que gobernaba por la gracia de dios.

Cuando el No-Do ya había recorrido largo trecho, en 1966 el ministro de Turismo y Comunicación Fraga Iribarne impulsó una ley de prensa que buscaba, entre otros fines, darles un carácter moderno y jurídico a esas acciones. Sin asomo alguno de ironía, la ley comenzaba afirmando que la libertad de expresión estaba plenamente vigente. Más adelante, se explayaba en lo que verdaderamente importaba, como cuando establecía que el gobierno tendrá derecho a conocer todo lo referido a las finanzas de los medios y a comprobar su tiraje (artículo 25). Hacía al medio responsable de todo lo que se decía en sus páginas, incluso de las opiniones de los columnistas y de los entrevistados (artículo 39). Para mayor eficiencia, les daba a los directores de los medios la facultad de vetar los contenidos (artículo 37), con lo que aseguraba la autocensura y las opiniones indeseables eran eliminadas en la víspera. Por si algo faltara, los responsables de los medios debían consultar al gobierno sobre los contenidos, directamente, sin un Consejo que haga de intermediario (artículo 4) y obligaba a publicar información de interés general (artículo 6). Finalmente, como corresponde a un régimen orgullosamente nacionalista, en las empresas periodísticas y editoriales solamente podían participar personas naturales o jurídicas españolas (artículo 50), no fuera a ser que se filtraran las ideas descabelladas que andan dando vueltas en el mundo exterior.

Menos de una década después de la expedición de la ley, el franquismo murió con el caudillo. Mientras estuvo vigente, el largo espacio del No-Do fue aprovechado para hacer realidad el largo beso que no podían darse en los parques ni en las calles.

EJEMPLOS

17 de junio de 2013

Se equivocan quienes creen que con la aprobación de la ley de comunicación se inaugura una etapa de vigilancia, control, persecución y penalización de la opinión. No ha sido necesaria esa ley para llevar al ámbito penal lo que debería

mantenerse en el terreno del debate de ideas. Leyes sobran cuando hay jueces, fiscales e incluso defensores del pueblo que están dispuestos a jugarse por la verdad única e indiscutible. La ley de comunicación, entusiasta y disciplinadamente aprobada en larguísimos veinte minutos del viernes, sólo será un elemento facilitador de lo que ya se ha venido haciendo. Ejemplos sobran, desde los juicios a periodistas y medios, en los que bailaban millones de dólares –que no eran para enriquecerse-, hasta los linchamientos sabatinos, que tienen eficiente efecto pedagógico. Sí, ejemplos sobran, como los que se produjeron en cascada los días previos a la concienzuda aprobación.

Para comenzar, en medio de sus agobiantes tareas, el líder se dio tiempo para pedir una indagación previa de una persona que envió un mensaje con el texto "retuitea si quieres que muera Correa". Los abogados tienen ahí mucho material para interpretar, comenzando por la identificación del Correa al que se refiere, hasta llegar, después de arduo trabajo, a la tipificación del delito. Pero quizás tienen más material para desternillarse de la risa, porque no sería raro que por esa vía se llegue a creer que las maldiciones implícitas en las cadenas que circulan por internet constituyen hechizos que deben ser perseguidos y castigados.

En los mismos días, un señor que reivindica su condición de prócer equinoccial en la conquista espacial, amenaza con juicio a quienes han hecho alguna observación sobre el minúsculo aparatito que anda por los cielos. Palabras más, palabras menos, ha dicho que es traición a la Patria (debe ser así con mayúsculas por la seriedad con la que dice). Casi lo mismo que los hinchas afiebrados que no pueden entender que a alguien no le importe en lo más mínimo el juego de la selección o que un barcelonista apoye al equipo argentino que juega contra Emelec. Es que la Patria es la Patria en la cancha y en las nubes, no vaya a ser que con la crítica lleguemos a comprobar que no existe.

Casi al mismo tiempo, varias veces al día la programación de las radios y los canales de televisión se cortaba con cadenas que culpaban a un diario quiteño del execrable delito de haber puesto un titular a una noticia que venía de una agencia de prensa. El diario publicó la carta completa del funcionario que pedía aclaración. No era suficiente, debía humillarse, pedir perdón, reconocer la culpa. Tozudo el diario, no entendió que cuando el pueblo está encarnado en uno solo, éste tiene defensor propio, y ahora tendrán que encontrarse en los juzgados.

Hay más ejemplos, como el llamado a no olvidar que de ese 30 no se habla y que la verdad está dicha y pronto será suscrita por la ímproba comisión. La ley solo los hará crecer y multiplicarse.

DES-ILUSTRACIÓN

15 de abril de 2013

Resulta verdaderamente sorprendente que la mayor parte de quienes hacen opinión pública desde la orilla de la Revolución Ciudadana no se hayan enterado de la fructífera conversación que sostuvo Nicolás Maduro con un pajarito. Si lo hubieran sabido seguramente habrían podido explicarnos

cómo se compatibiliza eso con las ideas de la ilustración, que siempre fueron patrimonio del pensamiento de la izquierda. Que ahora, para ganar una elección, venga un señor a decir que se comunica con un muerto y que éste toma la forma y el canto de un ave, es algo que debe ser abordado sin reservas de ninguna clase por los intelectuales que mantienen columnas en los periódicos y que son entrevistados en radio y televisión. Es un deber con ellos mismos y con la sociedad a la que aseguraron que era posible un futuro luminoso. Si no lo han hecho debe ser porque no han conocido la noticia.

Bueno, entonces, habrá que hacérsela conocer. Para eso hay que comenzar recomendándoles que lean de vez en cuando la prensa corrupta y que se den una vuelta por la infinidad de medios que están al alcance del movimiento de un dedo en la red. El problema parece ser que no solamente escriben en la prensa-que-se-regala, sino que incluso la leen. Lo que es peor, aparentemente es la única que leen.

Hay que esperar que no sea así y que sólo se trate de un descuido pasajero. Quizás todo se deba a una comprensible falta de tiempo para asuntos tan banales como el diálogo místico con seres alados o como la asesoría celestial para la elección del papa. Al fin y al cabo, son cosas secundarias ante las que a ellos les ocupa toda su atención, como los kilómetros pavimentados en las viejas carreteras o el festejo por escrito del alto número de representantes conseguido en la asamblea.

Hace más de trescientos años, el progresismo inició un largo camino que debía llevar a imponer la razón en la vida de los seres humanos, a someterlo todo a la crítica y al análisis, a buscar explicaciones para cuanto fenómeno social podía presentarse. La erradicación de cualquier forma de pensamiento mágico para explicar los hechos sociales, económicos y políticos, era uno de sus elementos centrales. De ahí en adelante se supo o se aceptó que las cosas ocurren por el enfrentamiento de fuerzas (¿recordarán todavía aquello de la lucha de clases?), por las decisiones conscientes y calculadas de las personas, por la confrontación de los múltiples intereses que existen en la sociedad, eliminando todas las explicaciones basadas en la magia, en lo sobrenatural, en el destino previamente escrito.

Las conversaciones con los pajaritos y el descubrimiento de la función de consejero celestial serán, sin duda, muy útiles en términos electorales. Es muy probable que a la hora de circular este artículo el señor Maduro ya esté ocupando un lugar en los cielos, pero eso no exime de la explicación que nos merecemos. El socialismo del siglo XXI como des-ilustración es algo que debe ser aclarado.

OPINIÓN LIBRE
8 de septiembre de 2014

Hay que ser justos. Cabe reconocer el mérito del secretario de Comunicación al colocar un hito en el duro camino de la libertad de expresión. A inicios de la semana pasada, con la difusión internacional de CNN, dejó sentado un precedente para la aplicación de la Ley

de Comunicación. Desde ese momento, los organismos de censura creados al amparo de esa norma ya no podrán (o no deberán) perseguir a la opinión. Haciendo suyas las palabras de decenas de columnistas de opinión y de personas de a pie que quieren expresarse en las redes sociales o en cualquier otro espacio, el funcionario reivindicó su derecho a opinar sin interferencias.

"A mí me parece, es mi criterio, es mi opinión, es mi percepción, que el diario dijo 'mejor cierro antes de que descubran el fraude'", sostuvo en referencia al diario Hoy. Ante el sorprendido entrevistador, que le hizo notar que según la ley ecuatoriana eso podría configurar la figura de calumnia, reiteró "esa es mi opinión y tengo mi derecho a hacerlo y usted no me puede coartar a mí mi libertad de opinar y de decir". Como si pudieran quedar dudas, finalmente reafirmó "Yo no estoy aseverando, yo opino eso, esa es mi percepción". En fin, una impecable diferenciación entre información y opinión, en la que esta última no requiere de confirmación, contrastación ni verificación. Él –y se entiende que cualquier persona- es dueño de emitir su opinión sin que eso signifique aseverar o afirmar y sin tener que probarla o sostenerla con evidencias.

Es un concepto de opinión que va mucho más allá del que han sostenido columnistas, caricaturistas y tuiteros. Incluso en los casos emblemáticos que derivaron en juicios, disculpas y rectificaciones, los autores no se atrevieron a tanto. En el asunto del 30S y los 80 millones de dólares, el columnista Palacio planteó una situación hipotética en la que, en su opinión, alguien podría acusar al líder de actos graves. Cuando a Bonil se le obligó a rectificar y explicar una caricatura, se lo acusó de no haber contrastado y confirmado lo que constaba al pie del dibujo, a pesar de que eran frases tomadas casi textualmente de despachos de agencias de prensa. En ninguno de esos casos hubo acusaciones tan fuertes y directas como las que hizo el secretario de Comunicación en la entrevista. Sin embargo, contra Palacio intervino la justicia con la rapidez de Chuky Seven y Bonil tuvo el nada envidiable privilegio de inaugurar las actividades de uno de los organismos inquisidores.

La búsqueda de equidad en el tratamiento de los casos de persecución a la opinión ha motivado que muchas personas pidan similares sanciones para el secretario. Puede parecer lo justo, ya que de iguales acciones deben desprenderse iguales consecuencias. Pero, al hacerlo están mirando el mundo al revés. La verdad es que el funcionario dio un paso fundamental en defensa de la libertad de opinión y, obviamente, los organismos controladores no lo castigarán. Ese es el tratamiento que debe regir para todos. Gracias, señor secretario.

Hybris en el trópico andino

La herencia del adanismo

Cuando estaba por concluir el siglo XX, en el mundo occidental tuvo mucho éxito la opinión de connotados politólogos y sociólogos que anunciaban el fin de las ideologías y la caducidad de los términos izquierda y derecha. Los países latinoamericanos la acogieron con entusiasmo. La afirmación llegaba en un momento propicio. Eran los tiempos de los ajustes económicos, los de la deriva neoliberal que propugnaba la despolitización de la política. No solo implícitamente, sino de manera muy clara, esta proponía el reemplazo de los políticos por los técnicos en el manejo de los asuntos públicos. Pero, aquella afirmación perdió sustento cuando apareció un fenómeno que demostraba que las ideologías gozaban de buena salud y que la vieja clasificación de izquierda y derecha era tan útil como había sido desde los tiempos de la Revolución Francesa.

El fenómeno fue calificado precisamente con un adjetivo alusivo a la ideología. El *giro a la izquierda* fue el nombre con el que se identificó al proceso que comenzó con la llegada de Hugo Chávez a la presidencia de Venezuela y que durante los siguientes veinte años se convirtió en una corriente continental. Pero, la referencia general, ya sea con ese adjetivo (que puede tomarse como un hiperónimo) o con el de *socialismo del siglo XXI* (un hipónimo reducido a su sigla SSXXI de confusa pronunciación), oculta las diferencias que existieron entre sus integrantes.

Hubo voces que, desde el inicio del proceso, dijeron que no todos los gobiernos que se cobijaban bajo ese signo eran similares. Básicamente, esa observación se enfocaba en la brecha existente entre una izquierda institucional o democrática y una izquierda populista (sea lo que este pueda significar este término). Pero, con el andar del tiempo se hizo evidente que las diferencias iban más allá de lo que señalaban esos adjetivos, incluso cuando a estos se los reemplazaba por la metáfora de vegetarianos y carnívoro, respectivamente. Las diferencias eran más numerosas y, sobre todo, más profundas.

Eran evidentes las distancias que había entre las izquierdas *adanistas* que pregonaban la instauración del paraíso terrenal y las que se alejaban de las utopías que habían sido probadas una y otra vez en la historia mundial. Las opciones iban desde arrasar con todo y después ver qué se puede hacer, hasta definir objetivos realistas, alcanzables y caminar por un sendero seguro. Las primeras perseguían una quimera, sin reconocer que el modelo que las guiaba era el mismo que había fracasado en todos los lugares en que se aplicó desde los lejanos tiempos de la toma del Palacio de Invierno en la Revolución Rusa. Las otras recogían las experiencias propias y ajenas, pero en su mayoría optaban por el pragmatismo (en el que, por cierto, algunas terminaron inmovilizadas).

Fueron muy diferentes también por la manera en que cada una de ellas entendía y practicaba la democracia. Esta podría existir, para un conjunto de esas izquierdas,

solamente en una sociedad que lograra eliminar la pobreza y distribuir adecuadamente el ingreso. “Con pobreza no hay democracia” se leía en las paredes, con lo que implícitamente se negaba que los pobres por lo menos pudieran tener libertad. Las otras coincidían en los objetivos sociales y económicos, pero consideraban que la democracia es sinónimo de libertades y derechos. Las primeras denigraban al Estado de derecho por ser una herencia liberal. Las otras buscaban fortalecerlo y profundizarlo para asegurar la igualdad ciudadana. La brecha era amplia y profunda, y se expresó en las maneras de concebir la división de poderes, el balance y el control entre estos, el manejo de las elecciones y el respeto a los resultados adversos. En definitiva, el punto era si se consideraba a la democracia como *el único juego posible*, como lo plantea un autor, o se la aborrecía por formal y burguesa.

La brecha se presentaba también en la definición del modelo económico. Para unas izquierdas, el actor fundamental del desarrollo debía ser el Estado. Para otras se hallaba en el equilibrio entre el Estado y el mercado. A partir de ese punto, las posturas sobre la estabilidad macroeconómica, la política fiscal, las regulaciones, la política social, la generación de empleo y un sinfín de asuntos de esa índole las colocaban en lugares muy apartados. Definían y defendían modelos de desarrollo claramente opuestos.

La distancia era igualmente grande en el complejo tema de los valores. El reconocimiento de nuevos derechos, que en la práctica significa la inclusión de grupos tradicionalmente excluidos, las separó aún más. La legalización del matrimonio igualitario y del aborto terapéutico, el reconocimiento de los derechos de opción sexual, las demandas del feminismo, la protección del medio ambiente, la posición frente a los múltiples temas de las drogas, en fin, los derechos históricamente soslayados por el conservadorismo marcaron el parteaguas entre una izquierda tradicionalista y a una izquierda progresista.

La relación entre los dirigentes y las bases sociales –o, en términos que recuerdan debates antiguos de una parte de esas izquierdas, entre la vanguardia y las masas- marcó también las distancias. Planteada en términos espaciales, la diferencia se expresaba entre unas izquierdas que establecieron relaciones horizontales frente a otras que optaron por la imposición vertical. Las primeras se empeñaron en fortalecer las bases sociales de la democracia por medio de una participación informada y crítica. Las otras optaron por encumbrar a un líder único, inapelable e insustituible que encerraba en sí todo el proyecto político. Con ello se hicieron cargo de la larga y pesada herencia del caudillismo que, ciertamente, era parte de su historia, como lo era también de la derecha.

En síntesis, la gama de las izquierdas fue muy amplia. También fue muy compleja porque preparaban decenas de cocteles con las diferencias mencionadas. Así, hubo izquierdas que en lo económico elogiaban el modelo cubano (aunque la mayoría se cuidó mucho de seguirlo), y al mismo tiempo compartían valores con los grupos Provida o con el Opus Dei. Hubo izquierdas fuertemente autoritarias que sin embargo aplicaron programas orientados a la inclusión social. En fin, hubo todas las combinaciones posibles, hasta el punto en que las izquierdas cubrieron un espacio tan amplio del espectro que muchas de

ellas no reconocían el parecido de familia con las otras, y en muchos casos incluso con la propia definición de izquierda.

Las izquierdas y el *boy scout*

La izquierda cobijada en la Revolución Ciudadana fue precisamente una de aquellas en las que cuesta encontrar los lazos familiares con las izquierdas contemporáneas. Sus referentes principales permanecían detrás del Muro de Berlín. En los asuntos de valores era imposible identificar algún grado de parentesco con las propuestas que buscan ampliar y profundizar los derechos y las libertades individuales. Tampoco se lo podía encontrar en la manera en que estableció la relación entre los dirigentes y las personas de a pie, en que mantuvo la idea de la vanguardia iluminada heredada del viejo leninismo. Mientras pregonaba la inclusión social, arremetía contra las organizaciones sociales, criminalizaba la protesta y condenaba al silencio a la opinión (no solo a la ajena, sino también a la del propio bando cuando demostraba un mínimo de autonomía). El sonsonete de la participación sucumbió ante la presencia predominante del líder.

Fue una izquierda plagada de contradicciones. En parte, era el resultado de la propia historia de los grupos que se juntaron. Eran pequeñas organizaciones que, a lo largo de muchas décadas, configuraron un cuadro multicolor, abigarrado. Las rencillas internas y las disputas por el mismo espacio les impedían privilegiar los objetivos de largo plazo y las llevaban a identificar a sus vecinos como el *enemigo principal* (para decirlo en el lenguaje que les era propio). Era casi una confesión de la derrota esperada. No cabía desgastarse en peleas que únicamente podrían llevar a la cola del león. Más sencillo y productivo era asegurar la cabeza del ratón. Aunque, a decir verdad, esta tampoco se conseguía porque ninguna de esas cabezas lograba imponerse sobre las demás y mucho menos lograr algún impacto más allá del campus universitario. De esa manera, en una extraña operación aritmética, las izquierdas se multiplicaban por división. No sumaban.

Ninguno de esos minúsculos grupos se había percatado de que existía una nueva realidad mundial y nacional. No entendieron las señales que pusieron fin a la Guerra Fría. Tampoco se enteraron de la transformación del proletariado de la primera Revolución Industrial, actor principal del primer tomo de *El capital* (que, dicho sea de paso, apenas unos pocos lo habían hojeado). La perestroika y la glasnost eran sinónimos de traición. La instauración del capitalismo de partido único en China les resultaba invisible. No eran, para ellos, consecuencias inevitables de un sistema que, por la imposibilidad consustancial de sostenerse económica y políticamente, jamás podría alcanzar sus propios objetivos. Desdiciendo su interpretación basada en el materialismo histórico, el de las leyes universales que minimizaban los cálculos y las decisiones de los actores, encontraron que la responsabilidad de lo ocurrido recaía únicamente en estos. A contramano de esa misma interpretación, sostuvieron que se trataban de traiciones a la teoría, a las ideas y que una vez que la humanidad se encauzara por las leyes universales el resultado iría acorde al modelo ideal dibujado al amparo del romanticismo del siglo XIX. Por ello, en la más acabada expresión del idealismo, el fracaso no sería tal porque

siempre existiría el modelo abstracto para oponerlo a la terca realidad. Nunca aceptaron la invitación de Rudolf Bahro (hecha desde adentro, tanto en términos teórico-ideológicos, como terrenales porque la hizo desde un país socialista) para centrar la discusión en la experiencia realmente existente, la del *socialismo real*. Al negarse a ello, esos grupos y sus pares de otros países, se privaron de la posibilidad de ofrecer una alternativa viable y con posibilidades reales de éxito, como había ocurrido con las múltiples experiencias de socialismo democrático. Prefirieron mantenerse en esa utopía que –la historia lo comprobaba- no tenía viabilidad y era claramente reaccionaria, regresiva.

A finales de la década de los setenta, cuando fue necesario buscar un camino para salir de la dictadura militar no lo hicieron en dirección hacia la democracia, sino hacia ese modelo abstracto. Para ablandar la contradicción con su prédica liberadora prefirieron calificarla como *dictablanda* y concentrarse en las demandas grupales. Desde los tempranos años de la transición ya la adjetivaron –con un regalo generoso a la burguesía- como burguesa y excluyente y no pocos de sus integrantes se decantaban por la continuación del gobierno militar (especialmente en su primera fase, la del progresismo nacionalista). Al contrario de la mayoría de los países latinoamericanos, desde Centroamérica al Cono Sur, en que la presión por la instauración del Estado de derecho vino desde abajo y desde la izquierda, acá llegó desde arriba y no precisamente traído por quienes se atribuían la representación de los sectores populares. Tampoco las demás corrientes políticas del país -con un par de excepciones-, tuvieron un papel activo en ese proceso, pero en el caso concreto de las izquierdas eso chocaba con su prédica liberadora. Ese rechazo a la democracia les pasó factura más adelante, cuando llegó el caudillo que tomó la bandera que ellas habían agitado por años y las sometió sin mayor esfuerzo.

Concentradas en debates propios de siglos pasados y ciegas a los cambios culturales y generacionales, esas izquierdas devinieron en depositarias y guardianas de los valores tradicionales. La Revolución, con mayúscula, aquella que se hacía heroicamente en las calles y en la montaña, no tenía cabida dentro de la casa. La vida cotidiana no caía bajo la lupa de las categorías del análisis dialéctico ni de la reflexión sobre la dominación. La igualdad de las personas se circunscribía a los ambientes productivos, a las siempre determinantes relaciones de producción, jamás a la interacción de las personas en el mundo del día a día. La reproducción de los valores tradicionales, sacrosanto patrimonio de la sociedad conservadora ecuatoriana, era parte de la identidad nacional. La situación de la mujer apenas requería de cambios gramaticales, como lo hizo aquella asamblea estudiantil que decidió que ya no se elegiría reina de la universidad sino compañera universitaria. Lo mismo lo harían más adelante las feministas que cerraron los ojos, los oídos y las bocas cuando el líder pregonaba su condición de macho alfa. Mientras tanto, lo que pasaba en el mundo en términos de libertades e identidades era, en el mejor de los casos, una más de las múltiples expresiones de la desviación pequeñoburguesa.

Es cierto que esa fue la característica de la izquierda marxista ortodoxa, aplicada sin desvíos en todas las revoluciones triunfantes desde 1917 en adelante. Pero, en las calles

parisinas en mayo de 1968 y en las de Berlín en noviembre de 1989 se pisoteó ese esquema y se logró que las izquierdas en gran parte del mundo desempolvaran el postulado anti jerárquico que constaba en su partida de nacimiento. Al comenzar el siglo XXI, la lucha contra las jerarquías ya no se limitó al tema cada vez más marginal del enfrentamiento entre el capital y el trabajo, sino que entró a la casa propia. La horizontalidad era la huella originaria y pasó a ser la marca de identidad de las nuevas izquierdas. Pero, claro, eso era en ese mundo que estaba tan lejano del minúsculo país que reivindica –incluso con su propio nombre- ser su centro. En la visión de esos grupos, especialmente en las de sus ideólogos, estaba muy clara la división entre un arriba iluminado, pleno de sabiduría, y un abajo dócil y confiado.

Siguiendo esa trayectoria, las izquierdas allanaron el camino para su capitulación frente a cualquier caudillo que pudiera hablar su lenguaje, aunque nunca lo hubiera aprendido y mucho menos practicado. Lo hicieron con más de un militar –general o coronel, el grado no era determinante, siempre que representara jerarquía- que hubiera amenazado a los poderes constituidos. No tenía importancia si lo hacía desde la derecha o desde la izquierda, ya que venía revestido del verde olivo tan similar al de la quimera heroica. La debilidad por los uniformes podía incluir al del *boy scout*, que al fin y al cabo era símbolo de aquella escala jerárquica que, contradictoriamente, debía implantarse para establecer el mundo feliz de la igualdad. Sin presencia significativa en el panorama político nacional, solo hacía falta el liderazgo del hombre adecuado. Este, siempre en masculino, pasaba a ser el factor decisivo para la entrada de las izquierdas en la historia. No tenía mayor importancia que eso significara tragarse la mayoría de sus palabras y sobre todo aquellas ideas que eran inamovibles hasta el aparecimiento del personaje. La trayectoria de las izquierdas, imaginada como una tragedia, en el sentido heroico de la palabra, devino en una fábula que saltó directamente de la prótasis a la catástrofe sin pasar por la catástasis. Una historia sin gloria estaba destinada a ser sepultada bajo la gloria del caudillo.

Reaccionarios del mundo, ¡uníos!

Muy poco de esa historia era conocido por quien estaba destinado a convertirse en el dirigente único del proceso. Apenas le daba importancia. No podía considerarla como una desviación con respecto a la izquierda, porque nunca se interesó en saber cuál era el camino de esta. Sí lo fue, más adelante, para muy pocos de sus seguidores que comprobaban diariamente cómo las posiciones del personaje escogido se alejaban de lo que ellos -especialmente ellas- soñaron. Pero, la mayoría acató, con *orgullosa sumisión*, según la memorable frase que le sirvió a una de las fieles militantes para ascender en la jerarquía de la corte y apoyar entusiastamente el nuevo rumbo que determinaba el personaje que habían encumbrado. Las posiciones que él impuso en esos aspectos traían la carga de la formación confesional y de la vocación apostólica que demostró en todo su accionar. Pero, según se pudo comprobar, para la gran mayoría de sus nuevos compañeros no eran desvíos con respecto a la misión de apostolado y sacrificio que habían escogido para sus vidas. Al fin y al cabo, la revolución es cosa de vencer o morir, de la patria o la muerte, de la entrega en cuerpo y alma, como corresponde a cualquier credo religioso.

Sobre todo, los valores del líder no tenían nada que envidiar a los que ellos traían como seña de identidad.

Él por una orilla, ellos por la otra, todos vinieron por el mismo río, ese que desemboca en el reino de la felicidad. Se habían nutrido de escrituras sagradas que, cada una a su modo, desentrañaban el misterio de la verdad. En ambos casos lo hicieron por intermedio de terceros, sin acudir a las fuentes primarias. Gracias a los exégetas del catolicismo y del marxismo (o en una combinación de ambos, en el caso de muchos de los seguidores) comprendieron que la sociedad es un rebaño que desconoce el camino y por tanto debe ser guiado hacia el lugar en que se encuentra el mejor pasto y el agua más pura. Entendieron que la clave de la felicidad la tiene únicamente el buen pastor. Así concluyeron que su objetivo en la vida, tanto desde una mirada como desde la otra, era conducir al rebaño desorientado. El pastor que debía encargarse de esa dura tarea era, para los unos, el partido, la vanguardia o simplemente el grupo esclarecido. Para él, solo podía encarnarse en una persona, alguien con las condiciones de liderazgo que exigía una tarea en la que no podría permitirse el debate y la duda (llevaba grabada la cita, supuestamente ignaciana, que convierte en sinónimos a la disidencia y la traición).

La confluencia era prácticamente inevitable. Las diferencias de criterios eran matices que no podían empañar la convivencia en el espacio compartido. La misión pastoril preasignada por las respectivas escrituras superaba cualquier diferencia de interpretación que pudiera hacerse. La tradición jerárquica, personalista teleológica (y también teológica) de las izquierdas ofrecía el trasfondo adecuado para reconocer que la voluntad colectiva –aquella que era revelada a los escogidos de una y otra orilla- debía encarnarse en un solo individuo. La confluencia de la historia de las izquierdas con la biografía del *boy scout* misionero y predicador era algo que en algún momento debía ocurrir. Y así ocurrió. Los intentos previos habían fracasado principalmente porque no encontraron a la persona adecuada. Lo intentaron reiteradamente, pero, al ser personajes que venían de la política o de las armas, carecían de la mística requerida. Tampoco tuvieron éxito con los que surgieron de sus propias filas porque solamente habría sido un *primus inter pares*, y lo que se necesitaba era un *primus supra pares*.

Los diez años de convivencia fueron no solamente de armónico encuentro entre los valores de uno y de otros, sino que sirvieron para su fortalecimiento. Si al comienzo, en los meses entusiastas de la Asamblea Constituyente, hubo un minúsculo grupo de la izquierda gobernante que intentó romper la propia tradición de su matriz con medidas progresistas (un tímido *aggionamento* se diría), solo duró los minutos necesarios para que la noticia llegara a Quito y volviera con la amenaza de renuncia del presidente. Fue suficiente, todos entendieron que se movían en el campo en el que siempre estuvieron, aunque en esta ocasión había un pastor que estaba siempre alerta para recordárselos. Solo hubo un intento adicional cuando tres asambleístas –mujeres- propusieron que se debata el derecho al aborto en caso de violación. Como consecuencia, debieron acatar pasivamente su inhabilitación política por un mes, con la prohibición de hablar en público durante ese tiempo. No hubo más herejías.

No faltaron quienes, desde afuera, sostuvieron que todo se debía a que Correa había impuesto sus valores de *curuchupa*, aquel calificativo de la tradición serrana derivado del mestizaje quechua-español: cola de cura. Sin duda, algo de eso había, pero es insuficiente para comprender la pasividad de los otros, los que hablaban en nombre del progresismo. Si hubieran querido detenerlo ellos podían haberlo logrado en muchas oportunidades. Las más claras fueron las dos ocasiones en que obtuvieron la mayoría absoluta. La primera fue en la Constituyente, donde cedieron ante el chantaje de Correa que amenazó con la renuncia a la presidencia. Para él y para cualquier persona quedaba claro que en adelante se impondría esa voluntad, como en efecto sucedió la segunda vez, cuando suspendieron a las tres asambleístas ante el silencio del bloque parlamentario.

Sí, podrían haber vencido esa voluntad *curuchupa* si se hubieran propuesto hacerlo. Pero, no lo intentaron. El silencio fue la norma frente a los vetos y sobre todo a las arremetidas del líder y de sus amigos más cercanos que ocupaban altos cargos. No fueron pocos los casos en que llegaron a la agresión, como cuando el secretario jurídico de la Presidencia se refirió a algunas asambleístas de la propia bancada gubernamental como las *mal culeadas* (así de vulgar y barriobajero fue el término, y lo dejó por escrito). Nunca hubo una protesta desde esas filas. Tampoco hubo una voz que cuestionara la satisfacción de Correa con las minifaldas y las piernas de las asambleístas, que, según lo aseguró, eran los resultados de la equidad de género. El silencio se impuso cuando aseguró que en el regalo que le había enviado Raúl Castro junto a los habanos y al ron "solo faltaba que salga la mulata de la caja". Tampoco dijeron algo cuando comentó que la canción *La quiero a morir* es la del soltero, porque la del casado es *la quiero matar*.

No se puede sostener que haya sido únicamente por la razón de Estado, a la que acudieron frecuentemente aludiendo al costo político que podía tener para el *Proyecto*. Es claro que aceptaron la presión del presidente y pasaron de las expresiones de este porque no afectaba a aspectos de fondo. No iba contra principios o valores arraigados entre ellos (y ellas, por supuesto). En el acervo histórico de esas izquierdas no constaban esos temas. Eran desviaciones pequeñoburguesas que, más bien, hacían un ruido que podía ser una interferencia para el objetivo fundamental. Para decirlo en los términos del politólogo Albert Hirschman, no acudieron a la *voz* ni a la *salida*. No es que desecharan esas opciones, es que no las conocían. No podían conocerlas, porque la salida y la voz constituyen actos de la voluntad y ellos solo conocían la obediencia y la lealtad, que son la fe. Una fe en el proyecto y en el caudillo que lo encarnaba. El silencio, la aceptación pasiva e incluso la sonrisa cómplice y las justificaciones venían muy de adentro, se asentaban en concepciones largamente leudadas en esos círculos. La confluencia de esas izquierdas con Correa fue el encuentro feliz de dos corrientes reaccionarias. La utopía era una sola y tenía esa marca.

El agujero negro de la *Hybris*

Todo se alineó para que Rafael Correa pudiera gobernar de manera continua no solo más tiempo que todos los demás presidentes de la historia contemporánea del país, sino con muchísimo más poder, en todos los sentidos de la palabra. En buena parte eso se debió a lo señalado en las páginas anteriores. Pero, eso es válido principalmente para comprender el sometimiento de las izquierdas. Estas ya cargaban una historia de fracasos vividos en las ocasiones en que fueron a remolque de Abdala Bucaram, de Lucio Gutiérrez e incluso, una parte de ellas, de Álvaro Noboa, el arquetipo de la odiada oligarquía. En todos esos casos –excepto el último porque nunca llegó a gobernar- fueron rápidamente excluidos, como ocurrió en épocas anteriores cuando sus antecesores se colgaron de Velasco Ibarra y de cuanto caudillo civil o militar lanzó un par de palabras altisonantes. No eran una fuerza social y política que les resultara útil a esos gobiernos, de manera que no podían ser el único factor necesario para explicar el encumbramiento de Correa. Hubo algo más.

La favorable situación económica, propiciada en parte por la odiada dolarización (que, tanto las izquierdas como Correa, querían eliminar hasta que llegaron al gobierno y sintieron sus beneficios), fue sin duda importante. Sabido es que cuando hay bonanza económica la población mira con buenos ojos a los gobernantes. Pero, por sí sola no es explicación suficiente para una seducción que envuelve a la mayoría de la población en grado superlativo. En ese caso es necesario ir hacia la otra punta del ovillo, la de las mentes de las personas, la de la subjetividad, aquella donde se instaló la imagen del ser marcado por el destino para guiarlas y conducirlas hacia el anhelado mundo del bien. Es una dimensión casi desconocida, que se configura por la convergencia de los anhelos colectivos con la personalidad del elegido. Son dos subjetividades que se necesitan mutuamente y que deben converger en el lugar adecuado en el momento preciso.

Adentrarse en los rincones de esas dos subjetividades, la colectiva y la individual, es entrar en un agujero negro. Como todos los de su estilo, puede apreciarse únicamente desde una distancia sideral por medio de poderosos telescopios y solo lleva a suposiciones que deben esperar siglos para ser comprobadas. La ciencia política, las teorías de la comunicación y más recientemente la neuropolítica se han aventurado al análisis de ese agujero. Buena parte de las hipótesis –o especulaciones, como dirían los más quisquillosos- ponen el énfasis en las características individuales de los políticos, en su personalidad. Generalmente sustituyen al telescopio, que enfoca a las dos subjetividades, por el microscopio, que se concentra en la del individuo. Por esa vía recuperaron el concepto de *hybris* que más de dos milenios atrás acuñaron los griegos para explicar el comportamiento de los políticos que se envanecen con el poder.

Desde su versión original, el término se viene utilizando para calificar la conducta de un personaje que, al adquirir poder, actúa con orgullo desmesurado, hace gala de enorme confianza en sí mismo y es insolente e irrespetuoso en el trato con los demás. Es el individuo que encuentra placer en demostrar superioridad e incluso en humillar a propios y extraños (o, más bien, amigos y enemigos, porque para él todo contradictor es un enemigo). Es el que se autodefine como superior al resto de personas y se toma a sí mismo como medida para calificar lo positivo y lo negativo en el accionar público. No es difícil

que ese camino conduzca a la locura, hasta llevar al personaje a tomar decisiones perjudiciales para él y para sus gobernados, como lo subraya una autora a partir del análisis de experiencias históricas como la Guerra de Troya, la Reforma Protestante o la pérdida de Norteamérica por los ingleses. Es que, como enfatiza ella y corrobora otro autor, esas personas se resisten a cambiar de dirección porque ello supondría admitir que han cometido un error.

Al colocar bajo ese microscopio a Rafael Correa se encuentran casi todas las catorce características que, según David Owen, uno de los autores que más ha profundizado en este tema, deben estar presentes para considerar que una persona presenta el síndrome de *hybris*. La primera de esas, la inclinación narcisista, se perfiló en los primeros días de su presidencia, cuando dijo, muy suelto de cuerpo ante algunos colaboradores y medios de comunicación, *ustedes saben que yo nunca me equivoco*. Aunque esta fue rápidamente borrada de los registros gráficos y sonoros, la repitió con otros términos en múltiples ocasiones, especialmente cuando sostuvo que *los hechos terminan siempre por darme la razón*. Eran otras palabras, pero el narcisismo gritaba con la misma fuerza. Una fuerza que parecía provenir del patrimonio familiar como deja ver su hermano que las repite con frecuencia.

Una característica generalizada entre los políticos es la realización de acciones que tengan probabilidades de situarlos bajo una luz favorable. Pero, la particularidad de los portadores del síndrome de *hybris* es que la llevan a su extremo, hasta el punto de ignorar los efectos negativos que puedan derivarse de sus decisiones. Es un síntoma que se agudiza cuando se combina con la excesiva confianza en su propio juicio y el desprecio del consejo y la crítica ajenos, que es otra de las características. Meterse en un cuartel policial para sofocar una protesta que podía resolverse en la oficina de un ministro solamente se explica por la necesidad de colocar su imagen en el lugar al que no pueden -ni deben- aspirar los mortales. Aunque todos los políticos buscan la luz favorable, muy pocos de ellos –y podría decirse que en el Ecuador ninguno- contó con el trabajo escenográfico construido alrededor de la figura presidencial. El enorme reflector no se apagó un solo minuto de su larga presidencia.

La predisposición exagerada por la imagen y la presentación –otra de las características- fue manejada magistralmente por Correa y sus asesores de imagen. Su negativa al uso de traje y corbata, presentada como signo de ruptura con la estética *pelucona*, sirvió para que él creara un estilo propio con las camisas artesanales que anteriormente eran el distintivo de los meseros de los restaurantes para turistas. Pantalones y calzado de marca completaban la imagen alternativa que era cuidadosamente preparada. Cuando los integrantes de su círculo íntimo quisieron imitar el atuendo (imposible abandonar la obsesión de las izquierdas por los uniformes) chocaron frontalmente contra la prohibición expresa. Nadie más que él podía vestir de esa manera. El líder es uno solo y eso debe demostrarse incluso en su ropa. Sobre todo, en su ropa. De modo más instintivo que consciente, le daban la razón a un ideólogo reverenciado por algunos de sus seguidores, el argentino que afirmaba que el representado no existe sin el representante y que depende

de él para la construcción de su identidad. El representado no puede ocupar el lugar del representante, que es el único portador de la identidad. Y eso debe hacerse evidente en la imagen. En la ropa.

Se necesitarían decenas de páginas para recoger las evidencias de la forma mesiánica de hablar y la exaltación de sí mismo, que es otro de los síntomas. Las intervenciones de tres o más horas de los sábados (las *sabatinas*) servían no solamente para reprender a los ministros, someter a control estricto a sus asambleístas, ordenar a jueces y fiscales (con el dictado de los fallos correspondientes), denigrar a los medios de comunicación (cloacas era su calificativo preferido), inventar atentados e injuriar a quien hubiera expresado una opinión diferente a la suya. Servían, sobre todo, para reproducir paso a paso las páginas de su diario personal correspondiente a los siete días previos. Las decisiones a las que estaba obligado por el puesto que ocupaba se transformaban en hechos épicos, hazañas que él y solamente él era capaz de realizar. Era el registro del paso de un ser excepcional por la historia de un país carente de historia. Nunca faltó la referencia al abundante menú de la comida típica disfrutado en cuanto pueblo visitaba, logrando que la identidad nacional transitara por el viaducto digestivo de quien encarnaba a la patria. Nada tan apropiado como su propio cuerpo para materializarla.

También serían necesarias otras decenas de páginas para recoger las expresiones de la identificación de sí mismo con el Estado hasta el punto de considerar idénticos los intereses y perspectivas de ambos. El proceso de identificación partía por considerarse el jefe de todo el Estado, materializado en el conjunto de las entidades estatales: *el presidente de la República no es solo jefe del Poder Ejecutivo, es jefe de todo el Estado ecuatoriano, y el Estado ecuatoriano es Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, Poder Electoral, Poder de Transparencia y Control Social, superintendencias, Procuraduría, Contraloría, todo eso es el Estado ecuatoriano*. Pero, el Estado era solo la expresión formal, su presencia debía abarcar a la nación: *sé bien que yo ya no soy yo, soy todo un pueblo*. Encarnado en él estaba el arriba y el abajo, el que impera en una y otra dimensión. Para que no queden dudas al respecto, al policía que dio una versión distinta a la suya le hizo saber, *para que sepa con quién se está metiendo*, que *soy el presidente de la República, pedazo de majadero, tú eres mi subalterno*. Era el portador único del interés de la patria, su palabra era la palabra de esta y no podía haber otra que la contradijera. No importaba que los hechos demostraran lo contrario.

Para los personajes de esa altura, cualquier tribunal terrenal resulta incompetente, no se diga la opinión pública. Sus jueces son Dios o la Historia. *La historia me absolverá*, fue la frase que emocionó por décadas a las izquierdas latinoamericanas desde que se enteraron de que la había pronunciado, en sus primeros pasos, el líder cubano. Antes la habían dicho otros personajes que veían la tierra desde su atalaya de la eternidad. Rafael Correa la hizo suya y pasó a engrosar el selecto grupo de quienes están por encima de las leyes y del parecer de las personas comunes y corrientes. No sería su obra ni sus actos los que quedarían a juicio de sus contemporáneos y de las generaciones que se sucederían en la historia iniciada por él. Debían atenerse a rendir testimonio del paso de él por la tierra.

Su Dios –el único, el verdadero- lo puso ahí y será Él quien pueda hacer una observación si acaso quedara algún cabo suelto. Quinientos años antes, Girolamo Savonarola confiaba en que, desde el más allá, el Todopoderoso apagara la hoguera en que se estaba calcinando porque no había hecho otra cosa que encarnar la Verdad. La justicia del muy terrenal Papa Borgia demostró que la prédica más encendida puede terminar en cenizas.

Enfocado en la *hybris*, el microscopio muestra toda la complejidad de la subjetividad del individuo que siente la misión que le ha sido asignada. Es la que se reafirma en cada acto, con cada palabra, con cada gesto. Está ahí, permanece. Solo varía para acrecentarse. Es la una punta del fenómeno, la más rica en materia prima para entrar en las complejidades de la psicología del personaje. La otra mirada, la del telescopio, es más enredada, abarca a la multitud, a la nebulosa en constante transformación. Son demasiadas subjetividades que se expresan al unísono, cada una de ellas con una dirección que cambia frecuentemente, más que por voluntad propia porque navega sin brújula. Si para el síndrome de la *hybris* ha sido posible identificar casi una decena y media de síntomas, para el encanto colectivo se han aventurado solamente explicaciones generales. La suma de los estados de ánimo no tiene un resultado constante. Generalmente ofrece sorpresas.

La nebulosa en la que navegó y deslumbró la *hybris* de Correa estaba conformada por partículas de decepción, desconfianza, temor, frustración, escepticismo, impotencia y victimismo. La crisis económica de los últimos años del siglo anterior había dejado esa amalgama de sentimientos que llevaban al rechazo y a la apatía de todo lo que oliera o sonara a política. El *que se vayan todos* sonaba incansablemente en cualquier reunión de más de unas pocas personas. Se habían ensayado todas las posibilidades, con elecciones y derrocamientos de gobiernos, manifestaciones callejeras, formación de nuevos partidos y la infaltable aparición de los salvadores de la patria y del mundo. Por la desesperación, muchos abandonaron el país para convertirse en quienes más adelante, con el paternalismo propio de la revolución, serían bautizados como los hermanos migrantes.

El pesimismo, que fue el resultado de la suma de esos sentimientos, se impuso hasta que llegó a anular cualquier iniciativa que pudiera provenir de la sociedad. Organizada o no, esta bajó los brazos y optó por las salidas individuales. Conocido es que la más repetitiva de esas salidas individuales es la que manda todo al diablo, con un sentimiento que empata con el *adanismo* de la vieja izquierda. Una vez auto declarada incompetente, la sociedad (si así cabe seguir llamando al amontonamiento de sujetos que se ven pero no se miran, que hablan pero no se escuchan) se convence de que no puede escoger lo más conveniente y ni siquiera el mal menor. Por el contrario, opta por el mal mayor, el que arrase con todo, aunque en ese todo esté el mismo sujeto que lo piensa y lo hace.

Ya lo hizo en varias ocasiones. La primera, muy tempranamente, cuando aún no se había producido la crisis bancaria con su traumática secuela, al elegir a Abdala Bucaram, la expresión más acabada del antipolítico que en cada palabra y con cada acción anunciaba el caos. Lo repitió después de la crisis y sin dar tiempo a que se concretaran los efectos positivos de la dolarización, con Lucio Gutiérrez, el militar de escasas luces que encabezó

el golpe de Estado que más se adecuó a la definición clásica de este tipo de eventos. Como estaba previsto, ambos fracasaron en el objetivo de producir el revolcón y fueron desalojados por la misma masa informe de individualidades desesperadas que los encumbró. Pero, después de jugar con la prueba y el error, después de los fracasos de los antisistema y de los *outsiders*, esa seguía siendo la única opción posible para una sociedad que había perdido la confianza en las instituciones y en la racionalidad del juego político.

Ese conjunto de individuos desesperanzados y convencidos de ser las víctimas permanentes de fuerzas externas fue la pista ideal para el aterrizaje del personaje que llevaba el pesado cargamento de la *hybis*. Ellos lo necesitaban. Él no podía existir sin ellos. De ahí en adelante, él se haría cargo de la suma de las angustias que, gracias a la magia de la psicología proyectiva apoyada por la propaganda permanente, se irían transformando en un delirio ciego que hipotecaba las voluntades individuales a la palabra y las acciones del designado. Juntas, la *hybris* y la nebulosa habían oscurecido aún más el agujero negro. Fue el ámbito ideal para instalar la restricción de libertades y la corrupción ilimitada

La utopía reaccionaria

Que se vayan todos, gritaron reiteradamente y, en efecto, se fueron todos, encabezados por los que gritaban. El grito se transformó en *vayámonos todos*. Dejaron el escenario vacío. Allí, sin más actores que los integrantes de la comparsa y los tramoyistas, el protagonista campeó a su antojo, sin límites, sin guion, sin el molesto apuntador que pudiera corregirle porque nunca es necesario para quien jamás se equivoca. El resto, la suma de individualidades sin argamasa que las compacte, ganaron el formidable derecho a aplaudir. Largos diez años escenificó su monólogo hasta imponer su relato en el público que vitoreaba y festejaba cualquier acción, aunque contradijera a la inmediata anterior que, por supuesto, también había aplaudido. El relato, como lo dijo varias veces, era él y nadie más que él. Porque el pueblo, como también lo dijo varias veces para que no queden dudas, era él. Solamente él.

El actor solitario en el escenario vacío impuso el relato de la Revolución, con mayúsculas. Con ello entroncaba sus acciones con la prédica heroica que recorrió América Latina en décadas pasadas (de la que él no formó parte porque andaba ocupado en importantes tareas de *boy scout* y de misionero). Conscientemente o no, también entroncaba con la tradición ecuatoriana de llamar revolución a los cambios de gobierno que se hacían al margen de las normas establecidas (que fueron la mayoría en el siglo XX). No era casual esa convergencia de las tradiciones. Ambas consistían en acciones de grupos minúsculos –o de un individuo iluminado- que señalaban a la sociedad no solamente el camino por el que debía transitar, sino los anhelos y las creencias que debía tener. La vanguardia heroica no difería en lo sustancial, en ese aspecto, de la vieja oligarquía con su comisión de notables. Ambas tradiciones eran profundamente elitistas, relegaban a la sociedad al papel de comparsa pasiva. Pero, al nutrirse de ambas consiguió el cimiento histórico que necesitaba para afirmarse con la prédica de la Patria (otra vez la mayúscula y otra vez el

concepto excluyente, tan distante de la visión de la humanidad como hermandad que tenían los teóricos revolucionarios).

El modelo fue reaccionario en esos orígenes y en su anclaje en la historia, con su prédica del primitivo sentimiento patriotero. Lo fue en el modelo político que intentó imponer (no construir conjuntamente, sino instaurarlo desde la cima). La Constitución fue la primera evidencia de la dirección que tendría el proceso Su resultado, el texto constitucional más largo, repetitivo y contradictorio, lo dejó muy claro, con el Estado omnipresente y la ciudadanía pasiva, esperando para recoger lo que cayera. Los derechos civiles, aquellos que constituyen la base de la convivencia ciudadana, comenzando por el respeto irrestricto a la vida y al pensamiento individual, fueron relegados a segundo plano. Los derechos políticos quedaron entrampados en la maraña institucional con la que se quiso enterrar a Montesquieu y resucitar a Carl Schmitt.

Por encima de los derechos civiles y sociales se situaron discursivamente los derechos sociales. Su introducción era apenas parte del relato que se comenzaba a construir, una apariencia porque establecer un conjunto de atribuciones y acciones estatales no equivale a reconocerlos como derechos inmanentes de las personas. Según la más amable de las interpretaciones, se reconocían las necesidades y las carencias, pero no el derecho de las personas a liberarse de ellas. Le correspondía a la minoría selecta de las mentes lúcidas solucionarlas. Eran estas las que debían traer la revolución redentora. La sociedad debía esperar y agradecer.

La visión redentora nacía del victimismo largamente alimentado por unos y otros en la historia del país. La visión colectiva de la sociedad virtuosa e ingenua, avasallada por conquistadores, vecinos siniestros, imperialistas ambiciosos y decenas de enemigos al acecho, era la base perfecta para la implantación de un modelo como ese. La víctima requiere de la redención y esta no puede sino venir desde fuera de ella. Debe ser una voluntad superior. Alguien que no solamente quiera, sino que pueda enfrentarse a los demonios que impedían su crecimiento, que le cerraban el paso hacia su madurez. Cuando creyó encontrar al portador de esa voluntad, lo escogió y volvió a escogerlo una y otra vez. Fue la propia sociedad, desde su perspectiva de víctima, la que desechó la única utopía válida en democracia, la que anhela la ampliación de las libertades y la plena realización individual. Escogió la utopía reaccionaria.

Los lunes de esos tiempos

HYBRIS
6 de noviembre de 2017

"Sé bien que yo ya no soy yo, soy todo un pueblo". Fueron palabras textuales de Rafael Correa, dichas el 1 de mayo del 2015. Se podría suponer que eran el producto de la emoción, una de esas frases que se escapan en determinados momentos de euforia, cuando se invierten los flujos internos y el hígado manda órdenes al cerebro. Se podrían añadir las condiciones del momento. Su expresión ocurrió cuando llegaba a la parte culminante del discurso de cierre de la manifestación impulsada por su gobierno, con organizaciones creadas desde arriba por ese mismo gobierno. También debe haber puesto su parte la fogosidad de la gente que, llegada en buses fletados, agradecía la posibilidad de disfrutar de un soleado día en Quito con un agradable refrigerio y quizá algún viático adicional. En fin, podía ser producto de las circunstancias que despiertan sentimientos difíciles de controlar.

Pero, si fuera así, parecería que las emociones fueron ganando mucho terreno en las actuaciones del exmandatario, porque algo más de un año después, el 20 de septiembre de 2016, repitió exactamente las mismas palabras. En un acto en Manabí, organizado por el grupo que impulsaba su re-reelección –y que dijo haber recogido más de un millón de firmas sin salir a la calle-, hizo uso de aquella frase. No cambió un solo término, no alteró la sintaxis, como si la tuviera bien repasada. Se deduce, entonces, que no era el producto de emociones o sentimientos incontrolables provocados por las circunstancias. Seguramente había algo más de fondo y, dado que se trata de una persona que ocupó la primera magistratura, su explicación nos concierne a todos.

Posiblemente los primeros pasos en la búsqueda de explicaciones se encuentren en dos libros que, desde ópticas muy diferentes, abordan el tema de la relación de los seres humanos con el poder. El primero es En el poder y en la enfermedad, de David Owen, que aporta valiosos instrumentos para comprender lo que se conoce como el síndrome de hybris. Según el autor, este no es en sí mismo un trastorno de la personalidad, sino más bien algo que se desarrolla cuando los dirigentes llevan un tiempo en el poder. Es el sentimiento de considerarse infalibles e irremplazables. "Quienes se ven afectados por el síndrome de hybris –dice Owen- siempre se creen insustituibles y empiezan a ver con desdén a todo posible sucesor". Sostiene que, de catorce síntomas que lo caracterizan, basta que se presenten cuatro para determinar que una persona padece del síndrome.

El otro libro es El séptimo Rafael, de Mónica Almeida y Ana Karina López, que podría calificarse como una biografía política del expresidente. En excelente ejercicio de periodismo de investigación, demuestran cómo la vocación de líder y su capacidad de

trabajo iban siempre acompañadas de un carácter irritable, una autoestima recargada y un desprecio a las opiniones ajenas. Los antecedentes de la juventud van perfilando a ese personaje que, una vez en el ejercicio gubernamental, presentó por lo menos el doble del mínimo de síntomas sugerido por Owen.

IZQUIERDAS
28 de febrero de 2005

Alguien sostenía que en momentos de crisis Europa tiende a inclinarse a la derecha, mientras en la misma situación América Latina se corre a la izquierda. Según ese análisis, en el primer caso se buscarían las soluciones en las fuerzas del mercado y en los sectores más poderosos de la sociedad, en tanto que en el segundo se las trataría de conseguir por la acción del Estado y por la participación protagónica de los sectores menos favorecidos. Pero, por sugerente que resulte esa explicación, parece que no siempre ocurre de esa manera. Para poner en duda la afirmación solo cabe recordar que la derecha predominó en nuestro continente durante los años ochenta, cuando vivía la aguda crisis de la deuda, mientras que actualmente cuando hay más estabilidad está tomando mayor fuerza la izquierda.

En efecto, con la posesión como presidente de Uruguay del dirigente de izquierda Tabaré Vázquez se elevará a seis el número de países con gobiernos de esa tendencia democráticamente elegidos. Es probable que Bolivia y México se sumen en poco tiempo a ese grupo, lo que lo transformaría en un bloque de importancia continental (incluso Ecuador podría integrarse en la corriente, con León Roldós, bajo la condición de que se realicen las elecciones del año 2006 y sobre todo que sean limpias, lo que está en seria duda). Pero para contar con un bloque y para actuar en conjunto necesitarían que entre ellos existiera no solamente la autodefinición de izquierda sino que actuaran dentro de una misma tendencia, con objetivos similares y hasta con procedimientos parecidos. Sin embargo, una rápida mirada a cada uno de esos gobiernos deja ver más diferencias que semejanzas.

Las características de los gobiernos de Venezuela y Chile llevan a considerarlos como expresiones de corrientes totalmente contrarias y no como parte de una misma tendencia; la distancia entre Hugo Chávez y Ricardo Lagos es la que existía entre Stalin (o Mussolini) y Willy Brandt. Al gobierno peronista de la Argentina se lo puede considerar de izquierda por el vacío que quedó en ese lado del espacio político, es decir, porque no hay nadie más hacia su izquierda, aunque él esté cómodamente en el centro; su negativa a aceptar las recetas del FMI es cuestión de supervivencia, no de ideología. Al presidente de Panamá le viene la izquierda por una herencia paterna felizmente despojada de populismo y mesianismo, pero nada más que eso. Lula da Silva, en Brasil, combina las raíces históricas de la izquierda latinoamericana con el pragmatismo liberal en la conducción gubernamental. Si se añaden el boliviano Evo Morales y

el mexicano López Obrador, el panorama será aún más heterogéneo.

Lo importante de todo esto no es la posibilidad o la imposibilidad de conformar un bloque regional, sino que talvez la misma disparidad configure la mejor oportunidad para que *las izquierdas* puedan renovarse y redefinir sus planteamientos. Hasta ahora han tratado de ser *una izquierda* anclada en el pasado, sin propuestas adecuadas para el momento actual. Puede ser positivo el paso del singular al plural.

SUBALTERNOS, VERDADES Y CANDADOS

1 de noviembre de 2010

Comenzó tuteándole, no con ese tuteo de cercanía, amistad o confianza, sino con ese otro que establece jerarquías y marca tajantemente las distancias. Para que no queden dudas de que él está arriba y el otro está abajo y para "que sepa con quién se está metiendo", le dijo rotundamente "soy el presidente de la República, pedazo de majadero tu eres mi subalterno". Así, con pocas palabras, le hizo saber que ese es el orden de la vida, donde cada uno ocupa el escalón que le corresponde sin ningún elemento que los iguale o, más simple aún, sin nada que los coloque en el mismo nivel como ciudadanos o siquiera como seres humanos. De golpe arrasó con todo lo logrado en materia de igualdad y de derechos. Si se toma a la Revolución Liberal como punto de partida de la lucha por esos principios en nuestro país, se puede decir que sin mayor trámite se comió más de cien años de luchas populares y de persistentes intentos de transformación de la educación.

Si así se expresara cualquier hijo de vecino, en muchos países del mundo sería causa suficiente para que algún fiscal o un juez actúen de oficio. En nuestro medio, que lo haga el presidente de la República es motivo del aplauso desenfrenado y eufórico de la masa que lo escucha en vivo y en directo. Será, seguramente, que la cercanía con su líder automáticamente los coloca en el escalón de arriba y que cuando se toca el cielo con la mano no cabe recordar sus pobres vidas de subalternos. Penosamente, muchos de ellos habrán podido comprobar el lunes siguiente, al llegar a su trabajo, que el ejemplo presidencial se difunde con eficacia y rapidez.

Pero, la jerarquía no llega sola. Con ella viene la verdad. Y la verdad es una, nada más que una. La verdad sólo emana del que está arriba. No hay discrepancias, ni opiniones diversas, ni interpretaciones, ni pareceres, solamente hay una palabra y ante ella todo lo demás es mentira. Por eso, el subalterno no puede ser sino un mentiroso. Atreverse a declarar "a la televisión internacional a la CNN a los medios de comunicación que el Presidente no estuvo secuestrado" es una mentira que, por ir en contra de la verdad única e inapelable, se transforma en "parte de esa conspiración donde se trató de matar al Presidente". Entonces, el subalterno pasa a ser un "tipejo" al

que hay que caerle con fiscales, jueces y degradaciones. Que no queden dudas, "aquí el que manda es el presidente de la República".

La historia termina con el subalterno en prisión. Es que, además de todas esas violaciones al orden natural de la vida, donde hay un arriba y un abajo, "puso candado para no dejarnos entrar". Esto quiere decir que violó también el orden natural de los secuestros, en que se pone candado para que el secuestrado no salga. Acá, por declaración propia del secuestrado –que, como se sabe, es la verdad única- fue para que no entrara.

DEFINICIONES

27 de agosto de 2007

Sabemos que para buscar la verdad hay que ir a la página web de la Presidencia de la República. Bien, ahí está ahora mismo la verdad del socialismo del siglo XXI, expresada concisamente por su impulsor máximo en nuestro país, don Rafael Correa, presidente de la República. Si alguien tenía dudas sobre el contenido de ese concepto que recorre América Latina con las reproducciones legítimas de la espada del conservador Bolívar, ahora puede comenzar a encontrar las respuestas. Solamente comenzar, porque siendo un proceso en construcción "en el momento que creamos tener todas las respuestas habremos fracasado, como el socialismo clásico". Por tanto, ya sabemos cuál fue el error de este último y, de hecho, podemos deducir que el secreto del actual consistirá en no tener todas las respuestas o, dicho de otra manera, en tener una utopía. Es lo que sostiene el ciudadano-presidente cuando, citando a Galeano –el uruguayo que tiene un bargueño lleno de frases-, dice que "la utopía está en el horizonte. Camino dos pasos y ella se aleja. Diez pasos, y el horizonte se corre diez pasos más allá". La cita presidencial termina diciendo "Y entonces, ¿para qué sirve la utopía? Para eso, sirve para caminar" (lo mismo decía Nancy Sinatra de sus botas, pero dejémosla de lado porque eran demasiado reales como para ser una utopía).

Esa utopía, ese horizonte que se aleja, se define por la diferencia entre valor y precio, sobre la que ya llamó la atención Serrat cuando le contaba y cantaba a su madre todo lo que había aprendido en la vida. Así, en el socialismo de este siglo debe estar claro que "hay cosas de inmenso valor, pero sin precio, como la seguridad ciudadana, la paz social y el medio ambiente". Por tanto, ya pueden ir enmendando su error quienes creían que la seguridad tenía un precio traducido en policías, ojos de águila, educación ciudadana, comités barriales y artefactos múltiples, o quienes suponían que hay que invertir recursos para mantener el medio ambiente o, incluso, que se podía dejar de producir petróleo a cambio de viles monedas extranjeras para no afectar ecosistemas sensibles.

Otro elemento básico para entender el socialismo del XXI es la diferencia que existe entre valor de uso y valor de cambio. Al parecer, ésta no es la misma que detectó don Carlos Marx (el alemán, no el de Cañar), sino la que existe entre un ignorante y un conocedor del tema, ya que puede producirse una situación como la que cita el presidente: "Hay un

cuadro que me fascina, pero cuesta mil dólares y yo gano apenas 100 dólares. En cambio, un ignorante que gana 20 000 paga por ese cuadro los 1 000 dólares y no sabe si está al revés o al derecho, pero sí está dispuesto a pagar los mil dólares. Esos mil dólares no reflejaron el valor que tenía el cuadro para quien no pudo comprarlo, solo representa la cantidad de dólares que tenía quien lo compró".

Interesante este socialismo, y sobre todo nuevo, muy nuevo.

SOCIALISMO NEOLIBERAL
13 de abril de 2009

Con la infalibilidad y la seguridad que le caracterizan, el economista Correa, ministro de Economía, sostuvo que la entrega de los fondos de reserva sería una medida negativa porque afectaría a los trabajadores y descapitalizaría al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Con la infalibilidad y la seguridad que le caracterizan, el economista Correa, presidente de la República, sostuvo que la entrega de los fondos de reserva será una medida positiva porque beneficiará a los empleados y no descapitalizará al IESS. No hay duda, siempre es bueno contar con alguien que tenga plena certeza de lo que dice y de lo que hace. Una certeza, además, que se contagia fácilmente y que lleva a todos, desde el director del Seguro hasta el último asambleísta de brazo alzado, a defender a rajatabla la inapelable decisión.

Con la sapiencia de economistas, y no de contadores, sostienen que treinta y cinco millones mensuales que dejan de entrar al IESS no significan nada para éste. Pueden caerle con toda la contundencia de la verdad a quien se le ocurra decir que son cuatrocientos veinte los millones que resultan de multiplicar por los doce meses del año y que son mil doscientos sesenta los que se obtienen al cabo de los tres años que debe permanecer guardado ese dinero. Eso no sirve, dicen, porque esa plata sale tan pronto como entra dentro de un flujo constante. Solo a un mediocre se le podría ocurrir que esos mil y tantos millones pueden ayudar ahora, en plena Revolución Ciudadana, en algo a la capitalización del Instituto y por tanto a los planes de pensiones y de salud del sistema. Antes sí era así, tanto que si se hubieran eliminado se habría producido inmediatamente la descapitalización. Son los misterios de la economía que no están al alcance del común de los mortales.

Otro misterio imposible de entender es la relación entre la seguridad social y el socialismo del siglo XXI o de cualquier siglo. Se suponía que una buena seguridad social era uno de los pilares del socialismo, por lo menos del que trata de ser compatible con la democracia. Un eficiente seguro de salud y un sólido sistema de pensiones eran los elementos básicos sobre los que descansaba el Estado de bienestar. Cualquier partido socialista colocaba a esos elementos en el mismo nivel que la redistribución del ingreso y la educación universal. En cambio, cualquier neoliberal que se respetaba sostenía que la mejor política social era una buena política económica, y por tanto había que ponerle el dinero en el bolsillo a la gente para que se defienda por su cuenta en el mercado. De paso, decían los neoliberales, se reactivaría la economía y se reduciría el tamaño del

Estado. Pero eso fue en el pasado lejano de hace unos tres años. Lo revolucionario de hoy es la reactivación del mercado, la plata en el bolsillo, lista para el consumo inmediato.

Sabia, grandiosa y como siempre infalible la medida que pone el neoliberalismo al servicio del socialismo. Sobre todo, ejemplo de coherencia.

Omertà
1 de octubre de 2011

Resulta increíble que tantos PhD juntos comentan las torpezas que han abundado en los últimos días. Más sorprendente aún es que tantos pregoneros de la honradez asistan impasibles a lo que está pasando. El caso Delgado-Duzak ha servido para comprobar que un título no garantiza inteligencia y que la honestidad es una buena tarjeta de presentación en el estado llano pero es papel higiénico en el poder. No se entiende de otra manera que ninguno de ellos haya salido por lo menos a desmarcarse si no a criticar y protestar enérgicamente por todo este enredo. Han mirado impasibles, como que no fuera con ellos, la cadena de actos vergonzosos que se ha ido eslabonando. Ni siquiera les mosquearon actos como el préstamo graciosamente concedido con garantía de empresas intervenidas (¿se habrán acordado de los préstamos vinculados?), la casita de clase media, el sueldo de la esposa que pasa mágicamente de mil y tantos dólares a seis mil, los fantasmas en la comitiva del viaje a Irán, el homenaje al primo donde la retahíla de insultos no dejó espacio para un solo argumento válido y la destitución de la funcionaria que “filtró información”.

Actitudes como esas solamente pueden tener tres explicaciones, que al final son una sola. Una es que no saben nada, no están enterados. Pero, esto es algo imposible de creer cuando son personajes que están conectados todo el día, a toda hora y en todo lugar. Disponen de la mejor tecnología y de jaurías de asesores que tienen la obligación de mantenerlos informados no al día sino al minuto. Son maestros en eso que se llama la comunicación en tiempo real, así que no va por ese lado la pista, a menos que su forma de no saber sea la misma que rige en ciertas organizaciones de origen italiano.

La segunda explicación es que el famoso proyecto de la revolución es más importante que cualquier detalle sin importancia como es un posible acto de corrupción en los altos niveles. Dentro de esa lógica, el reconocimiento de un error o, más grave aún, de un problemón como éste equivaldría a regalarle un triunfo a la oposición. La negativa a discutir el caso en la Asamblea obedeció a esa posición y, claro, también a la orden perentoria venida desde ya se sabe dónde. Pero, resulta poco aceptable que personas con trayectoria política y académica no reparen en que por negarle un triunfo a la contrarrevolución acepten una gran derrota de su propia dignidad. Esta es la que finalmente sale mal parada.

La tercera es más simple y consiste en la defensa del cargo actual y del que puede venir. En tiempos electorales es mejor no moverse porque hay el riesgo de no salir

en la foto. Así que mejor calladitos y quietos, que el escándalo pasará y la mala memoria se encargará del resto.

Al final, las tres explicaciones confluyen en la ley de la omertà, ese código de honor de los que no tienen honor. No veo, no oigo, no hablo... no pienso.

CEGUERA
21 de marzo de 2016

Hasta hace poco tiempo era imposible imaginar que los gobiernos de izquierda pudieran llegar al final triste que se ve en vivo y en directo en estos días. Los escándalos de corrupción en los altos niveles y la notoria incapacidad para enfrentar la crisis convierten a la racha gloriosa en lejano recuerdo. Lo ocurrido en Argentina, Bolivia, Brasil y Venezuela, presenta descarnadamente los efectos de la explosiva mezcla de esos dos ingredientes que, fatalmente para esos gobiernos, se alimentan mutuamente. La corrupción y la equivocada conducción de la economía en una situación de crisis dibujan el camino que conduce al fracaso.

La defensa de esos gobiernos sostiene que todo se debe a una estrategia cuidadosamente aplicada por las fuerzas reaccionarias de oposición. La *restauración conservadora* sería el objetivo final de los partidos y organizaciones que actuarían como bandas de transmisión de las clases dominantes. Es una explicación simplista y simplificadora de una realidad muy compleja. Es innegable que existen grupos que quieren implantar políticas radicalmente diferentes a las que han impulsado los gobiernos autodenominados de izquierda. Incluso, es obvio que entre los opositores hay algunos que tratan de volver al pasado. Sí, todo eso es cierto, pero no sirve de explicación porque no es más que la expresión de una de las reglas de la democracia. La posibilidad de proponer e impulsar políticas de todos los colores y de todos los gustos e intentar el control de las instancias de poder político es consustancial a ese tipo de régimen.

La explicación se desmorona porque se niega a aceptar los errores propios. La corrupción está a la vista en las fortunas de los mandatarios y sus familiares, en las coimas, en la enrevesada relación de empresarios con funcionarios públicos, en fin, en la sucia presencia del dinero en la política. El equivocado manejo económico se hace evidente en las medidas y las acciones que han tomado esos mandatarios para enfrentar la crisis, así como en su apuntalamiento del modelo primario-exportador. En términos comparativos, son los países con mayor deterioro de todos los indicadores en el continente, y ese no es un problema de la oposición ni de fuerzas ocultas que conspiran contra ellos. Los venezolanos Chávez y Maduro, para poner los casos más destacados, no necesitaron ayuda para llevar adelante la tarea de demolición de una de las economías más grandes de la región. No ver todo eso es engañarse.

Cabe preguntarse porqué aparecen ahora con toda su fuerza la corrupción y la incapacidad de gestión. La respuesta se encuentra en la ceguera. Ceguera de la ciudadanía, que en tiempos de bonanza dejó pasar el robo y la conducción errada de la economía. Si chorreaba para todos,

no había motivo para abrir los ojos. Ceguera también de los mandatarios. En su delirio refundador creyeron que con ellos comenzaba la historia de sus países –dos de ellos hasta cambiaron los nombres- y excluyeron a los demás. Se olvidaron de la política y, ahora que la necesitan, no saben cómo hacerla. Sus experimentos terminan con ellos.

DESAYUNO

17 de septiembre de 2012

El lugar en donde se hace pública la vida privada de los poderosos puede ser un buen indicador de la diferencia entre una democracia institucionalizada y un régimen caudillista. En la primera, el ciudadano común y corriente sabe que esa información se encuentra en la prensa rosa, con papel cuché y fotos de gente linda, o en los programas del corazón –y no del cerebro- de la televisión. La vida de la arcaica realeza europea o los caprichos de los ricos y famosos en nuestro continente están al alcance de quien quiera gastar su dinero y su tiempo en ello. Pero, si algo queda claramente establecido en este caso es que el acceso a esa información depende exclusivamente de la voluntad de cada persona. Puede ser que lo haga porque así alimenta ese oficio tan antiguo y provocador de pasiones que es el chisme o por ese afán, claramente inalcanzable, de emular la vida de esos personajes.

En el régimen caudillista, en cambio, ya no es el ciudadano quien decide ver, leer o escuchar esas informaciones. Ya que el más mínimo gesto de los líderes ha pasado a tener estricto carácter oficial, si todos sus actos se han convertido en un asunto de Estado y si, en definitiva, en su vida se expresa la vida del pueblo o más bien de la nación, entonces ese gesto, esos actos, esos detalles deben ser compartidos con todos (y con todas, por supuesto). Ineludiblemente la vida del líder debe formar parte de la agenda pública de comunicación. Esa vida le pertenece al pueblo y, consecuentemente, el pueblo tiene el derecho a conocerla. Nada mejor, entonces, que un buen aparato de comunicación al servicio de esa noble causa.

En estos regímenes se ha borrado la vieja línea divisoria entre lo público y lo privado, pero no por medio de la politización de la vida privada como propugnaban tanto el feminismo (a propósito, ¿en dónde estará?) como algunas corrientes democratizadoras, sino por la transformación de los actos de unos pocos en la información que deben imperativamente consumir los muchos. No es que estos últimos lo deseen y lo hagan por su propia voluntad y motivados por el chisme o por la emulación. No, en este caso no hay habladurías ni intento de emular la vida del líder que, por definición, es inalcanzable para el común de los mortales, sino que es una de las obligaciones que se derivan de su condición de miembros anónimos de la sociedad. Por ello, saber –por ejemplo- dónde, cuándo, con quién y qué ha desayunado es no solamente un derecho sino la manera adecuada para convertirse en integrantes de la comunidad de fe constituida en torno al líder.

Pero esa transformación de lo público en privado no va sola. Tiene su complemento en la privatización de lo

público, de manera que a nadie le extraña que el relato de las actividades de la semana se convierta en una larga lista de las comidas ingeridas y que un juicio privado termine con una cadena oficial.

VERDAD-VERDADERA

7 de enero de 2013

Es asombrosa la capacidad del líder para doblegar a la realidad. Su voluntad es tan fuerte, que ante ella se rinden no solamente los fieles-silenciosos sino también los hechos. No importa que estos hayan sucedido de otra manera y que todo el país haya sido testigo. Lo que cuenta son las interpretaciones que él va haciendo de ellos hasta llegar a una posición final. Ésta se convierte en la palabra que repetirán textualmente todos esos fieles-silenciosos. En realidad, cada una de las diversas posiciones que él ha ido adoptando hasta llegar a la definitiva se convierte, en su respectivo momento, en la verdad-verdadera y es repetida con entusiasmo y lealtad. Lo hacen en las páginas de la prensa que se regala, en las redes sociales y en los mensajes electrónicos enviados desde direcciones falsas y con emisores clandestinos. Si el líder cambia, ellos dan el recibido al mensaje y se ponen entusiastamente a difundir la nueva versión. Él orden y la dirección de los hechos están determinados por su palabra.

No importa que inicialmente haya sostenido que todo era un invento, que entre medio estaba la prensa corrupta y que era una más de las innumerables conspiraciones que se fraguan más acá o más allá de las fronteras. De un momento a otro, cuando las evidencias se han vuelto demasiado porfiadas (que equivale a decir que la prensa ha mantenido un tema en las primeras planas sin ceder a sus rabietas de los sábados), él no tiene problema en cambiar radicalmente. Es cuando hace el viraje completo, pasa a sostener una posición absolutamente diferente a la que había mantenido férreamente y con la misma voluntad mantiene la nueva. Se apropia del problema, demuestra fehacientemente –con su palabra y nada más, porque no hace falta evidencia alguna- que él fue quien lo descubrió y que será el encargado de combatirlo.

Hay un antecedente histórico que demuestra que esta es una característica de los líderes predestinados para cambiar el mundo. Stalin, el padre de todas las Rusias, tenía en vilo a sus propios fieles-silenciosos que nunca sabían cuál sería la verdad del día. Se acostaban con el pacto con el nazismo y amanecían con la guerra contra ese enemigo de siempre que había sido el nazismo. En la mañana alababan a Kamenev y a Zinoviev hasta saber, en la tarde o en la noche, que debían aborrecerlos y apoyar su condena de muerte porque siempre habían sido traidores. Condenaban a los socialdemócratas europeos hasta el día en que se convertían en los aliados históricos de toda la vida. En fin, la verdad-verdadera venía de la palabra del líder y quien no creyera en ella quedaría fuera de juego (lo que muchas veces equivalía a la muerte).

En su novela *1984*, George Orwell retrató magistralmente esa construcción de la realidad. El Ministerio de la Verdad era el encargado de amoldar la historia de acuerdo a la palabra del Gran Hermano. Los hechos no existen, son lo

que la palabra del líder determina que sean. Es la verdad-verdadera.